

REPUBLICA ARGENTINA
DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
2ª REUNION – Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA ESPECIAL –
MAYO 5 y 6 DE 1993

**Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Luis Alberto Martínez y Carlos Federico Ruckauf**

Secretarios : **doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla**

Prosecretarios **doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale**

DIPUTADOS PRESENTES :	CORCHUELO BLASCO, José M. CRAMARO, Hugo Arnaldo CROSTELLI, Juan Carlos CRUZ, Washington Jesús D'ALESSANDRO, Miguel H. DAUD, Jorge Carlos DE MARTINO, Víctor Amador DURAÑONA Y VEDIA, Francisco de DURRIEU, Marcela Margarita ECHEVARRIA, Luis María FAJARDO, Juan Carlos FALLETTI, Julio César José FELLNER, Eduardo Alfredo FERNANDEZ, Roberto Enrique FERRADAS, Miguel Enrique FESCINA, Andrés Julián FLORES, Rafael Horacio FOLLONI, Jorge Oscar FORNERON, Lino FRIGERIO, Octavio Oscar GALVAN, Raúl Alfredo GAN, Fernando Pascual GARAY, Nicolás Alfredo GARCIA, Pedro Alberto GARCIA CUERVA, Ignacio S. GARGIULO, Pablo GATTI, Héctor Angel GAUNA, Juan Octavio GERMANO, Alberto Raúl GIOJA, José Luis GÓMEZ, José Ernesto GÓMEZ, Roque Julio César GOMEZ CENTURION, Carlos E. GONZALEZ, Alberto Ignacio GONZALEZ CABANAS, Tomás W. GONZALEZ GAVIOLA, Juan H. GREEN, Gustavo Adolfo GUERRERO, Antonio Isaac GUZMAN, María Cristina HARDY, Aníbal Osvaldo HERNÁNDEZ, Antonio María HERNANDEZ, Santos Abel HERRERA, Bernardo Eligio HERRERA, Luis Fernando HERRERA ARIAS, Manuel H. HUMADA, Raúl IBARBIA, José María	IBARRECHE, Julio César IRIBARNE, Alberto Juan Bautista KOTH, Carlos LAMBERTO, Oscar Santiago LARRABURU, Dámaso LECONTE, Ricardo Guillermo LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo LOPEZ de ZAVALIA, Fernando J. LOSADA, Luis Enrique LOUTAIF, Julio César MACHICOTE, Jorge Raúl MAGGI, Juan Alberto MANFREDOTTI, Carlos MANNY, José Juan MAQUEDA, Juan Carlos MARCÓ, Jorge Raúl MARCOLLI, Juan Miguel Angel MARTINEZ, Luis Alberto MATZKIN, Jorge Rubén MENDOZA, Claudio Ramiro MICHELLI, Marco Aurelio MICHITTE, Salomón Antonio MONTEVERDE, Carlos Roberto MOREAU, Leopoldo Raúl Guido MOURE, Juan Manuel MUNIAGURRIA, Marcelo Julio MUÑOZ, Marcelo Bernardo NATALE, Alberto Adolfo NIÑO, Jorge OLIVERA, Enrique José ORQUIN, Leopoldo Manuel ORTIZ PELLEGRINI, Miguel A. PARADA, Alberto PARENTE, Rodolfo Miguel PARRILLI, Oscar Isidro José PEPE, Lorenzo Antonio PESCE, Félix PIERRI, Alberto Reinaldo PIOTTI, Alberto Daniel PURICELLI, Arturo Antonio QUEZADA, Rodolfo Héctor RE, Ricardo Horacio RODRIGUEZ, Raúl Eduardo RODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo B. ROMERO, Carlos Alberto ROMERO, Humberto Antonio ROY, Irma RUCKAUF, Carlos Federico RUIZ, Angel Rafael
-----------------------	---	---

<p>SAADI, Luis Alberto SABIO, Juan Carlos SACKS, Rubén Rodolfo SALUSSO, Horacio Ramón SAMID, Manuel Tulio SANCHEZ GALDEANO, Roque SCELZI, Carlos José SODERO NIEVAS, Víctor Hugo SORIA, Carlos Ernesto SUCARIA, Neyef SUEIRO, Carlos Adolfo TACTA de ROMERO, Emma A. TOMA, Miguel Angel TOPA, Raúl Roque TOTO, Francisco Patricio TROYANO, Silvia Elena URIONDO, Luis Enrique R. VALCARCEL, Juan Manuel VARELA, Néstor Angel VARELA BARRIO, Juan Carlos VARELA CID, Eduardo VENESIA, Gualberto Edgardo VERDU, Mario VICCHI, Raúl Horacio YOMA, Jorge Raúl ZAMORA, Federico ZARACHO, Evelio Argentino ZAVALA, Gilberto Antonio ZICARELLI, Orlando</p> <p>AUSENTE EN MISIÓN OFICIAL: ALGABA, Ernesto Pedro Andrés</p> <p>AUSENTES CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA HONORABLE CAMARA:</p> <p>ALVAREZ, Carlos Alberto BROOK, Mario Carlos CAFIERO, Juan Pablo CAPUTO, Dante Mario DI TULLIO, Héctor Horacio MOLARDO, Elvio Francisco NACUL, Miguel Camel SAADI, Ramón Eduardo SORIA ARCH, José María VANOSI, Jorge Reinaldo</p>	<p>AUSENTES CON AVISO: ABDALA, Germán Darío AGUNDEZ, Jorge Alfredo ALENDE, Oscar Eduardo ALVAREZ GARCIA, Normando M. ARMENDÁRIZ, Alejandro BALESTRA, René Helvecio BASSANI, Angel Marcelo BAYLAC, Juan Pablo BENEDETTI, Jorge Enrique BERICUA, Jorge BISCHOF, Enrique Alberto BRAVO, Alfredo Pedro BREARD, Noel Eugenio BRUNATI, Luis Pedro BRUZZO, Omar Obdulio CARRERAS, Porfirio Mario CASTILLO, Oscar Aníbal CAVALLARI, Juan José CEBALLOS, Walter Alberto COSSOS PEREZ, Juan Nicolás D'AMBROSIO, Angel Mario DUSSOL, Ramón Adolfo ELIAS, Angel Mario ESPECHE, Alberto Luis ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E. FELGUERAS, Ricardo Ernesto FERNANDEZ, Roberto Carlos FERNÁNDEZ GILL, Guillermo C. FERREYRA, Eduardo Mario FIGUEROA, Pedro Octavio FONTELA, Moisés Eduardo GALLO, Orlando Juan GARCÍA de NOVELLI, María C. GOLPE, Néstor Lino GONZALEZ, Luis Mario GONZALEZ GASS, Gabriela M. GUERRERO, Luis Serafin IGLESIAS, Evaristo Constantino ITURRE, César Eusebio del Valle JALIL, Luis Julián KELLY, Elsa Diana Rosa LOPEZ, Alcides Humberto LYNCH, Carlos Alberto MACHADO, Oscar Alfredo MARCOS, Ricardo Ernesto MARELLI, Mabel G. de MARTÍN de DE NARDO, Marta</p>	<p>MARTINEZ RAYMONDA, Rafael MENDOZA, Martín MENEGHINI, Javier Reynaldo MOLINAS, Ricardo Francisco NIKISCH, Hugo Víctor NOVAU, Pedro José ORGAZ, Carlos Alfredo ORTIZ MALDONADO, Gastón H. PAROLA, José María PERALTA, Aníbal Pedro PICCININI, Ana Ida PINTO Guillermo PRAT, Alfredo Ernesto PROFILI, Gerardo Pedro PRONE, Alberto Josué RAIMUNDI, Carlos Alberto RODRIGO, Esteban Joaquín RODRÍGUEZ, José ROIG, Angel SALVADOR, Daniel Marcelo SANTIN, Eduardo SEGUI, Héctor Miguel SPINOSA, Augusto Juan STORANI, Conrado Hugo SUREDA, Angela Genónima VÁZQUEZ, Ricardo Héctor VAZQUEZ, Roberto ZAMBIANCHI, Carlos ZAMORA, Luis Fernando</p> <p>AUSENTE CON RENUNCIA PENDIENTE DE ACEPTACION DE LA HONORABLE CÁMARA:</p> <p>GONZALEZ, Oscar Félix</p>
---	---	---

<p>SUMARIO</p> <p>1 Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la modificación del Sistema Nacional de Previsión Social (31-PE.-92). (Pág. 247)</p> <p>...</p>	<p>3. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario.</p> <p>....</p> <p>6. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1 y 3 de este sumario. (Pág. 264).</p> <p>....</p>
--	--

8. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1, 3 y 6 de este sumario. (Página 267).

....

10. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1, 3, 6 y 8 de este sumario. (Página 268).

....

14. Continúa la consideración del asunto a que se refieren los números 1, 3, 6, 8 y 10 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 291).

16. Apéndice:

...

C. Inserciones solicitadas por los siguientes señores diputados:

1. Baglini. (Pág. 368)
2. Martínez Raymonda. (Pág. 371)
3. Sánchez Galdeano. (Pág.373)
4. Hardy. (Pág. 376)
5. Sabio. (Pág. 377)
6. Gómez Centurión. (Pág. 381)
7. Topa. (Pág.381)
8. Bravo. (Pág. 383)
9. Bisciotti. (Pág. 385)
10. Guerrero. (A.I.). (Pág. 386)
11. Loutaif. (Pág. 392)
12. Folloni. (Pág. 396)
13. Michelli. (Pág. 399)
14. Becerra. (N.E.). (Pág. 400)
15. Varela. (Pág. 404)
16. Beltrán. (Pág. 406)
17. Rodríguez Sañudo. (Pág 403)
18. Estévez Boero. (Pág. 408)
19. Soderó Nievas. (Pág. 410)
20. Albamonte. (Pág.494)

...

-En Buenos Aires, a los cinco días del mes de mayo de 1993, a la hora 16 y 28:

1

SISTEMA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar en particular el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social¹.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: teniendo en cuenta que hoy debemos iniciar el tratamiento en particular del proyecto de ley sobre modificación al Sistema Nacional de Previsión Social, voy a proponer que se comience a tratar cada uno de los artículos y que las votaciones se pospongan para el momento en que haya quórum. Se trata de un procedimiento que ha utilizado la Cámara en varias oportunidades a efectos de avanzar en el tratamiento de los asuntos sometidos a consideración del cuerpo. Es en tal sentido que solicito el asentimiento de la Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: nosotros no vamos a prestar nuestro acuerdo para que la votación de los artículos se realice al final del tratamiento en particular del proyecto de ley. Por el contrario, los mencionados artículos deberán ser votados de inmediato y sucesivamente una vez concluido el tratamiento en particular de cada uno de ellos. Por lo tanto, no apoyamos la moción formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: quisiera que el señor diputado por Mendoza aclare a quién se refiere cuando habla de "nosotros".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: si el señor diputado preopinante desconoce a los miembros que integran esta Honorable Cámara, es un problema de él. Sabe muy bien en nombre de quién estoy planteando la moción. Es más, nunca le

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 28 y 29 de abril de 1993. (Pág. 6830;)

he faltado el respeto al señor diputado en particular ni a su bloque en general. De manera que sería mucho más decoroso que tratara a los miembros del cuerpo como se merecen.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en particular el título 1, comprensivo de los capítulos I a IV, artículos 1º al 15, del proyecto aprobado en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. - Señor presidente: daré lectura de las propuestas de modificación que se han efectuado en este título del Orden del Día N° 992.

En el segundo párrafo del artículo 1º se suprime la palabra "obligatoria".

Sr. Vicchi. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parrilli. — No, señor diputado.

En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 1º quedaría redactado de la siguiente manera: "Conforman este sistema: 1) Un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto, en adelante también régimen de reparto; y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también régimen de capitalización".

Sr. Matzkin. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parrilli. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: nuestro bloque que había arbitrado los medios para que en cada una de las bancas estuvieran disponibles las modificaciones ya impresas que se van a proponer a fin de que los señores diputados tuvieran un acabado conocimiento de ellas. En todo caso, por Secretaría se podrían disponer los medios para que las copias fueran distribuidas a todos los legisladores.

Sr. Presidente (Pierri). - Se está procediendo en ese sentido, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente...

Sr. Vicchi. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parrilli. - Una vez que concluya con la lectura que voy a hacer, le concederé la interrupción señor diputado.

También hacemos un agregado con relación al punto 1 del inciso a) del artículo 2º por el cual incluimos, además de los funcionarios del Estado nacional, a los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "Los

funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo en cualquiera de los poderes del Estado nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales y obras sociales del sector público, con exclusión del personal militar de las fuerzas armadas y del personal militarizado o con estado policial de las fuerzas de seguridad y policiales;"

Este es el texto con que debe quedar redactado el punto 1º del inciso a) del artículo 2º. Estas constituyen la totalidad de las modificaciones que proponemos hasta el artículo 15.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: creo que fuimos sumamente claros. El artículo 242 del reglamento de esta Cámara plantea que el tratamiento en particular se debe hacer en forma pormenorizada y artículo por artículo.

Aquí hemos pasado del artículo 1º al artículo 2º, y nuestro bloque ni siquiera conoce cuáles son las reformas que se proponen para el artículo 1º. Incluso, no conocemos la redacción de dicho artículo.

Entonces, si toda la discusión ha flotado sobre un despacho que prácticamente no existe y el intento de cambio a este dictamen se realiza en el seno del bloque justicialista, ¿qué culpa tenemos de asistir a esta sesión y desconocer todo esto?

Por ello planteamos un mecanismo mínimo: se debe discutir y votar artículo por artículo. Con respecto al artículo 1º, queremos saber cómo pretenden que quede redactado sin la participación de la oposición. Por lo menos, solicito que se lea por Secretaría y que se vote.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Martínez. - Señor presidente: simplemente deseo aclarar dos cuestiones respecto del planteo del señor diputado Vicchi.

En primer lugar, lo que se está tratando en esta sesión no es desconocido ni por el señor

diputado Vicchi ni por los bloques intervinientes en la composición de la Honorable Cámara, habida cuenta de que se está trabajando sobre un orden del día impreso, que cumplió su tiempo reglamentario y que fue arduamente debatido por algunos señores diputados fuera del recinto, y por otros dentro de él. Por lo tanto, no se puede aducir desconocimiento de lo que está en consideración.

Sr. Moure. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Martínez. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente - (Pierri). - Para una interrupción, tiene la palabra el. señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moure. - Señor presidente: para el mejor desenvolvimiento de esta sesión y para tornar prolijo un tema que no está siendo desarrollado con la corrección que debería tener una norma de esta naturaleza y de tanta importancia, pregunto: ¿estamos tratando el dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda del día 24 de febrero de este año, o estamos tratando modificaciones que no sabemos en definitiva en qué momento fueron consideradas y por quién, porque hasta donde yo sé no se ha creado ninguna otra comisión? La CAL desapareció, así tengo entendido, y las comisiones pertinentes para tratar las modificaciones son las que recién mencioné; por ahí es donde debieron pasar estas modificaciones que son realmente sustantivas.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa, en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Martínez. - Señor presidente: primero voy a terminar de contestarle al señor diputado Vicchi. Estamos trabajando según el criterio adoptado por este cuerpo -que prestó su asentimiento- en la sesión en la que se iniciara el tratamiento de este tema; esto es, tratar por capítulos el dictamen contenido en el Orden del Día N° 922.

En cuanto al interrogante formulado por el señor diputado Moure, voy a separar la verdad que surge desde el punto de vista formal de la que surge desde la realidad, según lo acontecido en la reunión anterior. En esa oportunidad se alteró incluso el normal desenvolvimiento de la lista de oradores y, a pedido del bloque de la Unión Cívica Radical, en el cuarto intermedio que tuvo lugar en dependencias de la Presidencia de esta Cámara, se brindó un exhaustivo informe de todas las reformas que acompañarían el Orden

del Día N° 922.

Nuestro bloque dio ese informe y se originó un debate de cuatro horas. Se brindaron todas las aclaraciones surgidas con motivo de inquietudes de todos los diputados, e incluso pertenecientes al bloque de la Unión Cívica Radical.

Por eso es que ahora no puede utilizarse la formalidad cuando ella ha sido suplida por todas las convenciones que se han venido llevando adelante para que hoy podamos estar tratando este proyecto de ley.

En consecuencia, quienes vamos a trabajar en la consideración de este dictamen que tanto costó traer a este recinto, no estamos dispuestos a aceptar argucias, formalismos o actitudes de dobleces, como ser, entrar al recinto cuando hay quórum y retirarse cuando hay que votar, pedir la palabra y utilizar el tiempo que legítima y éticamente no corresponde, si bien lo hemos aceptado como una metodología de trabajo político del bloque de la Unión Cívica Radical, pero que de ninguna manera aceptaremos como obstáculo para el tratamiento de este proyecto de ley.

2

PLANTEAMIENTO

Pasa a 255

3

SISTEMA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Galván. — ¡Pido la palabra por haber sido aludido!

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia informa que luego de que hable el señor diputado por Buenos Aires le va a otorgar el uso de la palabra a todos los señores diputados que la soliciten, aclarando que hay muchos anotados en la lista de oradores.

Sr. Ibarbia.- Señor presidente: me voy a referir al título I del proyecto de ley aprobado en general, que abarca los artículos 1° al 15.

Voy a proponer dos modificaciones. Una de ellas consiste en la eliminación de los trabajadores autónomos como contribuyentes...

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia tenía entendido que el señor diputado por Buenos Aires se iba a referir al tema que se estaba discutiendo.

Sr. Ibarbia. - Señor presidente: fui citado a las 14 y 30 para discutir en particular el proyecto de ley sobre modificación al sistema nacional de previsión social.

No hablé durante la discusión en general, pero nuestro bloque advirtió que íbamos a proponer

modificaciones durante el tratamiento en particular. De manera que si la Cámara entiende que no vamos a discutir en particular este proyecto, me retiraré del recinto,

Sr. Presidente (Pierri).- Continúe en el uso de la palabra, señor diputado.

Sr. Ibarbia. - Decía, señor presidente, que son dos las objeciones. La primera se vincula a la idea de suprimir a los trabajadores autónomos como contribuyentes obligatorios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, y la segunda está referida al sistema de aportes y contribuciones para los trabajadores en relación de dependencia, respecto de lo que propongo que se supriman las contribuciones de los empleadores. A continuación, abundaré sobre estos aspectos.

Objeto sustancialmente el sistema de reparto. Ya el mensaje del Poder Ejecutivo sostiene que el sistema de reparto está cargado de inequidades. Esto es cierto, porque como allí se dice: "La disociación entre los aportes individuales y los beneficios da lugar, en efecto, a una diversidad de situaciones de marcada inequidad, ya que los haberes no guardan relación con la corriente íntegra de aportes. Así, individuos que han aportado durante diferente número de años podrían obtener igual beneficio, mientras obtengan ingresos similares en los últimos años y ambos superen el número mínimo de años de aporte requerido por ley."

Este sistema de reparto empeora cuando -como ocurre en forma obligatoria y extendida a todos los trabajadores- se le incorporan los autónomos a partir de la ley 18.038, ya que estos últimos contribuyen en forma esporádica al sistema de previsión y de tiempo en tiempo el gobierno a cargo de su administración, compelido por necesidades financieras, otorga blanqueos, moratorias o beneficios para que los trabajadores afiliados obligatoriamente vuelvan a entrar en la cadena de contribuyentes del sistema de reparto.

No vale la pena abundar en estas argumentaciones porque en estos días el Poder Ejecutivo ha recurrido por enésima vez al procedimiento del blanqueo, que precisamente pone de manifiesto esta dificultad: la de fiscalización de las percepciones a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Agrega el mensaje: "Excepto que se disponga de un fuerte poder de policía capaz de detectar y castigar a quienes no cumplen con sus obligaciones de aporte y contribución previsional, la evasión es, en cierta manera un producto natural del sistema de reparto." Esto lo sostiene el propio Poder Ejecutivo.

En atención a estos fundamentos propongo que para que el poder de policía pueda ejercerse con realismo y con absoluta efectividad se concentre en las contribuciones que van a hacer los trabajadores en relación de dependencia. Respecto a ello la historia demuestra que se ha dado cierta efectividad con relación a la recaudación de los aportes y contribuciones correspondientes. A los trabajadores autónomos sugiero que se los incluya dentro de la categoría mencionada en el artículo 3º del proyecto, vinculado a la incorporación voluntaria, como un incentivo que inmediatamente explicaré.

En conclusión propongo que se supriman los incisos *b) y d)* del artículo 2º y que se incorporen dichos incisos al artículo 3º, efectuándose las correcciones correspondientes que siguen toda vez que se refieren a los trabajadores autónomos. Ergo, en el artículo se deberá decir "Los trabajadores autónomos que se incorporen voluntariamente de acuerdo a lo que se establece en el artículo 3º...", y así sucesivamente en cada uno de los artículos en que tenga qué observarse el texto en función de mi propuesta.

La segunda idea es que se supriman las contribuciones a cargo de los empleadores en lo que atañe a los trabajadores en relación de dependencia. Hay un error bastante difundido: pensar que ellas son efectivamente contribuciones de los empleadores, lo cual es falso; las así mal llamadas -entre comillas- contribuciones de los empleadores son una parte del salario del trabajador que el empleador no le paga, girándola directamente a la caja de jubilaciones.

Propongo que se elimine esa ficción y que el aporte del trabajador pase a ser directamente el 27 por ciento, igual que el aporte del trabajador autónomo. Así no habrá diferencias entre el trabajo en relación de dependencia y el realizado en forma autónoma, salvo que el trabajador autónomo tendrá la opción de estar o no dentro del sistema.

Entonces, para que los trabajadores autónomos tengan un incentivo a incorporarse al sistema y no haya dificultades para financiar el régimen previsional sugiero que se agregue un artículo en el capítulo de disposiciones transitorias, que diga que los aportes de los trabajadores, tanto autónomos...

Sr. Galván. -- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Ibarbia. — No, señor diputado, pues no le completado mi idea. Me parece que la interrupción del señor diputado podría referirse a un aspecto que no ha comprendido. Si me deja completar mi exposición, podrá hacer las observaciones que estime pertinentes.

Los aportes de los trabajadores, tanto en relación de dependencia como autónomos -aquí no hago distinciones de ellos- serían en todos los casos deducidos como gastos incurridos para obtener el ingreso en la declaración del impuesto a las ganancias y considerados como pagos a cuenta de dicho gravamen, sin que los saldos a favor de los contribuyentes pudiesen ser trasladados a ejercicios posteriores.

Así los trabajadores autónomos encontrarían un incentivo para incorporarse al régimen previsional instituido en el artículo 3º, de acuerdo con la propuesta que hago; ya que los aportes que efectuasen serían considerados como pagos a cuenta del impuesto a las ganancias. De esta manera se incorporarían voluntariamente al sistema previsional y facilitarían su financiamiento; y en el caso de los trabajadores en relación de dependencia desaparecería esta ficción de que el empleador paga una contribución.

Entonces un decreto del Poder Ejecutivo tendría que corregir las remuneraciones que están percibiendo los trabajadores en relación de dependencia, a fin de que esta nueva condición de efectuar aportes por el 27 por ciento de su total de ingresos no signifique una disminución de su salario de bolsillo actual, cuya mejora estará dada por las reducciones que puedan determinarse en el futuro sobre los aportes que se hagan al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Por ello propongo que se diga que los aportes serán de hasta el 27 por ciento, indicándose que podrán ser menores por una decisión posterior del Poder Ejecutivo en caso de que mejore el financiamiento del sistema previsional.

Entonces, como consecuencia de esta reforma, debería modificarse el inciso d) del artículo 12, donde dice que es obligación de los empleadores depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior, las contribuciones a su cargo. Lo mismo ocurre con otras disposiciones similares que están contenidas en el capítulo III.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Galván. — Había solicitado la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). - Está anotado en la lista de oradores, señor diputado.

Sr. Fescina. — Yo asistí inicialmente a la controversia con respecto a la continuidad o no del cuarto intermedio. Al margen de las razones, creo que debemos plantearnos si corresponde o no debatir en particular todos los artículos en conjun-

to y luego votar. Pregunto esto porque el que nos ocupa es un proyecto de ley con permanentes remisiones entre sus diversos artículos. Si se debate en particular en forma conjunta y luego en el momento de la votación se desecha algún artículo determinado, se habrá modificado la estructura del proyecto.

En consecuencia, tenemos que contemplar la posibilidad cierta de tratar artículo por artículo con sus respectivas votaciones, para tener la certeza de lo que estamos discutiendo.

Pido a la Presidencia que nos aclare la cuestión, porque si tenemos que hacer un debate en conjunto, solicitaré que se me anote para hacer uso de la palabra en los artículos en los que tengo observaciones que formular.

Estamos frente a un problema de orden práctico y no de orden político, parlamentario o procesal. No podemos hacer observaciones en particular si no tenemos la certeza de que ese artículo perdurará luego de una votación.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Usted se refiere a algunos de estos artículos?

Sr. Fescina.- Me refiero al artículo 2º inciso a), punto 1; al artículo 3º, inciso b), punto 4...

Sr. Presidente (Pierri). - Entonces, tiene la palabra, señor diputado.

Sr. Fescina. - Primero tiene que aclarar mi inquietud, señor presidente,

Sr. Presidente (Pierri). — Se están considerando los artículos 1º a 15. En este sentido ya se han estado expresando diversos señores diputados. Si usted quiere puede referirse a algunos de esos artículos y luego la comisión se expedirá sobre las propuestas de modificación.

Sr. . Fescina.- Ya que el presidente cartabona y limita la discusión, no tengo otra alternativa que aceptar ese procedimiento para evitar que después no se me permita opinar.

4

MOCION DE ORDEN

5

MOCION

Pasa a 264

6

**SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL****(Continuación)**

Sr. Presidente (Pierri). — Prosigue la consideración del dictamen sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Señor presidente: días pasados felicité al señor diputado Martínez, quien ejercía en ese momento la Presidencia, y reconozco que quien ahora la ejerce también se comportó adecuadamente en el momento de conducir este debate. Pero lo que se ha votado no es una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Ha sido una moción concreta, señor diputado. Es la metodología que se ha utilizado cada vez que se la plantea en esos términos.

Sr. Fescina. — Habíamos empezado bien.

Sr. Presidente (Pierri). — Igual situación se da cuando se pide la palabra para plantear una cuestión de privilegio y se introduce un discurso.

Sr. Fescina. — Pero el discurso no se vota, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega al señor diputado que continúe haciendo uso de la palabra con relación al tema en debate.

Sr. Fescina. — Señor presidente: se encuentran bajo análisis los artículos 1º a 15.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega a los señores diputados que permanezcan en sus bancas, y recuerda al señor diputado Alvarez Echagüe que debe solicitar autorización a la Presidencia para retirarse del recinto.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Con relación al punto 1 del inciso

a) del artículo 2º debo decir que aparece como producto de las innovaciones de la trasnoche de días pasados -no en el proyecto originario ni en el preámbulo de la iniciativa gubernamental- la incorporación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Me opongo a esta innovación, porque si la norma no se ha entrometido con los gobiernos de provincia, que tienen el legítimo derecho de legislar sobre los sistemas jubilatorios de sus empleados públicos, no cabe argumentar la excusa de que el Congreso es legislador del municipio para realizar nosotros tal incorporación.

La Municipalidad es en los hechos también una gobernación, aun cuando constitucionalmente no lo sea. Históricamente tiene un sistema jubilatorio. Hay decenas de miles de empleados que están incluidos en el sistema previsional de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que alguien haya descubierto que quizás se están escapando 80 o 90 mil víctimas del sistema de capitalización y ahora quiera incorporarlos de rondón mediante esta modificación.

Además, toda innovación de esta naturaleza agrava aún más a los jubilados nacionales, porque todos sabemos que la caja municipal presenta una situación deficitaria. En consecuencia, vamos a incorporar un sistema deficitario al ya deficitario régimen jubilatorio, lo que empeorarán la situación de los jubilados nacionales. Pongamos cordura en el tema. No es cuestión de que respetemos de la General Paz para afuera y no hagamos lo mismo de la General Paz para adentro. Efectuemos las cosas como corresponde.

Solicito a la comisión que pongamos sensatez y que no innovemos en esta materia para incorporar 80 mil víctimas más al sistema de capitalización. Pido a la comisión que responda ante cada observación.

Sr. Presidente (Pierri). — La comisión, siguiendo la metodología utilizada hasta el presente va a responder a las propuestas o modificaciones formuladas por los señores diputados al término de las exposiciones de todos los legisladores.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: simplemente quiero saber si el señor diputado Fescina interpreta que el proyecto perjudica a los trabajadores municipales, porque nuestra opinión es contraria a esa posición. No es malo que aclaremos temas de esta magnitud, porque hablamos del conjunto

de los trabajadores. La información que tenemos indica que los trabajadores municipales de la Capital Federal quieren su inclusión en este sistema.

Sr. Fescina.- Pido la palabra para una aclaración porque he sido aludido.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. - Señor presidente: no he visto ninguna manifestación de la Unión de Obreros y Empleados Municipales que venga pregonar por la incorporación al proyecto.

En segundo lugar, soy diputado por la Capital Federal como el señor diputado Ruckauf, y no queremos seguir siendo *kelpers*. No podemos, elegir al intendente y, sin embargo, nos eligen el sistema jubilatorio. Hay un Concejo Deliberante que todavía funciona y que constituye el cuerpo colegiado y legislativo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. No vengamos a arrogarnos poderes ajenos y no tratemos a los porteños como *kelpers*.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén, quien va a responder en nombre de la comisión.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: aunque sea brevemente, voy a responder a las propuestas formuladas por el señor diputado Ibarbia, porque esta comisión no las va aceptar.

En primer lugar, con respecto a crear un régimen voluntario para los trabajadores autónomos en lugar de obligatorio, creemos que el trabajador lo es durante toda su vida. Posiblemente, durante algunos años de ella trabaje en relación de dependencia y otros lo haga en forma autónoma. Así, cuando llegue a los 65 años de edad, tendrá que considerar todos sus años de trabajo y necesitará contar con por lo menos, 30 años de aportes para tener derecho a la jubilación. Al considerar una división entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores autónomos vamos a perjudicar a muchos trabajadores que por el hecho de ser autónomos quizá dejen de aportar, cuando a lo mejor durante 15 o 20 años estuvieron en relación de dependencia y luego no pueden llegar a tener un haber previsional porque les falta el mínimo de aportes requerido.

Por otro lado, el sistema integrado debe ser obligatorio porque ello representa la garantía para que pueda funcionar. Ningún trabajador que tenga 20 años de edad seguramente estará pensando que alguna vez tendrá 65 años y necesitará el haber previsional.

Por estas razones, sostenemos el principio de la obligatoriedad para con el sistema tanto para los trabajadores en relación de dependencia como para los autónomos, con la opción que luego

tienen de ir al sistema de capitalización o de mantenerse en el sistema de reparto.

La segunda propuesta del señor diputado Ibarbia estuvo referida a la supresión de los aportes patronales, asumiendo el 27 por ciento los trabajadores.

En primer lugar, esto sería posible en la medida en que haya un aumento del 16 por ciento para todos los sueldos; sería la única manera de evitar que una carga del empleador sea transferida al trabajador, pero no creemos conveniente instrumentar esto en una ley. Si suprimimos el aporte del empleador disminuiríamos el costo laboral pero no beneficiaremos el salario del trabajador.

En segundo lugar, en uno de los últimos artículos del proyecto facultamos al Poder Ejecutivo para que, en la medida en que aumente la recaudación del sistema previsional, disminuya la carga patronal. Incluso, nosotros pensamos que éstas son políticas que el Poder Ejecutivo debe tener para promocionar el empleo ante determinadas crisis que pueden presentarse en economías regionales, o donde el aporte patronal sea diferenciado o bien se vaya reduciendo, como está planteado casi al final del proyecto, cuando se prevé el caso de un aumento en la recaudación del impuesto al valor agregado.

Finalmente, la comisión no acepta la propuesta del señor diputado Fescina de volver al texto original. En este sentido, creemos que tenemos la obligación de legislar para los empleados y funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos se encuentran dentro de nuestra competencia legislativa.

No viene al caso la comparación con las provincias. El señor diputado Fescina podrá estar o no de acuerdo con nuestra posición. No pretendo que comparta esta opinión, simplemente le transmito las razones por las que no aceptamos su propuesta. No se puede comparar a la ciudad de Buenos Aires con las provincias, porque evidentemente ellas tienen facultades propias, en las que no pretendemos entrometernos.

Cuando la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea una provincia, podrá entonces darse el caso que plantea el señor diputado. Si quiere una aclaración no tengo inconveniente en dársela, pero le ruego que la realice de manera reglamentaria.

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado Fescina le está solicitando una aclaración.

Sr. Parrilli.- No tengo inconveniente, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri).-Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina..- ¿En mérito a qué cree usted que los empleados municipales tienen un sistema jubilatorio propio, si no es en función del reconocimiento del federalismo incluso en esta materia de carácter social? ¿O usted cree que el sistema jubilatorio municipal surgió de un repollo? No me venga con el argumento de que el Congreso representa al pueblo de la Capital.

Sr. Presidente (Pierri). - Diríjase a la Presidencia, señor diputado.

Sr. Fescina. — Ya he concluido, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Parrilli. — Simplemente reitero lo que ya dije, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. - Señor presidente: deseo pedir a la comisión que reconsidere la respuesta a la observación del señor diputado Fescina y que en el tema de la inclusión de los empleados municipales no se introduzcan modificaciones al proyecto.

7

PRONUCIAMIENTO

Continúa en 267

8

SISTEMA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). —Prosigue la consideración en particular del título I del proyecto aprobado en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Señor presidente: con la actual redacción del artículo 3° inciso b) punto 4 que dan excluidas solamente las cajas complementarias provinciales para profesionales. Esto le concierne muy especialmente a usted, señor presidente, que es de la provincia de Buenos Aires, por el ejemplo que voy a dar. Con el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social hemos recibido a los representantes de la caja de profesionales para martilleros —autorizada por ley de la provincia de Buenos Aires—, y obviamente su actividad no se engarza en el concepto de profesionales...

Sr. Presidente (Pierri).- Ruego a los señores diputados que presten su colaboración permanecido sentados en sus bancas.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. -Decía, señor presidente, que a

usted le concierne, como hombre de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que según la actual redacción del proyecto sólo quedan excluidas en las provincias las cajas complementarias de profesionales. También existen cajas complementarias autorizadas por leyes provinciales como la caja de martilleros y corredores, de modo tal que si no agregamos la expresión "y no académicas" quedarían obligatoriamente comprendidas con una doble tributación,

Mi propuesta es que luego de la palabra "profesionales" se agregue "y no académicas vigentes al momento de sancionada esta ley". Las cajas futuras quedarán comprendidas, pero las que ya están autorizadas por ley de la Legislatura provincial deben estar computadas en esta excepción.

En cuanto al artículo 7° —esto concierne particularmente a los señores diputados de extracción sindical—, que es el que enumera las remuneraciones que no deben computarse como salario a los efectos de la tributación tanto del empleador como del empleado, que están definidas en el primer párrafo, cabe aclarar que en el artículo 6° se define qué es remuneración. La primera parte del artículo 7° determina lo que no es remuneración y el último párrafo supedita a la reglamentación la posibilidad de incorporar otras prestaciones que no deben computarse como remuneración. Esto, como todos sabemos, tiende a ampliar la gama de la evasión y del blanqueo no contributivo de prestaciones que habitualmente hacen los empleadores como la entrega de tickets para almorzar o para comprar en supermercados. A mí me parece altamente riesgoso diferir hasta la reglamentación la posibilidad de incorporar nuevos ítem que no sean contribuyentes al sistema previsional porque luego los van a extender a otras actividades en virtud de que existen algunos convenios colectivos de trabajo que a los efectos de calificar algo como remuneración o no remuneración también hacen un diferimiento a lo que computa el sistema previsional.

Por los motivos expuestos solicito que se suprima el último párrafo del artículo 7°.

Sr. Presidente (Pierri). - ¿Acepta la comisión?

Sr. Parrilli - La comisión va a aceptar las propuestas realizadas por el señor diputado por la Capital, pero le solicitaría que reitere la propuesta efectuada en primer término.

Sr. Fescina. - En el artículo 3°, inciso c), punto 4°, luego de decir "...uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales ...",

agregar "como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley...".

Sr. Parrilli. - La comisión acepta esa propuesta del señor diputado por la Capital, así como la sugerencia de suprimir el segundo y último párrafo del artículo 7º, que comienza con la palabra "Asimismo".

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título 1, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Hardy. - Dejo constancia en la versión taquigráfica de mi voto negativo.

Sr. Presidente (Pierri). - Se tendrá en cuenta, señor diputado.

En consideración el título II, que comprende los artículos 16 al 36.

9

MOCION DE ORDEN

10

SISTEMA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). - Prosigue la consideración en particular del dictamen sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social

Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: en el título II, que comprende los artículos 16 al 37, vamos a proponer las siguientes modificaciones al dictamen. En el artículo 17 se incorpora el inciso j) que dice lo siguiente: "Los aportes correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción prevista en el artículo 29 bis".

En el artículo 18 se incorpora el inciso e) que dice así: "Prestación adicional por permanencia".

Se suprime del segundo párrafo del inciso a) del artículo 24 lo siguiente: "publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)"; con lo cual quedaría redactado de esta manera: "A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de carácter oficial".

Sr. Presidente (Pierri): - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. - Señor presidente: solicito al señor diputado preopinante que aclare el significado del inciso e) que se incorporará al artículo 18 que dice: "Prestación adicional por permanencia"

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: la explicación solicitada por el señor diputado por la Capital será brindada por el señor diputado Sueiro cuando enuncie las modificaciones que pretendemos realizar en un artículo posterior en el que está instrumentado el punto mencionado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital,

Sr. Sueiro. — Señor presidente: en la consideración en general dijimos que una de nuestras grandes preocupaciones estaba vinculada con el costo del seguro, que conforme a estudios que habíamos realizado se estimaba en un 2,5 por ciento del aporte que harían los trabajadores.

Este tema nos preocupaba profundamente porque significaba que si el trabajador optaba por el régimen de capitalización del 11 por ciento que debía aportar se tenía que descontar un 2,5 por ciento de seguro y eventualmente un 1 por ciento por comisión, con lo cual el aporte real sería del 7,5 por ciento lo que, a nuestro juicio, representaba una merma desproporcionada del monto a capitalizar.

Por ello, a través del artículo 27 proponemos un sistema que reduce significativamente el costo del seguro, ya que estimamos que no puede exceder el 0,6 por ciento del porcentaje que el trabajador destina a la capitalización. El artículo 27 quedaría redactado de la siguiente manera: "Estarán a cargo del Régimen Previsional Público las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad hasta la suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria que correspondiere al momento de producida la contingencia.

"También estará a cargo de dicho régimen la pensión por fallecimiento del beneficiario de algunas de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 18.

"Las prestaciones indicadas en los párrafos precedentes se regirán para su otorgamiento por los mismos requisitos que para dichas prestaciones establece el régimen de capitalización.

"El cálculo de la Prestación Básica Universal se efectuará de acuerdo al artículo 20 inciso a) considerando como años de servicio la suma de los años de servicios con aportes anteriores a la invalidez o el fallecimiento más los años futuros hasta la edad establecida en el artículo 19 inciso a) o la establecida en el artículo 36, si correspondiere.

"En ningún caso la prestación establecida en este artículo será superior al haber de las prestaciones establecido en el artículo 28.

"Las normas reglamentarias establecerán el

procedimiento a seguir relacionado con la determinación de la invalidez en el caso de los afiliados que hubieran ejercido la opción por el régimen de reparto, el que deberá ser compatible en lo pertinente, con lo dispuesto en el capítulo II del título III.

"Las prestaciones por invalidez o fallecimiento a otorgarse a los beneficiarios que opten por permanecer en el régimen de reparto, serán equivalentes a las que se establecen en los artículos 96 y 97."

Otra modificación se vincula con el artículo 29 bis. Como ya lo manifestáramos en ocasión del debate en general, era preocupación de distintos sectores, y en particular de la Confederación General del Trabajo, que los trabajadores pudieran tener la opción de continuar en el régimen de reparto o decidir libremente incorporarse a un régimen de capitalización. Hemos recogido esa opinión que entendemos es muy importante porque de alguna manera también traduce la posición de diversos sectores políticos que venían sosteniendo la necesidad de que el trabajador pudiera optar por permanecer en un régimen de reparto. Por ese motivo hemos redactado un nuevo artículo, el 29 bis, al que pasaré a dar lectura.

Sr. Fescina. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. - Quisiera preguntar al señor diputado Sueiro si lo que está informando figura en la publicación que hoy hemos recibido o es algo distinto.

Sr. Presidente (Pierri)- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. - El artículo 27 que acabo de leer no está incluido en la publicación a que ha hecho referencia el señor diputado. Sí en cambio figura el artículo 29 bis, que ha sufrido una modificación y que me permitiré leer. Dice así: "Artículo 29 bis: Opción de los afiliados. Prestación adicional por permanencia: Las personas físicas comprendidas en el artículo 2º podrán optar por no quedar comprendidas en las disposiciones establecidas en el título III del presente libro. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para el ejercicio de la mencionada opción. La mencionada opción producirá los siguientes efectos para los afiliados: a) Los aportes establecidos en el artículo 38

serán destinados al financiamiento del régimen previsional público; b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción por parte del régimen público de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 18. El haber mensual de esta prestación se determinará computando un 0,85 % por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria. Para acceder a la prestación adicional por permanencia los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23; c) Las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad serán financiadas por el régimen de reparto acorde a lo establecido en el capítulo IV del título III, independientemente de la fecha de nacimiento del afiliado; d) A los efectos de aspectos de movilidad, prestación anual complementaria y otros inherentes a la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la prestación compensatoria".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano. — Señor presidente solicito a los miembros de la comisión la introducción de una reforma al artículo 19 y consecuentemente al 36, vinculada con la edad jubilatoria de la mujer.

Es por todos conocido que la naturaleza humana diferencia a ambos sexos por el desgaste que provocan en la mujer la maternidad, la crianza de los hijos, la primera educación que éstos reciben en el hogar a través de ella, y también la circunstancia de vida derivada del divorcio, en la que la mujer queda con el peso del hogar sin contar con la responsabilidad de su cónyuge.

Sintéticamente, y fundada en situaciones reales por todos ustedes conocidas ya que han sido traídos a la vida por una mujer, solicito se modifique el artículo 19 que iguala a ambos sexos en edad jubilatoria estableciendo la diferencia de 60 años para la mujer y 65 para el hombre.

Por su parte, en el artículo 36, solicito que consecuentemente se respete el tope de 60 años para el caso de las mujeres.

Esta es la solicitud que formulo a la comisión en nombre de las mujeres argentinas.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — En la consideración de este capítulo intervendré para proponer modificaciones a los artículos 19, 21, 24; 29 y 29 bis.

Con respecto al artículo 19 adhiero a lo expresado por la señora diputada por Salta. Para abreviar la discusión simplemente voy a señalar,

que tengo en mi poder una síntesis del diálogo político que se efectuó en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social para discutir las propuestas jubilatorias. Dicha síntesis fue entregada por el secretario Schultess a los participantes y tenía el siguiente título: "Edad mínima para acogerse a los beneficios previsionales".

En la parte relativa a las observaciones se dice lo siguiente: "Se manifestaron por la conveniencia de mantener el nivel mínimo de edad actualmente vigente para obtener los beneficios previsionales: MID y MODIN.

"Por aumentar la edad mínima elevándola a 65 años para ambos sexos: ADEBA, Cámara Argentina de Comercio, CADEMA, COPAL, Partido Liberal de Corrientes, Unión Argentina de la Construcción, UDECA, UIA, UCEDE y UDES.

"Por 65 años los hombres y 60 las mujeres: Partido Federal, UCR y Partido Justicialista."

De manera que voy a acompañar al bloque Justicialista en la propuesta formulada por la señora diputada por Salta, lo que coincide con el planteo efectuado en las reuniones llevadas a cabo por la Comisión de Diálogo Político. Por ello, voy a solicitar la sustitución del inciso a) del artículo 19 por el siguiente: "Hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) las mujeres".

Me voy a referir ahora al artículo 21 que es importante, ya que por primera vez en la estructura de la futura norma se habla de aportante regular y se difiere su definición para el momento que se establezcan las normas reglamentarias.

El concepto de aportante regular tiene consecuencias sustanciales en el alcance de los beneficios que se van a obtener. Además hay que tener en cuenta la importancia de ese concepto, porque está relacionado con lo que se establece en los artículos 94 y 96 con respecto a los haberes en los casos de invalidez. Por ello planteo la necesidad de que el concepto de aportante regular sea definido en la ley y no en la reglamentación. Las reglamentaciones siempre han sido limitantes de los beneficios y nunca generosas.

Si nosotros no definimos este concepto en la futura norma estaremos permitiendo que un hombre posea un determinado haber —mayor o menor— de acuerdo con el criterio que tenga el Poder Ejecutivo o el funcionario de la secretaría correspondiente.

Por ello les pido a mis pares que tengan a bien definir el concepto de aportante regular, ya que es sustancial a fin de establecer los derechos del hombre que se va a acoger a un beneficio jubilatorio.

En cuanto al artículo 24, tal como informó el señor diputado Parrilli y figura en la propuesta cuya copia nos fue suministrada, se eliminaba el último párrafo del inciso a) referido a qué dice debía computar la ANSES a los efectos de las actualizaciones.

Ahora se mejora un poco la redacción porque se determina que este índice deberá ser de carácter oficial. Lo que sucede es que hace falta establecer, en primer lugar, la elocuencia, la transparencia de un índice que esté reflejado por un organismo como el INDEC, que en términos generales sin duda genera la confiabilidad de quienes deben utilizar sus índices, pero aquí estamos en lo mismo, porque si decimos "oficial", tan oficial puede ser la palabra del secretario o del subsecretario de Seguridad Social, como la del funcionario equis de la Secretaría, y esto implica delegar en el funcionario de la Secretaría la manipulación del haber jubilatorio.

Pongamos transparencia en la propuesta, demos la posibilidad de que al menos el trabajador y quienes lo defiendan tengan un índice de referencia que realmente sea aceptado por la comunidad. No solamente cabe aceptarlo cuando informa que estamos en el 0,5 por ciento de inflación. Utilicémoslo también cuando tiene efectos sociales. Pido a los señores diputados que se mantenga la redacción contemplada en el Orden del Día N° 922 para tener un punto de referencia y evitar la necesidad de recurrir a los gestores para averiguar cuál es el índice aplicable. Hagamos las cosas simples, transparentes y genuinas.

Quiero expresar con relación al artículo 29, que es el más controvertido, mi deseo de hacer uso de la palabra en su momento, porque hemos hecho alusión a tres temas respecto a lo que me gustaría que la comisión se definiera, y es sabido que el artículo 29 es el más conflictivo y dará lugar a mayor debate. Por lo tanto, quisiera concluir ahora mi exposición para continuarla en la oportunidad mencionada.

Sr. Presidente (Pierri). - Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Fescina. - Muchas gracias, señor presidente, se está portando como corresponde.

Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.- Señor presidente: propongo modificaciones con relación a los artículos 20, 24 y 33.

En el proyecto original se contemplaba en el inciso a) del artículo 20, una vez y media en lugar de dos veces y media el aporte medio, y en el artículo 24, incisos a) y b), se establecía 2 por ciento por año de servicio en lugar de 1,5 por ciento. Luego fueron produciéndose modificaciones.

Pensamos que en este aspecto debería retornarse al criterio del proyecto del Ejecutivo, ya que la modificación que se pretende perjudica notoriamente a quienes deben jubilarse en los próximos años, favoreciendo a quienes se jubilen en un futuro más lejano.

Esto nos parece una inequidad, ya que si la reforma supone que el régimen de capitalización individual va a posibilitar mejores jubilaciones en el futuro más lejano, la prestación complementaria no debería bajarse en favor de la prestación básica.

Con respecto al artículo 35 hemos señalado durante el debate en general la existencia de una iniciativa que entendemos proviene de la bancada de la Unión Cívica Radical a los efectos de que sea la Secretaría de Ingresos Públicos la que controle y fiscalice todo esto. En consecuencia, creo que deberían eliminarse esas atribuciones de la ANSES. Por lo tanto, solicitamos la supresión de la parte final del primer párrafo del artículo 35, a partir de donde dice: "así como la recaudación...".

Además, también proponemos eliminar los incisos a), b), c); d) y e), debido a que el Poder Ejecutivo ya ha tomado la decisión -a nuestro entender, absolutamente correcta- de que sea esa área del Ministerio de Economía la que realice la fiscalización y el control.

Por lo tanto, la redacción del dictamen de las comisiones resulta contradictoria con una decisión correcta que se ha tomado a partir de una sugerencia de la oposición.

Sr. Presidente (Pierri): - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia.- Señor presidente: lamento que quien habla por la comisión, el señor diputado Parrilli, esté distraído y lo haya estado durante la intervención del señor diputado Albamonte. Anticipo que rechazará las observaciones del señor diputado Albamonte, como lo hizo con las observaciones que yo había formulado sobre el título I, sin ni siquiera escucharlas, porque cuando propuse suprimir las contribuciones del empleador para que se constituyeran con un aporte del trabajador y hasta el 27 por ciento de su salario, también sugerí que por decreto se corrigieran las remuneraciones a fin de que no hubiese un perjuicio en el salario de bolsillo

del trabajador. Nuevamente el señor diputado Parrilli está entretenido con otra legisladora y no presta atención.

Para terminar con esta cuestión quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de mi voto por la negativa por todo el título I, donde al referirme a la modificación con respecto a los trabajadores autónomos, no hablaba de se eliminación del sistema, sino de su adhesión voluntaria, sencillamente por un problema de fiscalización de dichos trabajadores, que el mismo señor diputado Parrilli reconoce. Se trata de que el trabajador que presta servicios en forma autónoma y en relación de dependencia, alternadamente pueda permanecer en el sistema aportando en forma voluntaria al régimen de trabajadores autónomos cuando no esté trabajando en relación de dependencia.

Con respecto a los artículos en consideración, quiero insistir en las reformas propuestas por el señor diputado Albamonte a los incisos a) y b) del artículo 20, ya que la modificación que ha introducido la comisión para el haber de la prestación básica universal -que ahora de acuerdo con el inciso a) será de dos veces y media el aporte medio previsional obligatorio para quienes acrediten 30 años de servicios mientras que, según el inciso b), existirá una bonificación de un 1 por ciento para quienes acrediten más de 30 años y hasta 45 años como máximo de servicios, por cada año adicional que exceda a los 30 años de servicios— difiere del proyecto originario del Poder Ejecutivo y de lo propuesto por el señor diputado Albamonte, quien se expresó en el sentido de que los guarismos sean de una vez y media el AMPO para los beneficiarios que acrediten 30 años de servicios y de dos puntos porcentuales por cada año que exceda los 30 años de servicios hasta los 45 años.

El esquema produce una redistribución brutal de ingresos en favor de aquellas jubilaciones más bajas, ya que esto significa que la prestación básica universal, de acuerdo con lo que propone la comisión, será de 172,50 pesos en el supuesto teórico de un trabajador que tenga 45 años de servicios, que se compara con los 117 pesos de prestación básica universal correspondiente a la propuesta originaria del Poder Ejecutivo. Esta diferencia de más de 50 pesos, dada la cantidad de beneficiarios comprendidos, puede comprometer el financiamiento futuro del régimen previsional, requiriendo recursos, aportes y contribuciones adicionales. Por eso hago esta advertencia para que se vuelva a la redacción que estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo. Tal como está la redacción del dictamen de comisión, cuando se lo combina con la prestación

compensatoria puede darse el siguiente caso: que aquellos que en los últimos años de actividad hayan tenido salarios más bajos que el salario promedio de la economía, perciba luego haberes previsionales que superen el 100 por ciento del salario que hubieran obtenido en dichos años, en perjuicio de los trabajadores ubicados en el salario promedio de la economía o por encima de ella, generándose una redistribución inequitativa e indeseada, por lo menos desde nuestro punto de vista.

Por eso proponemos una modificación en el artículo 24, inciso a), que diga que el haber de la prestación complementaria sea del 2 por ciento por cada año de servicios con aporte, o fracción mayor de 6 meses, hasta un máximo de 30 años. Me estoy refiriendo a aquellos trabajadores que tengan años de servicios al momento de sancionarse esta reforma.

También propongo una modificación para el inciso b) de este mismo artículo, teniendo en cuenta que los trabajadores autónomos quedará obligatoriamente comprendidos dentro del sistema. La idea es que su aporte sea del 2 por ciento por cada año de servicios con aportes, fracción mayor de 6 meses, hasta un máximo de 30 años.

Y volviendo al inciso a) de este artículo 24), proponemos que los trabajadores en relación de dependencia tengan esa bonificación de la prestación complementaria sobre el promedio de la remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante un período de 30 años inmediatamente anteriores al cese del servicio.

En el caso de los autónomos también deberían computarse los 30 años anteriores al cese del servicio; y cuando haya servicios prestados en relación de dependencia y como autónomos también se tendrían que computar esos 30 años de manera que no haya discriminación entre una modalidad y otra.

Sr. Albamonte.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Ibarbia.- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. - Señor presidente: pedí esta interrupción por dos motivos: para que la comisión tome debida nota de las observaciones que está haciendo el miembro de nuestro bloque y para hacer un llamado a la reflexión al bloque de la Unión Cívica Radical.

Con la metodología de trabajo que ellos han escogido, de sentar en sus bancas sólo a dos

diputados, nos imposibilitan mejorar la norma en tratamiento, porque estoy seguro de que algunos aspectos de los que estamos considerando podrían ser acompañados por los radicales en una votación en particular.

En la práctica, lo que logran es que el oficialismo logre la aprobación de la norma sin aceptar modificaciones, porque nos supera el número ampliamente en votaciones que podríamos ganar. Por lo tanto, están convalidando el proyecto que nos presenta el bloque oficialista, con el solo hecho de no hacerse presentes en el recinto.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia.- Señor presidente: me estaba refiriendo a un trato igualitario para los trabajadores autónomos y para aquellos en relación de dependencia, e incluso para quienes hayan prestado servicios combinados.

¿Por qué sostengo esto? Porque el sistema de reparto -y le dice el mensaje del Poder Ejecutivo- al no guardar relación entre lo que el trabajador contribuye y su haber previsional, lleva a que durante un período prolongado de su actividad laboral se vea incentivado a actuar en connivencia con el empleador para trampear al sistema previsional, ya que en el esquema propuesto por la comisión sólo se tomarán los últimos diez años. Así, a un trabajador que se retire a los 65 años le importará que a partir de los 55 años las contribuciones tengan relación con el salario real que está cobrando, pero hasta los 55 años le va a convenir trampear al sistema de seguridad social en connivencia con el empleador.

Con la reforma que estoy proponiendo, al calcularse el haber con un promedio de años de servicio mucho mayor, el trabajador tendrá que ser mucho más cauteloso en no trampear al sistema de seguridad social. Se me podrá decir que esto no cambia nada porque se refiere a los servicios prestados hasta este momento. Pero ocurre que estamos frente a un blanqueo. El 2 de julio vence ese blanqueo y los empleadores tendrán que manifestar las relaciones de trabajo de estos años pasados. Si se dice que blanqueen solamente diez años porque esto es lo que interesa al trabajador, tendremos un resultado; si tenemos que blanquear un período mayor, el resultado será otro.

También propongo una reforma con respecto al artículo 30. No es que yo sea un entusiasta de esa iniciativa del Poder Ejecutivo, pero me sorprende que si hace dos años sostenía que había que modificar el régimen de pago del sueldo anual complementario a los jubilados —ya que el pago en junio y diciembre provocaba un impacto en los índices de precios de tales meses—, no

intente incorporar esa modificación a una reforma tan profunda al sistema jubilatorio. Sugiero que se tenga en cuenta esa iniciativa y que el sueldo anual complementario se pague en dos cuotas, la primera teniendo en cuenta la fecha de nacimiento del jubilado, y la segunda a los seis meses de esa fecha, de modo que nunca más se pueda decir que el pago del sueldo anual complementario tiene un efecto negativo sobre los índices de precios de enero y junio.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia le solicita que redondee su exposición porque ha vencido su término, señor diputado.

Sr. Ibarbia. - No voy a resumir, señor presidente, porque el señor diputado que responde en nombre de la comisión no está escuchando.

Sr. Presidente (Pierri).— Es cierto lo que dice el señor diputado Ibarbia. No sé para quien habla, porque los miembros de la comisión están conversando y no le prestan atención. Después habrá que repetir las propuestas.

Sr. Ibarbia.- En segundo lugar, no voy a resumir porque concedí interrupciones y éstas deben ser descontadas del tiempo que me asigna el reglamento.

La tercera reforma se relaciona con el capítulo VII. Al momento del año en que estamos considerando esta iniciativa corresponde reconsiderar las tablas de los artículos 36 y 37.

En el caso del artículo 36, que se refiere al gradualismo en la edad jubilatoria, propongo que los tres primeros años consignados sean 1994, 1996 y 1998, ya que el año 1993 prácticamente se va a consumir en la consideración de este proyecto, entre su aprobación con modificaciones por el Senado y su vuelta a la Cámara de Diputados.

En cuanto a la tabla del artículo 37, propongo que los años se aumenten en uno desde 1994 hasta 2007. Son los años en los que es posible declarar bajo juramento los servicios con aportes. Estas son mis observaciones al presente título.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: en oportunidad del tratamiento en general de este proyecto de ley solicité la inserción en el Diario de Sesiones de las disidencias que había expresado tanto en el aspecto económico-financiero como en el distributivo, así como también en relación con la cuestión estrictamente previsional. En la me

dida en que se vaya desarrollando la consideración en particular expondré una serie de modificaciones a este proyecto, con la correspondencia de los fundamentos de las disidencias, cuya inserción solicitara.

En primer término, existe una cuestión de técnica legislativa con respecto a los artículos 17 y 18 del proyecto toda vez que éstos parecieran estar ordenados en forma invertida. A ello, que a primera vista parece pueril o de poca importancia, le atribuyo un sentido sustancial si tenemos en cuenta su concordancia correlativa con los artículos 29 bis y 38 del título siguiente.

Pese a la observación que me hizo algún compañero en cuanto a aquella famosa frase *alea jacta est* —es decir que al momento de la votación la suerte está echada—, creo que el artículo 18 debe ser consignado como artículo 17, toda vez que aquél define cuáles son los rubros comprendidos dentro del régimen instituido en este título que hace al sistema de reparto, para establecer posteriormente cómo artículo 18 la redacción del actual artículo 17, es decir, la forma de financiamiento de ese régimen. Analizando el agregado propuesto al artículo 17 que nos ha hecho llegar la comisión, nos daremos cuenta de que lo que digo no es pueril sino que tiene importancia fundamental.

Se propone agregar como inciso j) del artículo 17, el siguiente "Los aportes correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción prevista en el artículo 29 bis". Solicito en especial al señor diputado Sueiro, quien actuó como miembro informante con respecto a la redacción del artículo 29 bis, que responda en torno de esta inquietud que a mi criterio define la característica sustancial de este proyecto.

Si nosotros decimos que la prestación adicional por permanencia que se agrega al artículo 18 va a resultar de la opción ejercida por los trabajadores conforme a lo determinado en el artículo 29 bis; que en la parte final de su primer párrafo dice: "Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para el ejercicio de la mencionada opción", va de suyo que lo que acá aparece como prioritario y principal es el sistema de capitalización y no el de reparto de prestación adicional por permanencia. Esto constituye una contradicción con las declaraciones efectuadas en general por el sector gremial y por miembros del Poder Ejecutivo en el sentido de que lo opcional era el sistema de capitalización; es decir que el trabajador tenía la posibilidad de optar por el sistema de reparto o por el de capitalización. Sin embargo esto no es lo que gramaticalmente dice la iniciativa toda vez que condiciona a la reglamentación del Poder Ejecutivo la forma en

que los trabajadores podrán optar por el sistema de reparto; es decir que filosóficamente estamos frente a una cuestión sustancial y no meramente gramatical.

Por ello propongo que el texto del actual artículo 18 corresponda al 17, agregando como inciso e) "Prestación adicional por permanencia." y que el actual artículo 17 pase a ser el 18, agregando como inciso j) el siguiente texto: "Los aportes correspondientes a los afiliados previstos en el artículo 29 bis", que no hubiesen ejercido la opción prevista por el artículo 38.

Esta inversión gramatical de los términos determina el sentido filosófico sustancial que —a mi juicio— se ha querido dar a la norma. En concordancia con ello habría que modificar el artículo 29 suprimiendo la parte pertinente, incorporándola luego al artículo 38. Oportunamente formularé una moción concreta para concordar el texto del articulado con lo que acabo de expresar.

Con relación a la propuesta de la señora diputada Troyano quiero decir que, si bien es cierto que en la mayoría de los países existen legislaciones divididas respecto de la edad del hombre y de la mujer para jubilarse toda vez que en muchos de ellos ambas edades están asimiladas mientras que en otros se ha establecido una edad menor para la mujer, atento a cuestiones propias de la naturaleza humana y características de nuestra sociedad entiendo que debe apoyarse la moción formulada por la señora diputada y reducir la edad de la mujer a 60 años manteniendo en 65 la del hombre.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente

1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Varela.— Concretamente, señor presidente, propongo las modificaciones que acabo de formular respecto de los artículos mencionados y su posterior concordancia con el artículo 38.

Sr. Presidente. (Martínez). Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Moure.— Señor presidente: deseo hacer algunas observaciones, esperando que la comisión pueda considerarlas. Se trata de los artículos 19, al que se refirió el señor diputado Varela, y del 29. Con relación al artículo 19, reiteramos lo que venimos sosteniendo en los distintos proyectos alternativos que se han presentado en esta Cámara desde el 22 de junio de 1992, tanto por mi bancada como por parte de otras bancadas que presentaron un proyecto alternativo el 21 de abril pasado.

En lo que se refiere a la edad de retiro entendemos que es imprescindible, justo, necesario y

razonable plantear los 65 años en el hombre y los 60 en la mujer. Revisando los distintos sistemas previsionales existentes en el mundo, rescatamos que más del 39 por ciento del conjunto de países ya adoptaron los 65 años para el hombre y en el caso concreto de la mujer los 60 años. La mujer tiene una sobrecarga de tareas.

No voy a plantear la cuestión en términos de diferencia de sexos sino de que la mujer tiene efectivamente una sobrecarga de trabajo ya que debe atender el hogar. Eso hay que reconocerlo. Los estudios que en su momento recogimos de los gerontólogos en el marco de nuestros análisis nos recomendaban precisamente esa diferenciación. Ni siquiera en Chile se iguala la edad de retiro del hombre y la mujer.

Por consiguiente, la Unión Cívica Radical va a proponer cordialmente a la comisión considerar en el artículo 19, en lo que respecta a los requisitos, que tendrán derecho a la prestación básica universal los afiliados de ambos sexos que hubieren cumplido 65 años de edad, para el hombre y 60 para la mujer.

En cuanto al artículo 29 bis, al que hizo referencia el señor diputado Sueiro, hay un reconocimiento al futuro jubilado toda vez que queda en el marco del sistema público de reparto, hay una compensación, qué queda reducida en un 0,5 por ciento.

Nosotros entendemos que hay una suerte de incidencia para que a través de esta prestación compensatoria adicional se incite a que la ciudadanía recurra al sistema privado. En virtud de eso, vamos a proponer que ese 0,5 por ciento se mantenga con relación a la prestación compensatoria del 1,5.

No sé de dónde surge la diferenciación entre aquellos trabajadores que han hecho un aporte por igual tanto a un sistema como al otro, por lo cual entendemos que hay que igualarlos.

La propuesta del señor diputado Sueiro consistía en elevarlo al 0,85 por ciento. Cuantas veces hagamos una proyección con números en a mano, advertiremos que aquel jubilado que recurra al sistema público obtendrá seguramente un haber jubilatorio mucho menor sobre la base del 0,5 por ciento que el que puede obtener aquel que acceda a las administradoras.

Sr. González Gaviola. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Moure. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. - Señor presidente: es probable que por haber estado ausente del recinto el señor diputado por Buenos Aires no

haya escuchado la explicación que dio el representante del justicialismo cuando señaló que nuestra propuesta consiste en reconocer el 0,85 por ciento por cada año aportado, lo que es proporcional a lo planteado en el proyecto presentado por el radicalismo, el que por 26 puntos de aportes establece un reconocimiento del 2,2 por ciento por cada año aportado.

Sr. Parrilli. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia **Sr. Moure.** - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: por su intermedio pido disculpas a los señores diputados que han formulado propuestas porque pareciera que no les estamos prestando atención, pero en realidad nos habíamos concentrado en las inquietudes planteadas con anterioridad por otros señores diputados. De todos modos, somos cuatro o cinco diputados los que estamos trabajando en torno a los aportes realizados y a todos los hemos escuchado. Aceptaremos algunas propuestas y otras las rechazaremos, pero en su momento fundamentaremos por qué optamos por unas y descartamos otras.

Deseaba realizar esta aclaración porque me han hecho saber que algunos señores diputados se encuentran molestos porque consideran que no les estamos prestando atención.

Sr. Presidente (Martínez). - ¿La Presidencia debe entender que siempre habrá un diputado del bloque Justicialista en condiciones de responder cualquier inquietud que planteen los otros bloques?

Sr. Parrilli. —Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moure. - Señor presidente aclaro que estábamos presentes cuando se hizo referencia al 0,85 por ciento pero insistimos con la idea de que es necesario hacer un reconocimiento del 1,5 por ciento para que exista igualdad de oportunidades entre quien opta por el sistema público de reparto y quien elige a las administradoras de fondos de pensión.

Con relación a la modificación propuesta para el artículo 29 bis deseo hacer una referencia que tiene que ver con lo manifestado por el señor diputado Parrilli. ¡Qué distinto hubiese sido el tratamiento del proyecto si estas cuestiones se hubieran discutido puntualmente en un marco más recoleto y propio del análisis que se puede

realizar en el seno de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda! Lamentablemente esto no ha sucedido y ya no abrigo la esperanza de que ocurra con lo cual al finalizar el tratamiento del proyecto nos encontraremos con un verdadero *pasticcio*.

Sr. Presidente (Martínez).-- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. - Señor presidente: en primer término deseo hacer referencia a lo señalado por el señor diputado Albamonte en el sentido de que lamentaba que seamos pocos para corregir el proyecto. A ello respondo que lamento mucho más que por cuatro votos de diferencia —que la UCEDE no aportó— el proyecto no haya vuelto a comisión, único ámbito en el que es posible corregirlo sustancialmente.

Sr. Albamonte. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Baglini. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.— Señor presidente: yo fui uno de los diputados del bloque de la UCEDE que votó en contra de la vuelta del proyecto a comisión. Lo hice en la seguridad de que fue suficientemente debatido y por más que vuelva a comisión en algunos puntos no nos vamos a poner nunca de acuerdo. En consecuencia, es absolutamente razonable —como ha ocurrido con infinidad de proyectos— que en la consideración en particular propongamos las modificaciones que consideramos necesarias y procedamos a votar, ésa es la única forma de corregir un artículo.

Por lo tanto, al no tener a todos sus diputados sentados en sus bancas, flaco favor está haciendo el radicalismo a la posibilidad de sancionar una norma que definitivamente solucione el tema previsional, al no tener a todos sus diputados sentados en sus bancas.

Sr. Presidente (Martínez). - Está totalmente fuera de la cuestión, señor diputado.

Sr. Albamonte. - Estoy refiriéndome a las palabras del señor diputado Baglini.

Sr. Presidente (Martínez).— El señor diputado por Mendoza también está fuera de la cuestión con sus argumentaciones y corresponde que la Presidencia ordene el debate.

Sr. Albamonte. - Con todo respeto, señor Presidente, solicito que me permita terminar mi intervención, que sólo insumirá unos segundos más.

Sr. Presidente (Martínez).- Si es sobre el mismo tema al que se estaba refiriendo hace unos instantes, la Presidencia no lo puede permitir, señor diputado.

Sr. Albamonte.— Es sobre lo que acaba de manifestar el señor diputado Baglini.

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia entiende que el señor diputado por Mendoza retirará sus conceptos porque están fuera de la cuestión.

Sr. Albamonte. — Si el señor diputado Baglini acepta su indicación...

Sr. Presidente (Martínez).- La Presidencia solicita al señor diputado por Mendoza que se ciña al tema en consideración.

Sr. Baglini. — Señor presidente: un aforismo del derecho romano sostiene que *primus in tempus, primus in jure*, o sea, el que primero aludió al tema no puede arrogarse el mejor derecho a pedir su retiro. Si el señor diputado Albamonte retira la referencia que efectuó respecto del bloque radical, yo haré lo propio con la alusión a la bancada de la Unión del Centro Democrático.

De acuerdo con la versión que acaba de dar lectura el señor diputado Sueiro del artículo 24, en el último párrafo del inciso a) se dispone que para practicar la actualización del haber la Administración Nacional de la Seguridad Social reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar, y se suprime la referencia en el sentido de que el índice que deberá ser de carácter oficial tendrá que ser publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Consideramos que en una cuestión tan importante como la determinación de la movilidad no debería suprimirse la referencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos precisamente porque la Administración Nacional de la Seguridad Social se transformará en juez y parte para la determinación de la movilidad: si manipula el índice, como ya lo señaló el señor diputado Fescina, mejora su perfil financiero. De manera que es necesario recurrir a un tercero, razón por la cual entendemos que el texto original del proyecto era mejor pues se refería al INDEC, que es un tercero objetivo, un organismo público, y no tendría interés alguno en manipular el índice como la ANSES: a diferencia de ésta, no puede beneficiarse financieramente con la manipulación de un índice que altere las movibilidades.

El artículo 26 determina el haber máximo de la prestación compensatoria poniendo el tope en una vez el AMPO por cada año de servicios con aportes computados. Proponemos que esto

se elimine porque establece un límite precisamente a quienes ya tienen aportes realizados al viejo sistema. Esto significa que quienes aun en el marco de las dificultades del sistema previsional -que muchas veces ofreció posibilidades de evadir- hayan cumplido con sus aportes, se ven perjudicados por este límite, y más todavía si tales aportes son de nivel y volumen altos. Es decir que quienes más plata hayan aportado y mejor hayan cumplido resultan perjudicados por esta disposición del artículo 26.

Este límite involucra tanto a los trabajadores en relación de dependencia como a los autónomos, y en definitiva resultan favorecidos quienes hayan efectuado aportes por debajo de lo que correspondía, quienes hayan aportado el mínimo, y no un autónomo —si bien esto sería una verdadera excepción— que se hubiera ubicado en alguna de las categorías superiores de aporte ingresando el máximo de la categoría y que ahora sufriría esta limitación que se aplica prácticamente con carácter retroactivo.

El artículo 29 bis ha sido citado por el señor diputado Moure. Por su parte, el señor diputado González Gaviola dijo que con el 0,85 por ciento se restablece la equiparación de la equivalencia entre un sistema y otro. Quiero recordar, porque no estaba el señor diputado González Gaviola cuando comenzó a hablar el señor diputado Moure, que este último señaló que el artículo 29 bis, con el 0,5 o con el 0,85 por ciento, crea una brutal inequidad entre quienes ya están aportando al sistema público a los que optarán desde ahora por el nuevo sistema de reparto público.

La situación es la que paso a describir. Los aportes al sistema público hacia atrás son reconocidos en 1,5 por ciento por año, y los aportes de quien decida ingresar hoy al sistema público son reconocidos en un tercio de ese valor. Es decir que si alguien aportó durante 40 años al viejo sistema la prestación compensatoria se determina en un 47,5 por ciento -porque el tope son 35 años- adicionales a la prestación básica. Si se tratara de aportes nuevos, con el 0,5 estaríamos en un 20 por ciento.

Estamos creando una diferencia que sesga una vez más -éste es uno de los rasgos característicos del proyecto— brutalmente en favor de que no haya nadie que decida aportar al sistema público. Es decir que si alguien decide entrar hoy al sistema público de reparto directamente es un estúpido porque opta en condiciones en las que se le reconoce mucho menos que a quien hizo aportes al sistema viejo.

Los aportes nuevos y los viejos son iguales; no han variado. Pero sí varió el reconocimiento que hacemos en la prestación compensatoria y en la

prestación por permanencia. Es loable lo que ha señalado el señor diputado Sueiro en cuanto a elevar el 0,5 a un 0,85 por ciento —creo que ésa es la propuesta—, pero todavía no se logra la equiparación entre un sistema y el otro.

En cuanto al artículo 35, el señor diputado Albamonte ha hecho una moción relacionada con el hecho de que la recaudación -y solamente la recaudación- de las contribuciones de la seguridad social está hoy, por decisión de Poder Ejecutivo, instrumentada a través de un decreto, en manos de la Secretaría de Ingreso Públicos. De esta manera se han unificado la recaudaciones previsionales e impositivas.

Efectivamente, el artículo 35, en su primer párrafo, se refiere a la recaudación de la contribución única de la seguridad social y la asigna a la ANSES. Además, en los tres primeros incisos se asignan al citado organismo las facultades de determinar la modalidad de recaudación, la forma de hacer la transferencia de dicha recaudación y de fiscalizar el cumplimiento, las que estarían en absoluta contradicción con esta decisión del Ejecutivo, que por otra parte nosotros habíamos propugnado en un proyecto.

Estaríamos en sintonía con lo que ocurre si en este artículo 35 el tema de la recaudación de la contribución referida quedara fuera del área de competencia de la ANSES para incluirse en jurisdicción de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti.- Señor presidente: adhiero a la modificaciones propuestas por el diputado Fescina.

Comparto también lo expresado por el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra con relación al artículo 29 cuando señaló claramente que es injusto que no se reconozca el 1,5 por ciento a los trabajadores que opten por el régimen estatal.

Por otra parte, quiero preguntar a la comisión — porque es un tema que no se ha tocado aquí— si ha tenido en cuenta al establecer que tendrán derecho a la prestación básica universal quienes acrediten 30 años de servicio con aportes la situación en que se van a encontrar muchos trabajadores, como consecuencia de haber estado prestando servicios con un empleador que no efectuó los aportes patronales y lue-

go se acogió al blanqueo que, le permitió regularizar su situación a partir de la sanción de la ley de empleo. O sea que ese empleador queda eximido del pago de aportes patronales, contribuciones, multas, etcétera. Pero ¿qué va a ocurrir con esos trabajadores que no tienen ninguna posibilidad de solicitar que se le reconozcan aportes por esos años, porque el empleador moroso se acogió a aquel beneficio? A pesar de que pueden demostrar fehacientemente que estuvieron trabajando, podrían no contar con esos aportes por el simple hecho de que el empleador se ha visto beneficiado por esa especie de amnistía.

Por ello solicito que se incluya un párrafo mediante el cual se computen como aportados todos aquellos años sobre los que el trabajador pueda demostrar fehacientemente que estuvo trabajando en relación de dependencia con un empleador que en su momento se acogió al blanqueo laboral.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: me voy a referir al artículo 19 que establece la edad para acogerse a la jubilación, y posteriormente hablaré del tema vinculado con las actividades riesgosas, especialmente en el caso de la mujer.

Las tendencias internacionales, como los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, la OEA y la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres), dejan en claro la necesidad de que exista una diferencia entre la edad del hombre y de la mujer para acogerse a los beneficios jubilatorios.

Dicha diferencia no se basa en una discriminación en favor de la mujer, sino en una razón de justicia, ya que a lo largo de su vida la mujer atraviesa por distintas etapas: desde la maternidad hasta lo que se ha dado en llamar, internacionalmente -por la Organización Internacional del Trabajo- la doble jornada laboral: dicha jornada la mujer la realiza tanto en su casa como en su trabajo, lo que implica un mayor desgaste y un agotamiento prematuro de su capacidad laboral.

Por ello propongo que en el artículo 19 exista una diferenciación entre el hombre y la mujer, esto es, que se reduzca en cinco años el requisito que se establece respecto de la edad, para que ella pueda jubilarse. Al mismo tiempo también solicito que se modifiquen las escalas que figuran en el artículo 36 del proyecto en tratamiento.

Otra cuestión es la que plantea a última parte del inciso a) del artículo 24. El Orden del Día N° 922

especifica que a los efectos de los índices de actualización deben tenerse en cuenta los que publique el INDEC. Ahora se propone la supresión de esa última parte.

A efectos de una mejor ilustración en cuanto a los índices que deberían utilizarse -entiendo que correspondería mantener el texto original- quisiera plantear un caso concreto que dejo como consulta a la comisión, porque quizá en algún vericuetto del proyecto podría ser que los cómputos son distintos a como los he hecho.

Veamos la situación de un trabajador que cuente con 30 años de servicio y que gane 200 pesos por mes. Les digo que son muchos en mi provincia que se hallan en ese caso, más si tenemos en cuenta que el 70 por ciento de la población gana de 500 pesos para abajo. Volviendo al ejemplo, quiero decir que con la prestación básica universal —pido que me rectifiquen si no es así— tendríamos por AMPO 150 pesos, más la prestación complementaria -1,5 por ciento por año-, que daría como resultado 90 pesos más; es decir que arrojaría un total de 240 pesos, sin contar capitalización ni esta innovación sobre prestación adicional por permanencia. En consecuencia, ese trabajador con 30 años de servicio que gana 200 pesos por mes percibiría 240 pesos si hoy tuviera que jubilarse por este sistema. Quisiera que la comisión ratificara si es así.

Sr. Presidente (Martínez). - Su inquietud será evacuada por la comisión al concluir el análisis en particular de todos los artículos del título II.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. - Señor presidente en primer término deseo expresar mi adhesión a las propuestas innovadoras formuladas por los señores diputados Baglini y Gatti.

Para ser breve sólo voy a señalar una concepción que me parece sana en el ámbito de las normas comunes del derecho. Los trabajadores están obligatoriamente comprendidos en el actual sistema de reparto. Saben qué están incluidos en el sistema de reparto, y a este sistema lo conocen aunque sea en sus premisas sustantivas.

La propuesta de modificación del artículo 29 dice hábilmente: "Las personas físicas comprendidas en el artículo 2° podrán optar por no quedar comprendidas en las disposiciones establecidas en el título III del presente libro...". Es decir que para no quedar comprendidas, deberán optar y todos sabemos que el título

III se refiere a la capitalización. Creo que es la primera vez que se coloca como concepto general que el silencio genera derechos. Si mal no recuerdo, el Código Civil —que expresa el derecho común— contiene una aseveración totalmente distinta: el silencio no genera derechos menos que la ley lo indique. Aquí se ha utilizado esta disposición de la norma, que debería ser excepcional, para generar un concepto general. ¿Cómo vamos a pedir al trabajador que manifieste su voluntad para decir que no quiere quedar comprendido en el sistema de capitalización? Esto debería ser a la inversa.

En consecuencia, en la redacción debe suprimirse la palabra "no", expresándose: "Las personas físicas comprendidas en el artículo 2º podrán optar por quedar comprendidas..." De-be ser una manifestación expresa de la voluntad -y no su ausencia- la que defina el destino jubilatorio de la persona. Incluso se deja en la reglamentación la posibilidad de establecer los alcances para ejercer la opción. De manera que se debe dar oportunidad al trabajador de que consciente y racionalmente opte por estar en un sistema o en otro, evitando que la ley defina la voluntad del trabajador a partir de su silencio. En consecuencia, solicito la supresión de la palabra "no" de la primera parte del artículo 29 bis.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. — Señor presidente: simplemente quiero dejar sentado que el bloque del Partido Blanco de los jubilados va a apoyar la proposición de la señora diputada Troyano con respecto al mantenimiento de los 60 años como edad para las mujeres.

Asimismo expresamos nuestra adhesión a la moción del señor diputado Baglini en el sentido de mantener en el artículo 24 al INDEC como organismo de referencia para obtener el índice salarial allí mencionado.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: percibo dos actitudes extremas en esta sesión: por una parte, la de quienes no quieren que el proyecto se vote; y por la otra, la de quienes desean que se vote a una velocidad tal que impide la puntualización de algunos de los temas que nos preocupan y que deberían inquietar a todos.

Estamos debatiendo un proyecto de ley que registrará durante mucho tiempo, por lo que solicito a la comisión que cuando conteste las observaciones de los señores diputados preopinantes y del suscrito, se sirva explicar detalladamente en qué consisten las propuestas que se han hecho. Si tardamos media o una hora

más, habrá que hacerlo, pero no se pueden dejar de explicar artículos tan profundos como los de este título y el siguiente.

En primer lugar, no comprendo claramente lo que significa desde el punto de vista económico la prestación adicional por permanencia.

Tanto las explicaciones del señor diputado Parrilli, como del señor diputado Sueiro, no me satisficieron porque nadie me ha explicado cómo se va a financiar este sistema. Incluso me lo explico menos cuando se habla del 1,5 por ciento o cuando el señor diputado Baglini lo baja al 0,85 por ciento.

Pareciera que todo el mundo está dispuesto a dar y sumar, pero como nadie explica de dónde saldrá el dinero, casi estamos legislando algo que será inaplicable en algunos artículos. Me parece que ello no debe ser así y que se nos deben explicar algunos textos. Debemos votar este título y el próximo en forma separada pues me parece que tendremos actitudes disímiles.

Quisiera que se haga conocer la redacción que tendrá el artículo 29 bis, porque no figura en la planilla que me facilitaron antes de comenzar ésta sesión. Además quisiera que se me explique ese artículo.

En consecuencia, el artículo 18 debe ser considerado junto con el 29, tal cual planteara oportunamente el señor diputado Fescina.

Sr. Baglini. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Ruckauf - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini.- Señor presidente: el señor diputado ha dicho que yo propuse bajar la prestación por permanencia al 0,85. En realidad ésa ha sido la propuesta del señor diputado Sueiro: subir del 0,50 al 0,85. Lo que yo propuse es que sea el 1,5; es decir, exactamente igual a la prestación compensatoria pues no me parece que pueda justificarse una diferenciación entre lo que reconocemos a quienes aportan al régimen público y quienes mañana se decidan por esta opción.

Sr. Presidente (Martínez)- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf.- Señor presidente: la aclaración me parece muy pertinente. Quizás he escuchado mal, pero en todo caso es notoria la diferencia

de actitudes de algunos legisladores cuando son oficialistas y cuando son opositores -nos pasa a todos, parece ser-, porque sigo sin entender cómo se financian estos temas, ya que ni el miembro informante ni la bancada opositora nos explican cómo hacemos para subir estos montos. Por eso me gustaría que la comisión nos explique algo sobre el particular.

Deseo manifestar también que comparto el criterio del señor diputado Fescina en cuanto al artículo 21. En mi opinión, el concepto "regularmente" debería ser testado. Asimismo, el miembro informante debería explicarnos la relación entre los artículos 20 y 24, teniendo en cuenta las objeciones que han hecho los miembros del bloque de la Unión de Centro Democrático. Creo que vale la pena, habida cuenta de esas observaciones que la comisión fundamente su aceptación o rechazo.

En cuanto al artículo 24, inciso a) coincido en que se mantenga la inclusión del INDEC. Esta debe ser la única coincidencia -por lo menos en el día de hoy- que tengo con el señor diputado Baglini. Me parece razonable que en un tema de esta magnitud se tome un índice que pueda ser garantía para todos, porque ésta será una ley para muchos años y hoy somos oficialismo y mañana podemos ser oposición. En consecuencia, probablemente debamos controlar a funcionarios distintos de los que hoy conocemos.

Finalmente destaco que apoyo la posición de la señora diputada Troyano en cuanto a la diferenciación entre hombres y mujeres en edad de jubilarse, por lo que mociono específicamente para que en los artículos 36 y 37 se modifiquen los años en la forma oportunamente solicitada por el señor diputado Ibarbia, es decir, que en el artículo 36 donde dice "1993" diga "1994," donde dice "1994" diga "1995"; donde dice "1997" diga "1998" y así sucesivamente; y que además en la columna "Mujeres", desde el año 2003 en adelante, diga "60" en lugar de los años de edad actualmente fijados, que se incrementan hasta los 65. En el artículo 37, propongo que se mantenga la progresión con un año más hasta llegar al 2007.

Sr. Presidente (Martínez). Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.- Señor presidente: en el mismo sentido, y ampliando los conceptos del señor diputado Ruckauf, quiero expresar mis dudas respecto de la propuesta realizada en el artículo 29 bis para incrementar el monto de la prestación adicional por permanencia.

Sra. Roy — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, para hacer una aclaración, con la venia de la Presidencia?

Sr. Amadeo. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Roy.- Señor presidente: simplemente para que quede constancia de que me solidarizo con la señora diputada Troyano y el señor diputado Ruckauf y que pido exactamente lo mismo: que se baje la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años y que se modifique la tabla del artículo 36 de modo que los años de edad de las mujeres no superen 60, tal como ha sido la moción del señor diputado Ibarbia.

Sr. Presidente (Martínez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo. -Seré breve, señor presidente. Mi oposición al aumento al 0,85 por ciento en el cálculo de la prestación adicional por permanencia se fundamenta, además de en lo que manifestó el señor diputado Ruckauf, en el sentido de que no está clara la coherencia global del modelo modificado, en la siguiente circunstancia. Se está incrementando el componente menos redistributivo de los dos que van a recibir los futuros jubilados en el sistema público, porque la prestación adicional por permanencia es de carácter absolutamente proporcional.

En segundo lugar, no queda claro cómo se modifica un modelo que, según tengo pruebas, ha sido modificado numerosas veces y tenía un determinado nivel de equilibrio. Como tenemos la obligación de legislar sistemas que regirán durante mucho tiempo y que deberán demostrar coherencia interna, no podemos introducir modificaciones al azar que alteren el equilibrio del modelo, porque si no lo pagarán las generaciones futuras.

En tercer lugar, estoy de acuerdo con el señor diputado Ruckauf, que a su vez está de acuerdo con el señor diputado Moure, respecto de la necesidad de poner al INDEC como entidad de referencia, por las mismas razones que planteó el señor diputado Ruckauf.

Sr. Moure. — Pido la palabra para una acotación.

Sr. Presidente (Martínez)- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Moure.- Cuando la comisión responda a los interrogantes que hemos planteado tanto el señor diputado Ruckauf como nosotros desde la bancada radical y diputados de otras bancadas,

preferentemente con relación a esta prestación adicional, sería muy conveniente que de algún ejemplo de cómo resultará el beneficio jubilatorio con el 0,5, el 0,85 o el 1,5, porque en definitiva lo que debemos tener en cuenta es el beneficio final. Sobre esta base tendremos un conocimiento acabado del comportamiento que tendrá la norma que estamos analizando y de a dónde está orientada.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. - Señor presidente: antes de contestar las observaciones formuladas, voy a exponer las modificaciones que se proponen a los artículos 32, 33 y 34. Estas modificaciones son de carácter técnico porque hay que tener en cuenta en esos artículos la prestación adicional por permanencia. Los artículos 32, 33 y 34 también deben estar relacionados con la modificación propuesta al artículo 27, como ya lo explicara el señor diputado Sueiro.

La comisión propone reemplazar el artículo 32 por el siguiente: "Límite de acumulación. La misma persona no podrá ser titular de más de una (1) prestación básica universal y, en caso de corresponder, de más de una (1) prestación compensatoria, ni más de una (1) prestación adicional por permanencia, debiendo optar por cada una de ellas."

En cuanto al artículo 33, primer párrafo, la comisión propone la siguiente redacción: "Si el beneficiario de una prestación básica universal reingresare a la actividad en relación de dependencia, se le suspenderá el goce de esa prestación, como también el de la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia en caso de corresponder, hasta tanto cese en dicha actividad, la que no dará derecho a reajuste del haber de las prestaciones mencionadas."

El artículo 34 debe quedar redactado de la siguiente forma: "Percepción unificada. La prestación básica, universal y la prestación compensatoria serán abonadas en forma coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con algunas de las prestaciones detalladas en el artículo 27 otorgadas a través del régimen de capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos de transferencia por parte del Sistema Unico de la Seguridad Social a la entidad responsable del pago de la prestación derivada del régimen de capitalización a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos."

A continuación responderé a algunas de las inquietudes formuladas por diferentes señores diputados, pues al resto se referirán otros com-

pañeros de bloque.

Aceptamos la propuesta formulada por el señor diputado Varela en el sentido de que el artículo 18 pase a ser 17 y viceversa, así como también que en el ahora artículo 17 -que pasará a ser 18- el inciso h) quede redactado de la siguiente manera; "Los aportes correspondientes a los afiliados previstos en el artículo 29 bis que no hayan ejercido la opción prevista en el artículo 38."

También vamos a aceptar la propuesta formulada por el señor diputado Fescina en el sentido de eliminar la palabra "regularmente" del artículo 21. Por otro lado, aceptamos la modificación propuesta por el señor diputado Ibarbia a los artículos 36 y 37. Así, en el artículo 36 los años 1993, 1994 y 1997 deben ser reemplazados por 1994, 1996 y 1998, respectivamente, y el artículo 37 debe comenzar aludiendo no al año 1993 sino a 1994, y de allí se debe agregar sucesivamente un número a todos los años indicados.

Por otra parte, los señores diputados Moure y Baglini, por un lado, y los señores diputados Albamonte e Ibarbia, por el otro, han sustentado posiciones contrapuestas, dado que unos nos piden que reduzcamos el AMPO y aumentemos la prestación complementaria, y otros nos solicitan que igualemos la prestación adicional por permanencia a la prestación complementaria.

Al respecto reiteramos el despacho de comisión porque creemos que precisamente el objetivo de esta ley, al haber elevado el AMPO del 1,5 al 2,5 por ciento, es beneficiar -como señalamos durante el tratamiento en general- a los sectores de menores ingresos, y a los de mayor edad con la prestación complementaria.

Nosotros entendemos que un régimen previsional, para ser justo, equitativo y sano, tiene que proteger sustancialmente a los sectores de menores ingresos y no generar situaciones en donde los sectores de mayores ingresos -que tienen la posibilidad de un ahorro propio a canalizar mediante el sistema de capitalización- puedan beneficiarse con un sistema de reparto que, en realidad, apunta a brindar garantías a los sectores de menores ingresos.

Además, según los estudios que ha realizado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde el punto de vista financiero la ecuación económica no varía con respecto a lo que originalmente envió el Poder Ejecutivo, pues hemos reducido la prestación compensatoria de 2 puntos a 1,5 puntos, a la vez que aumentamos el AMPO de 1,5 a 2,5. De esta manera estamos

redistribuyendo mejor los recursos del Estado entre los sectores que menores ingresos perciben. Con respecto a la propuesta formulada por la señora diputada Silvia Troyano -y apoyada por los señores diputados Moure, Guzmán, Ruckauf y otros- en el sentido de modificar la edad de jubilación de la mujer, nosotros entendemos que debe mantenerse el criterio del dictamen de comisión. No existen razones que justifiquen tal modificación más allá de las políticas. Obviamente a todos nos gustaría ser simpáticos y agradables para la opinión de las mujeres por el hecho de decirles que se podrán jubilar a los 60 años, pero en ese caso también podríamos hablar de 55 o, por qué no, de 50.

Hemos establecido un tope de 65 años que es progresivo. Si analizamos el proyecto veremos que las mujeres recién se van a jubilar a los 65 años en el 2011, de modo que este principio no se va a aplicar en forma inmediata.

Creemos que estamos dando un mensaje muy claro y concreto, sobre todo para generar en aquellas mujeres trabajadoras que pueden acceder a la jubilación que les permita su capacidad de ahorro, la posibilidad de que continúen ahorrando, manteniendo niveles que en el momento de la jubilación tengan que ver con su aporte y no con el mero hecho de que figura en la ley un adelantamiento de la fecha de su jubilación.

Sr. Green.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Parrilli.— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green.- Señor presidente: simplemente quería hacer notar al señor representante de la comisión que ha sido debidamente fundada la opinión de los legisladores que solicitaron que la edad máxima de jubilación de la mujer fuese a los 60 años. Además, a quienes apoyamos dicha moción no nos ha movido la simple connotación política de caer simpáticos a las mujeres, porque las propuestas que se hicieron se basan en las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Por ello, los conceptos vertidos por el señor representante de la comisión lesionan no sólo la aptitud y la actitud de los legisladores que hicieron esa propuesta sino también la aptitud y la actitud de la mujer en su rol de trabajadora. Y lo mismo cabría decir de nosotros, que estamos dispuestos a apoyar que la edad máxima de la jubilación de la mujer sea a los 60 años.

Sr. Baglini.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Parrilli.- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente. (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini.- Señor presidente: quería señalar dos cosas. En primer lugar, con respecto al financiamiento que ha mencionado el señor diputado Parrilli, cabe señalar que el proyecto ha cambiado tantas veces que incluso antes de incorporarse la prestación adicional por permanencia no se sabía cuál era la ecuación con la cual el Estado podría financiar o no el sistema, de modo que mucho menos tal ecuación puede darse ahora y menos todavía como resultado de una inequidad.

En segundo término, advierto en este instante que el artículo 29 bis dice que las personas físicas incluidas en el artículo 2º pueden optar por no quedar comprendidas en las disposiciones del título III. Ahora bien, dentro de este título está la garantía del artículo 124, que establece que las prestaciones no pueden ser inferiores al 40 por ciento. En consecuencia, por lo menos debería hacerse referencia a las prestaciones establecidas en el título III del presente libro, con excepción de las del artículo 124, porque si no desaparece la garantía de este artículo que también forma parte del título III y que es la que posibilita que el haber que otorgue el régimen previsional público no sea inferior en ningún caso al 40 por ciento. Si esta expresión no figura en el texto, desaparecerá la garantía.

Sr. Presidente (Martínez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: pido disculpas a los diputados que han hecho la propuesta.

No fue mi intención menoscabar su idea ni mucho menos, pero nosotros entendemos que también existen razones que avalan la necesidad de equiparar la edad de la jubilación de la mujer con la del hombre y que tienen que ver también con la expectativa de vida que ambos tienen, que como todos sabemos es mucho mayor en la mujer que en el hombre. De manera que el hecho de tener la mujer una jubilación a los 65 años de ninguna forma le está dando menores beneficios, ya que en todo caso se le dan los mismos beneficios que al hombre.

Con respecto a lo manifestado por el señor diputado Baglini, tampoco eso es así. Cuando

analicemos el artículo 124, lo vamos a aclarar si es necesario, pero consideramos que está garantizado precisamente el 40 por ciento, tal como lo dice el mencionado artículo 124.

En cuanto al artículo 29 y a la razón de aumentar los montos de la prestación adicional por permanencia al 1,5 o al 0,85 por ciento, voy a expresar mi opinión personal. Pienso que lo correcto sería que la prestación adicional por permanencia quede establecida en el 0,50 por ciento, porque con eso lo que damos es un mensaje muy claro -lo reitero porque ya lo dijimos durante la consideración en general- a aquellos sectores que puedan tener capacidad de ahorro, para que precisamente su haber previsional esté relacionado con el ahorro y no con el hecho de que el Estado, al aumentar la prestación adicional, les garantice un haber que muchas veces ni siquiera puede llegar a cumplir.

Con esta modificación que realizamos y con la creación de la prestación adicional por permanencia, las tablas —al menos aquéllas con las que nosotros trabajamos— nos dicen que en el caso de un trabajador —hablando del 0,50 por ciento— que tenga una remuneración al momento del cese de 300 pesos, manteniéndose en el sistema público de reparto, si tiene, por ejemplo, 45 años de edad y se va a jubilar a los 65, percibirá un haber previsional de 296 pesos, es decir, prácticamente del 99 por ciento de su ingreso.

Si esa misma persona, con similar salario de 300 pesos, cuenta con 25 años de edad y se mantiene en el régimen de reparto, recibirá un haber previsional de 260 pesos, que, significan algo así como el 85 por ciento. En el caso de que fuera al sistema de capitalización, aquella persona de 45 años —con una tasa equivalente al 4 por ciento de capitalización anual, descontando obviamente todas las comisiones— tendría un haber previsional de 314 pesos, mientras que la persona de 25 años de edad recibiría al jubilarse 306 pesos.

Con lo señalado estoy demostrando que en los casos de salarios bajos, resulta prácticamente similar la situación tanto en el sistema público de reparto como en el de capitalización.

Pero las cosas cambian si esa situación la llevamos a una persona con un salario de, por ejemplo, mil pesos. Esa persona, si tiene 45 años, con el sistema público de reparto tendría un haber previsional de 528 pesos y en el sistema de capitalización recibiría 588 pesos. Si tiene 25 años de edad la diferencia es mucho más importante pues pasa de 425 pesos en el régimen público de reparto a 635 en el de capitalización.

Con esto quiero demostrar que con el sistema

que estamos proponiendo y con esta tasa del 0,50 por ciento, no sólo garantizamos que el esquema funcione y pueda ser pagado sino que fundamentalmente les estamos diciendo a aquellos sectores integrados por jóvenes o que tienen capacidad de ahorro por su haber previsional tendrá que ver con los años de aportes que realicen en el sistema de capitalización y no con el hecho de que el Estado les garantice algo de un salario que puede ser elevado.

Si este ejemplo lo desarrollamos para el caso de una persona con un salario de 4.000 o 5.000 pesos, advertiremos que esta ecuación que estamos realizando es todavía más importante.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: considero impecable la explicación realizada por el señor diputado Parrilli porque está claro que el objetivo es mostrar un camino, y los propios gestos de los que no comparten la iniciativa así lo demuestran.

De todos modos, deseo saber si el señor diputado Parrilli sustenta la posición de la comisión -es decir, si se establece el 0,50 por ciento- porque si no en el momento de votar deberá quedar en claro de qué dictamen hablamos.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la, palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidentes aclaro al cuerpo que he hablado a título personal; luego, el resto de los integrantes de la comisión hará referencia a la propuesta que ésta realizará.

En el caso de las personas que cuentan con 60, 62 o 63 años, es decir que están próximas a jubilarse, quienes perciban un salario de 300 pesos cobrarán un haber jubilatorio de 295 pesos; para aquellos que en la actividad reciban 500 pesos la jubilación ascenderá a 400. Esto significa que la diferencia entre ambos sistemas será mínima porque aún no habrá capitalización y si la hay será de poca relevancia, ya que quien opte por este sistema cobrará 405 pesos contra un haber de 400 del sistema de reparto y quienes hayan realizado 45 años de aportes cobrarán 427 en el régimen de capitalización contra 397 pesos en el otro sistema. El hecho de establecer una tasa diferencial para quienes ya realizaron sus aportes se fundamenta en que, en su momento, no sabían qué se iban a modificar las reglas del juego.

Es lógico que hagamos un reconocimiento hacia atrás que tenga que ver con la garantía que el Estado tiene que otorgar pero en adelante existirá la posibilidad de optar por un ré

gimen u otro, por lo cual es justo y razonable fijar una diferencia entre la prestación complementaria y la adicional por, permanencia.

A posteriori los señores diputados Sueiro y González Gaviola harán referencia al artículo 29.

Sr. Presidente (Martínez). — En razón de que la comisión aún no ha terminado de responder a las inquietudes planteadas...

Sr Baglini.- En realidad aún no ha empezado.

Sr. Presidente (Martínez). — ... solicito a los señores diputados que me ayuden a ordenar el debate, porque es probable que las exposiciones de los miembros de la comisión que aún no han hecho uso de la palabra nos permitan encontrar elementos que nos eviten formular interrupciones.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: deseo hacer referencia a las dudas planteadas no sólo por miembros de mi bloque sino también por integrantes de los bloques opositores, con respecto a los fundamentos de las decisiones que se han tomado en el tema del valor de las prestaciones complementarias y de la prestación por permanencia; así como también en cuanto a las posibilidades de financiarlas.

Deseo explicitar el fundamento de esta sustancial modificación que hemos realizado en el sentido de brindar la oportunidad de optar entre un sistema de reparto y otro de capitalización individual. Esta opción que se instituye en el artículo 29 bis fue propuesta por las organizaciones obreras e impulsada en el seno del bloque Justicialista por los diputados de extracción gremial y se relaciona con el anhelo que muchos teníamos en el sentido de que este régimen, lejos de ser compulsivo, agregara libertades a los futuros jubilados, a fin de que pudieran elegir distintos tipos de inversiones.

Además, desde el comienzo de la consideración del proyecto advertimos que existían algunos mecanismos que generaban la obligación de tener que caer en forma compulsiva al sistema de capitalización individual. Creemos que el mercado puede cumplir una función positiva dentro del sistema previsional siempre y cuando compita con un Estado que funcione medianamente bien. Por lo tanto, no podemos sancionar un proyecto que brinde prestaciones inferiores a las que podría dar el Estado funcionando bien, porque de esta manera la opción sería falsa. Esto es lo que nos llevó a modificar el porcentaje del 0,5 por ciento al 0,85 por ciento.

Con respecto al financiamiento, entendimos que no había que pensar sólo en la transición sino también en el momento en el que el régimen funcionara puro.

Un régimen de reparto que funcionara medianamente bien, nutriéndose con un 16 por ciento de aporte patronal, cuando no tuviera que pagar la prestación complementaria no podría ofrecer una prestación inferior al 40 por ciento. Se calcula que este régimen que funciona medianamente bien debe tener una tasa de sostenimiento de por lo menos 2,5 activos por cada pasivo, porque de lo contrario no tiene posibilidad alguna de recaudar lo suficiente como para pagar el costo de la financiación.

Otro tema que nos preocupa, pues la oposición ha hecho mucho hincapié, es el del costo de la transición de este sistema. Con una prestación básica universal del 2 por ciento se encarecía largamente el costo de la transición, y las prestaciones que estábamos brindando con un 2 por ciento de reconocimiento eran desproporcionadas al aporte realizado.

Quiero recordar que el proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical plantea en términos generales un reconocimiento del 2,2 por ciento por 26 puntos de aporte de masa salarial, con lo cual el reconocimiento por año es aproximadamente de 0,8 y fracción. Si se extrapolara la idea expresada por el señor diputado Baglini respecto de reconocer el 1,5 por ciento por cada año aportado, con la propuesta que ha realizado el radicalismo surgiría una jubilación promedio superior al 110 por ciento. En verdad sería fantástico que se pudiera pagar ese haber, pero cabe recordar que la crisis que padece el sistema entre otros motivos se originó por fijar metas imposibles de cumplir, y desgraciadamente hoy el pago generalizado de una jubilación promedio de 110 por ciento es de imposible cumplimiento.

Sí nos acercáramos mas a la proposición radical de una jubilación promedio del 66 por ciento cuando funcione este sistema puro con una prestación básica universal del 40 por ciento y un 0,85 por ciento de reconocimiento por año aportado, con lo cual la jubilación promedio sería aproximadamente del 85,5 por ciento. De este modo, se asemejarían mucho las cifras que esta manejando el radicalismo y las que nosotros estamos planteando.

Creemos que en manera alguna se puede constituir un régimen de reparto que devuelva a la gente menos plata que la que ha aportado. Todo régimen de reparto que se precie, con una proporcionalidad entre la base de activos que aportan y los pasivos que perciben haberes, debe recibir una suma mayor que la que paga en concepto de haberes.

Se pueden hacer dos cálculos. Uno de ellos sería que si destináramos el 11 por ciento de nuestro salario durante 30 años a un sistema que nos lo devolviera en un período promedio de sobrevida de 15 años, por lo menos nos tendría que devolver el 22 por ciento del salario aportado. Si esto lo dividiéramos por la cantidad mínima de años aportados que exige la norma resultaría que a una persona habría que pagarle el 0,733 por año aportado para devolverle el dinero que puso en el sistema.

El otro cálculo que podemos hacer para acercarnos al 0,85 por ciento es que si se va a ofrecer la opción de funcionar en un sistema de reparto, para que éste sea medianamente respetable debe tener por lo menos una tasa de sostenimiento de 2,5 activos por cada pasivo. Con esa tasa de sostenimiento tendríamos una erogación de aproximadamente un 27 por ciento del haber, y si dividiéramos ese 27 por ciento por los 60 años aportados nos daría una cifra de 0,8 y fracción.

Estas son las cifras que determinan que vamos a hacer competir el sistema de mercado con uno de reparto respetable, y no con un sistema de reparto que subsidie el traspaso al estatal, como sucedería si se eligiera una retribución inferior a la que estamos proponiendo.

Si en el futuro este régimen lograra tener tasas de sostenimiento superiores que llegaran al 3 o al 4 por ciento y si toda la población económicamente activa aportara, seguramente en ese momento habría que modificar la norma y brindar un reconocimiento superior acorde a las tasas de sostenimiento que rijan en ese momento.

En esta instancia, nuestro objetivo para el corto y el mediano plazo es llegar a un sistema de reparto medianamente respetable que debería tener una tasa de sostenimiento del 2,5 por ciento. Si no se logra esto es imposible pagar la transición. Dado que creemos que vamos a poder pagar la transición, también podremos pagar la PAP.

Sr. Baglini.— Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. - Los señores diputados Parrilli y González Gaviola han tenido expresiones que no conciben con la realidad. Uno de ellos dijo que se ha previsto un tratamiento para quienes ya venían aportando porque esas personas no sabían que se

iba a cambiar la ley. El otro señor diputado señaló que había que garantizar que el sistema por lo menos devolviera lo aportado y no menos. Ahora bien, si realizamos el artículo 26, que hemos objetado, lo que allí se establece nada tiene que ver con esas expresiones.

En definitiva, aquellas personas que estuvieron aportando y no sabían que se iba a cambiar la ley recibirán en devolución mucho menos de lo aportado como autónomos en la categoría superior de profesionales. Hoy el aporte es de 147 pesos y terminarán recibiendo 137.

En dos oportunidades el señor diputado González Gaviola señaló que en el proyecto consensuado se daba una solución por un monto más o menos similar. Aunque sea para el Diario de Sesiones quiero aclarar estas cifras. En el proyecto consensuado con otras fuerzas políticas prevemos dar 2,2 por ciento por año en el sistema de reparto. Quiere decir que un trabajador que hubiera aportado durante 35 años se llevaba el 77 por ciento. En el mismo ejemplo, con una prestación adicional por permanencia, no del 0,5 sino del 0,85 -como propuso el señor diputado Sueiro-, el trabajador se lleva 57,25 por ciento si es un salario medio: 27,5 de la PBU y 29,75 por ciento de la prestación adicional por permanencia, que surge de multiplicar 35 por 0,85. Es decir que se ubica a casi 20 puntos de diferencia de lo que nosotros proponemos. Para llegar exactamente a lo mismo, es decir al 77 por ciento, la prestación adicional por permanencia tendría que ser en este caso de los 35 años 1,41 por ciento, pero estamos muy lejos de eso.

En segundo lugar, quiero señalar que el tema del financiamiento ha estado aquí presente. Se habla del coeficiente de sostenimiento pero lo que no se dice es que nosotros nunca hemos pensado en un sistema previsional que sólo este financiado por los aportes. Por el contrario, nosotros seguimos creyendo que en los sistemas previsionales modernos los impuestos también juegan un rol. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo: se apoyan en impuesto*

* Nota de la DIP: Renglón siguiente ilegible en el original.

Los tributos en el futuro tendrán que recaudarse mejor y este sistema previsional tiene mangueras de alimentación que vienen del impuesto a las ganancias, del IVA y del impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico, así como también de la capitalización que surge de las privatizaciones. Puede ser que alguno de estos elementos desaparezca como medio de mejorar los costos de los empresarios, pero no hay por qué pensar que no existe financiamiento adicional desde los impuestos. Es necesario decidirse a adoptar un sistema previsional que no se base exclusivamente en el concepto de que los únicos que portan son los empleadores y los trabajadores.

Sr. Presidente (Martínez). — Sin perjuicio de la generosidad en la amplitud con que se está desarrollando el debate, debemos guardar un mínimo de respeto para el conjunto de los señores diputados que respetan las reglas del juego y tienen el derecho a exigir lo mismo de sus pares.

Los señores diputados Fescina y Gatti habían solicitado el uso de la palabra y respetuosamente la Presidencia les indicó que permitieran a los miembros informantes de la comisión finalizar con su exposición. La generosidad del señor diputado que habla en nombre de la comisión permitió que se generara un debate dentro de su informe lo cual motivó una suerte de desequilibrio en el derecho que tienen los legisladores para hacer uso de la palabra.

Por ello, la Presidencia hará respetar la decisión que tomáramos en conjunto para que la comisión termine con su informe y luego llegará un orden sobre los pedidos de aclaración.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.— Quiero hacer una aclaración para que no queden dudas, porque considero que debemos hablar utilizando los mismos parámetros.

En primer lugar, quiero aclararle al señor diputado Baglini que cuando el sistema funcione la PBU no va a ser del 30 por ciento, sino del 40 como se establece en el artículo 124, excluyendo lo que ingresa por prestación por permanencia.

En segundo lugar, manifiesto que las cuentas que hemos hecho son a treinta años, como se establece en el proyecto de ley, es decir, 40 por ciento más 25,5 da 65,5 y 2,2 por 30 da 66.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro — Señor presidente: la observación planteada por el señor diputado Varela ya ha sido tenida en cuenta, tal como lo ha dicho el señor diputado Parrilli.

La comisión va a proponer una modificación en

el primer párrafo del artículo 29 bis. Donde dice: "Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para el ejercicio de la mencionada opción", proponemos que se exprese lo siguiente: "Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos administrativos para el ejercicio de la mencionada opción." O sea que agregamos la palabra "administrativos".

En cuanto a la observación del señor diputado Gatti debo decir que vamos a elaborar, de común acuerdo, la redacción de un nuevo artículo que incorporaremos al final de la norma.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.— Señor presidente: la comisión no se ha expedido con respecto a la requisitoria de varios señores diputados —entre los que me incluyo— de mantener al INDEC, como organismo encargado de publicar los índices a utilizar.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. - Señor presidente: si no me equivoco creo que el señor diputado Parrilli había aceptado la inclusión del INDEC.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: había dicho que íbamos a aceptar la propuesta que el señor diputado Fescina formuló con respecto al artículo 21, no así en cuanto al artículo 24, donde la comisión mantiene la postura de suprimir la mención del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Sr. Fescina. — ¿Esto quiere decir que el INDEC desaparece? ¿Sí o no?

Sr. Parrilli.— El INDEC es un organismo oficial, y en el inciso a) del artículo 24 se deja establecido que ese índice deberá ser de carácter oficial. Por ello creemos que es redundante incluir al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Sr. Presidente (Martínez): — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.— Señor presidente: no me satisface la respuesta dada por el señor diputado preopinante, pero es la comisión la que decidió eliminar el INDEC.

Tampoco se ha dicho nada con respecto a mi propuesta de eliminar la palabra "no" en el comienzo del artículo 29 bis.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: hice referencia al artículo 29 bis en cuanto al planteo formulado por el señor diputado Varela, cuyo contenido era muy similar al efectuado por el señor diputado Fescina. De allí que omití mencionarlo, pero la aclaración fue realizada y la comisión mantiene la redacción del artículo 29 bis, con la salvedad que se hizo anteriormente de que se agregue la palabra "administrativo".

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Señor presidente: lamento que la comisión haya seguido ese criterio.

Finalmente debo manifestar que no me puedo expedir con relación al artículo 27, cuya lectura acaba de hacer el señor diputado Sueiro, hasta tanto no cuente con su redacción, ya que ella no figura ni en el Orden del Día N° 922 ni en las modificaciones que se han hecho llegar. De manera que con respecto a este artículo todavía no podría pronunciarse el cuerpo.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: no entiendo la posición de la comisión en cuanto al último párrafo del inciso a) del artículo 24, porque si está en el espíritu de la norma el principio de que corresponde guiarse por los índices del INDEC, lo que abunda no daña -o lo que precisa no daña, como se me está acotando- y dejaríamos aclarado un punto que es central a los efectos de las actualizaciones.

También quisiera que se aclarara el caso que he expuesto del trabajador que percibe un salario de 200 pesos mensuales y cuenta con 30 años de servicios, a los efectos de su retiro, en cuyo supuesto no tendría el adicional por permanencia ni lo que lo correspondería por capitalización.

Quisiera saber si las cuentas que hizo la comisión coinciden con las mías, porque no vaya a ser que exista un inciso perdido que le ponga un límite. En este sentido quiero reiterar que he calculado el AMPO a 150 pesos, y con 30 años de servicios -es decir, 1,5 por ciento por año- serían 90 pesos más, o sea, un total de 240 pesos. ¿No hay algún vericuetto que establezca algún tope?

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.- No hay ningún vericuetto, señora diputada. El cálculo que usted ha efectuado es correcto. No hay ningún tope y la suma que ha mencionado es la que ese trabajador deberá

cobrar.

Sr. Presidente (Martínez). — Como en este momento no hay quórum, se va a llamar para votar el título II.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Fescina.— Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Martínez). —La Presidencia lo ha concedido la palabra cada vez que ha sido necesario, señor diputado. Pero en esta oportunidad...

Sr. Fescina.- Y se lo agradezco, señor presidente. Pero, cómo he anunciado, no tenemos en nuestras bancas la redacción del artículo 27 con las modificaciones que se han propuesto.

Sr. Presidente (Martínez).- Se ha tomado debida nota de su inquietud, señor diputado, y se están adoptando los recaudos del caso. Por eso se está llamando para votar, lo que no significa que el cuerpo se pronuncie sin discutirlo.

Sr. Fescina. —Podríamos votar artículo por artículo hasta el 27.

Sr. Presidente (Martínez).— La Presidencia formulará oportunamente una propuesta para votar ese título, lo que probablemente ayudará para que el cuerpo se pronuncie de un modo más ordenado.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: quiero solicitar una aclaración a la comisión con relación a la redacción del inciso b) del artículo 29 bis. En el texto de las modificaciones propuestas que fueron distribuidas en el día de la fecha, se habla de que el haber mensual se determinará computando un 0,5 por ciento por cada año de servicios con aportes. Luego hubo una propuesta del señor diputado Baglini de llevar ese porcentaje al 1,5. El señor diputado Sueiro, cuando habló en nombre de la comisión, se refirió al 0,85 por ciento, mientras que el señor diputado Parrilli dijo que personalmente se inclinaba por el 0,5 por ciento. Entonces quisiera que haya una aclaración por parte de la comisión sobre esta redacción.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.).- Señor presidente: la comisión aclara que propone reemplazar el 0,5 por ciento por el 0,85 por ciento.

Sr. Presidente (Martínez).- La Presidencia solicita a la comisión que dé lectura a la propuesta de redacción del artículo 27.

Sr. Castillo (J. L.). El artículo 27 quedaría redactado de la siguiente manera: "Estarán a cargo del régimen previsional público las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad hasta la suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria que correspondiere al momento de producida la contingencia.

"También estará a cargo de dicho régimen la pensión por fallecimiento del beneficiario de algunas de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 17.

"Las prestaciones indicadas en los párrafos precedentes se regirán para su otorgamiento, por los mismos requisitos que para dichas prestaciones establece el régimen de capitalización.

"El cálculo de la prestación básica universal se efectuará de acuerdo al artículo 20, inciso a), considerando como años de servicio la suma de los años de servicios con aportes anteriores la invalidez o el fallecimiento, más los años futuros hasta la edad establecida en el artículo 19 incisos a) y b), o la establecida en el artículo 37, si correspondiere.

"En ningún caso la prestación establecida en este artículo será superior al haber de las prestaciones establecido en el artículo 28.

"Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento a seguir relacionado con la determinación de la invalidez en el caso de los afiliados que hubieran ejercido la opción por el régimen de reparto, el que deberá ser compatible en lo pertinente, con lo dispuesto en el capítulo II del título III.

"Las prestaciones por invalidez o fallecimiento a otorgarse a los beneficiarios que opten por permanecer en el régimen de reparto, serán equivalentes a las que se establecen en los artículos 96 y 97."

Sr. Marcó. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Martínez). Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. — Señor presidente: cuando el señor diputado González Gaviola rectificaba los cálculos realizados por el señor diputado Baglini, refería que la prestación básica universal -una vez terminada la transición- no podía ser inferior al 40 por ciento, de acuerdo con los términos del artículo 124 del proyecto en tratamiento.

Pero de la lectura del proyecto surge que el 40 por ciento se refiere no a la prestación básica universal sino al haber que otorga el régimen previsional público, o sea que de mantenerse esta redacción debe entenderse que este 40 por ciento está incluyendo la prestación por permanencia y en este sentido operaría la garantía.

Si esto no fuera así, si el 40 por ciento se refiere exclusivamente a la prestación básica universal, este artículo debería modificarse.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: previendo lo que dice el señor diputado por Entre Ríos, lo invito a que lea la modificación introducida al artículo 124, que obra en el texto que repartimos antes de la sesión, donde se dice que la suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria, si la hubiere, nunca será inferior al 40 por ciento del salario medio de la economía.

De esta forma damos respuesta al planteo del señor diputado, que podría ser válido de no existir la modificación oportunamente prevista.

Sr. Presidente (Martínez). - Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.- Señor presidente teniendo en cuenta la diversidad de criterios que existe respecto del artículo 29 bis, sugiero que se vote alternativamente por el 0,50 y luego por el 0,85, recordando a la Cámara que pasar a esta última cifra representa a la vez un aumento del déficit del sistema y un ataque a los más pobres.

Sr. Presidente (Martínez). —La Presidencia sugiere a la Cámara votar el artículo 19 conforme a las alternativas propuestas por la señora diputada Troyano —criterio apoyado por otros señores diputados— y luego lo propiciado por los miembros informantes del dictamen de mayoría de la comisión. Seguidamente, de acuerdo con el resultado obtenido, correspondería incorporar el texto aprobado como artículo para la votación del título respectivo, conforme se ha hecho con el título I.

Si, hay asentimiento, así se procederá.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una indicación tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli.- Señor presidente: para ir ganando tiempo y agilizar el debate, propongo

que la Presidencia tome nota en este momento quiénes quieren hacer uso, de la palabra en la consideración del título III, quedando así clausurada la lista de oradores. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez).- Entendiendo la presidencia que el señor diputado solicita un cierre de lista de oradores para la discusión del título III, hacer saber que actualmente se encuentran incluidos en dicha nómina los señores diputados González Gaviola, Troyano, Sánchez Galdeano, Fescina, Aguado, Sabio y Loutaif.

Sra. Casari de Alarcia.- Que los radicales, que ahora no están, no se anoten luego.

Sr. Gatti.- Si me permite, señor presidente, creo que ésta no es una medida adecuada pues la intervención de los legisladores que se acaban de retirar fue importante y puede ayudar a mejorar el proyecto de ley. Por lo tanto solicito que se retire esa moción y se permita hacer uso de la palabra a los señores diputados que se incorporen con posterioridad a la votación de este capítulo.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Señor presidente: los que nos quedamos lo hicimos para mejorar este proyecto de ley en la medida de lo posible. Entonces no nos pidan complicidad para el cierre del debate

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Fescina.- Tengamos paciencia para concluir como lo estamos haciendo; pero no nos compliquen con un cierre de debate.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin.- Señor presidente: creo que sobran muestras de la paciencia y de los deseos de participación de todos los presentes para que cada uno exponga con total libertad. Como el tema en cuestión no es menor, no estamos hablando de que se participe de cierres de debate o de cláusulas mordaza sino de la dignidad de quienes estamos trabajando aquí en forma positiva. Que venga quien quiera y que diga lo que quiera; pero levantarse inmediatamente para estar al quórum es una falta de respeto. (*Aplausos.*) Aquí no está en juego que alguien hable o no; lo que está en juego es la burla a la que metódicamente está siendo sometido el cuerpo. Que vengan y hablen setenta veces siete si así lo consideran necesario, pero al momento de tomar decisiones deben estar con el resto de la Cámara. Estamos aludiendo no a la posibilidad de hablar

sino a la de que no se nos respete, que es una cosa totalmente distinta.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.- Señor presidente: creo que el quórum lo vamos a seguir obteniendo y siempre llegaremos a 130 diputados. Entonces, hago un llamado a los señores legisladores radicales para que no entremos en una chiquilinada. Este ya no es un recurso parlamentario sino una chiquilinada: estar detrás de las cortinas, entrar, hablar y salir corriendo. No estoy de acuerdo con las mociones mordaza, pero tampoco con las chiquilinadas. Nosotros seguiremos posibilitando el quórum todas las veces que sea necesario, pero llamamos a los radicales para que enriquezcan el debate y actuemos con mayor seriedad.

Sr. Presidente (Pierri).- Corresponde votar por partes el título II del proyecto de ley, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Se va a votar el artículo 19.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). -- Se van a votar los artículo 16 a 37.

-Resulta afirmativa.

Sr. Ruckauf. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf.— Señor presidente: simplemente deseo dejar constancia de que en la votación respecto de la edad de la mujer para jubilarse me pronuncié en forma negativa.

11

PRONUNCIAMIENTO

12

MOCION DE SOBRE TABLAS

13

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sigue en página 291

14

**SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL****(Continuación)**

Sr. Presidente. (Pierri). - Continúa la consideración en particular del dictamen sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social.

Sra. Troyano. - Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri).- Previamente debemos votar la moción del señor diputado Matzkin de cierre de la lista de oradores, con los que están anotados o se quieran anotar.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin.- Señor presidente: sería prudente en razón de la armonía en el trabajo del cuerpo postergar la decisión de esta moción y por eso solicito que no sea puesta a votación.

Sr. Presidente. (Pierri).- Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Matzkin.— Además deseo informar que hemos realizado una ronda de consultas con los distintos bloques y en virtud de ella hemos estimado que el tratamiento del título III podría demandar aproximadamente una hora de debate, presumiéndose que la votación del título sería a las 22 y 40.

Sr. Presidente (Pierri). — Se toma nota, señor diputado.

La Presidencia aclara que el título III comprende hasta el artículo 129.

Sra. Troyano.— Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia solicita a los señores diputados que deseen formular cuestiones de privilegio que posterguen su petición para el momento en que se haya concluido con la consideración del presente dictamen, oportunidad en la que la Cámara también deberá considerar el proyecto cuyo tratamiento sobre tablas solicitó el señor diputado Gatti.

Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano. — Señor presidente: la cuestión de privilegio que deseo plantear se vincula con el resultado de la votación del artículo 19, ya que había solicitado al señor vicepresidente 1° —en ese momento en ejercicio de la Presidencia— que la votación se realizara mecánicamente. Cuando el señor presidente del cuerpo sustituyó al señor vicepresidente 1° en el ejercicio de la Presidencia no respetó la solicitud que había realizado y a raíz de ello muchos diputados votaron en forma equivocada.

Por este motivo solicito la reconsideración de la votación del artículo 19.

Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia aclara a la señora diputada por Salta que lo que está solicitando es una reconsideración de votación y no una cuestión de privilegio.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores.- Señor presidente: solicito que se deje constancia de que voté negativamente el artículo 19.

Además formulo moción de orden en el sentido de que se reconsidere el mencionado artículo y se proceda a votar mecánicamente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Santa Cruz. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Queda rechazada la moción.

Sra. Bermúdez.- Señor presidente: solicito que se deje constancia de mi voto negativo a artículo 19.

Sr. Presidente (Pierri). - Así se hará, señor diputada.

—Dejan constancia de su voto negativo al artículo 19 los señores diputados Troyano, Roy, Tacta de Romero, Pepe, Durrieu, Gatti, Gargiulo, Green, Larraburu, Corchuelo Blasco

Manfredotti, Barberá y Guzmán, y a la totalidad del título II el señor diputado Várela.

Sr. Presidente (Pierri).- En consideración en particular el título III, que comprende 38 a 129.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.— Señor presidente: voy a hacer referencia a las modificaciones introducidas al título III, que comprende los artículos 38 a 129.

El artículo 38, destinado al financiamiento, quedaría redactado de la siguiente manera: "Financiamiento. Se destinarán al régimen de capitalización los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia establecidos en el artículo 11 que no hubieran ejercido a opción prevista en el artículo 29 bis, y once 11) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos establecidos en el mismo artículo".

Sr. Ruckauf.- ¿Me permite una interrupción señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. González Gaviola.- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf.- Señor presidente: solicito que invite a los señores diputados que deseen escuchar al orador a que guarden silencio y ocupen sus bancas, y al resto, a los que no están interesados, a que se retiren del recinto.

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio y respeten al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.— El artículo 39 ha sufrido dos modificaciones. Una de ellas es la incorporación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como ente facultado para constituir una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, y la otra consiste en que la administradora del Banco de la Nación Argentina orientará un porcentaje de sus recursos al desarrollo de las economías regionales. Concretamente, el artículo 39 quedaría redactado del siguiente modo: "Entidades receptoras de los aportes. La capitalización de los aportes destinados a este régimen será efectuada por sociedades anónimas denominadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en adelante también administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y control previstos en esta ley y en sus normas reglamentarias. Asimismo los estados provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, otras sociedades, entidades o asociaciones de diversa naturaleza —con o sin

finés de lucro—, que se erigieren con este objeto exclusivo podrán constituirse como administradoras, las que sin perjuicio de adoptar una figura jurídica diferente, quedarán sujetas a idénticos requisitos, normas controles.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Carlos Federico Ruckauf.

Sr. González Gaviola. —"Toda administradora, sin distinción de su forma jurídica quedará bajo el control y la supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de jubilaciones y Pensiones que instituye el artículo 116 de la presente; ello no obstante el contralor que pudieren desarrollar los diversos órganos de fiscalización pertinentes, según la forma legal que hubieren adoptado. Dichos órganos deberán actuar sin interferir en las funciones específicas de la citada superintendencia, cuyas normas serán de observancia obligatoria para las administradoras.

"Queda derogada toda norma que impida a las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, mutuales, cooperativas, colegios públicos de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otro ente de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, constituir a participar como accionistas de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

"Dispónese que el Banco de la Nación Argentina desempeña, sin perjuicio de las actividades que le permite su Carta Orgánica, la actividad de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, debiendo adecuar su estructura a tal efecto dentro de los treinta días de promulgada la presente ley.

"Agrégase al artículo 3º de la ley 21.799:

"Inciso g) Administrar Fondos de jubilaciones y Pensiones y la actividad aseguradora exclusivamente inherente a este efecto dando cumplimiento en lo pertinente a la ley 24.091 sometiéndose a su organismo de control.

"La AFJP así constituida quedará bajo el control y supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, estando sujeta a los mismos requisitos, normas y controles que rigen el resto de las AFJP. El estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo el aporte depositado, de

ducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 98 de la presente, que en ningún caso será inferior a la mayor de las siguientes alternativas: a) Los importes depositados en pesos con más una tasa de interés que devengue el Banco de la Nación Argentina en sus cajas de ahorro para depósitos en pesos; b) Los importes depositados en pesos convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argentina del día en que se efectúe cada depósito, con más la tasa LIBO para depósitos a 90 días.

"Esta administradora del Banco de la Nación Argentina orientará no menos del 20 % de los aportes que constituyan su fondo, a créditos o inversiones con destino a las economías regionales en las condiciones que fije la reglamentación.

"Las AFJP administradas por el sector privado podrán otorgar garantías a su costo y riesgo."

El artículo 40 sufre la siguiente modificación: donde dice "Toda persona que quede incorporada al SIJP...", debe decir "Toda persona que quede incorporada al régimen de capitalización...". De manera que la redacción definitiva sería: "Toda persona que quede incorporada al régimen de capitalización deberá elegir individual y libremente una administradora, la cual capitalizará en su respectivo fondo de jubilaciones y pensiones los aportes establecidos en el artículo 38 y las imposiciones y depósitos a que se refieren los artículos 55 y 56. La libertad de elección de la administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada administradora. Cualquier acuerdo contractual al respecto resultará nulo de nulidad absoluta, sin que ello afecte el beneficio concedido.

"El afiliado deberá incorporarse a una única administradora aunque el mismo preste servicios para varios empleadores o realice simultáneamente tareas como trabajador dependiente y en forma autónoma."

El siguiente artículo modificado es del 42, el que se propone agregar al final de su primer párrafo, donde dice "... días corridos posteriores al inicio de la relación laboral" esta redacción: "o la opción ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 bis". De manera que este párrafo quedaría redactado como sigue: "Obligaciones del afiliado y del empleador.

El trabajador en relación de dependencia deberá comunicar a su empleador la administradora en la que se encuentra incorporado o decida

incorporarse dentro del término de treinta (30) días corridos posteriores al inicio de la relación laboral o la opción ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 bis."

En cuanto al artículo 48 voy a solicitar al señor diputado Sueiro que detalle las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. - En este artículo introducimos una modificación en los párrafos anteúltimo y último del apartado segundo a fin de adecuarlos a la incorporación que hiciéramos oportunamente del artículo 29 bis.

En el anteúltimo párrafo señalado proponemos testar a continuación de donde dice "... y la ANSES:..." la siguiente expresión: "... en los casos del artículo 90 *in fine*."

En el último párrafo del punto 2 proponemos la siguiente redacción: "La comisión médica informará toda actuación realizada a la administradora en la cual estuviera incorporado el afiliado, a su aseguradora y a la ANSES." Es decir que suprimimos: "en los casos del artículo 90 *in fine*."

En el punto 3, de este mismo artículo su inciso d) quedaría: "La ANSES", y se suprimiría "en los supuestos del artículo 90 *in fine*."

Estas son las modificaciones que la comisión propone al artículo 48 para que esté en consonancia con el artículo 29 bis que acabamos de incorporar.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: voy a proponer una serie de modificaciones a algunos artículos incluidos en el título que estamos considerando.

En el artículo 54 se suprime la palabra "obligatorios", por lo que su redacción definitiva sería la siguiente: "Aportes obligatorios. Los aportes personales con destino al régimen de capitalización establecidos en el artículo 38, una vez transferidos conforme al procedimiento indicado en el inciso b) del artículo 35 de la presente ley, serán acreditados en las respectivas cuentas de capitalización individual de cada afiliado."

En el artículo 67, que se refiere al régimen de comisiones, proponemos varias modificaciones, por lo que quedaría redactado de la siguiente forma: "Régimen de comisiones. El ré

gimen de comisiones que cada administradora fije se ajustará a las siguientes pautas:

"a) Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes; la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos; y el pago de los retiros que se practiquen bajo la modalidad de retiro programado"

El inciso b) quedaría redactado tal como figura en el proyecto aprobado en general.

Proponemos además la modificación del inciso c), el que quedaría redactado de la siguiente forma: "Las comisiones por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos podrán establecerse sobre la base de un porcentaje sobre los valores involucrados, una suma fija por operación, o una combinación de ambos."

El inciso d) quedaría redactado igual que como figura en el despacho de comisión.

En cuanto al artículo 73, que se refiere al criterio general de las inversiones permitidas, vamos a proponer modificaciones en los incisos a), g), n), ñ) y o), además de dos incisos que vamos a agregar.

En el inciso a), donde dice "80 por ciento" debe decir "30 por ciento".

En el inciso g), donde dice "30 por ciento" debe decir "40 por ciento, siempre que se destine a economías regionales".

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia desea saber si la expresión "siempre que se destine a economías regionales" forma parte del inciso.

Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Parrilli.— El inciso g) quedaría redactado de la siguiente manera: "Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el 40 por ciento, siempre que se destine hasta un 10 por ciento a economías regionales."

Sr. Presidente (Ruckauf).— La Presidencia surge a la comisión que efectúe las correcciones necesarias en la redacción del texto que propone antes de someterlo a votación a fin de que quede debida constancia del texto propiciado.

Sr. Parrilli.- El señor diputado González Gaviola continuará con la lectura de las modificaciones que se proponen y luego volveremos sobre este inciso g).

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: otra modificación se propone con relación al inciso n) donde dice "20 por ciento (20 %)" debe decir "30 por ciento (30 %)". Asimismo, en el inciso ñ) proponemos sustituir la expresión "de participaciones" por "de cuotas de participación". A su vez se propugna el agregado de dos incisos,

que llevarían las letras o) y p) y que dirían lo siguiente "o) obras públicas de interés nacional o regional, de infraestructura y servicios públicos, de utilización de mano de obra intensiva o que promuevan el desarrollo de actividades productivas a largo plazo, tengan asegurada suficientemente la restitución y como mínimo las garantías de intangibilidad y rentabilidad previstas en el artículo 39. En estos casos estarán a cargo de la AFJP que cree el Banco de la Nación Argentina, hasta un treinta por ciento (30%)

El inciso p) diría: "Financiamiento de viviendas nuevas garantizado por entidades financieras a través de la emisión de certificados de depósito con fines constructivos y a tasa variable durante la etapa de construcción y de títulos, cédulas o letras hipotecarias una vez finalizados las mismas, hasta un veinte por ciento (20 %)",

Asimismo se propone la modificación del inciso c) del artículo 74, que quedaría sustituido por el siguiente: "Acciones de sociedades gerentes de fondos de inversión, ya sean comunes o directos, de carácter fiduciario y singular".

Sr. Fescina.-¿Me permite una interrupción señor diputado, con la venia de la Presidencia?. **Sr. González Gaviola.**— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Señor presidente: a los efectos de colaborar con la comisión en la búsqueda de una redacción apropiada del inciso g) del artículo 73 propongo que su texto diga lo siguiente: "Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el treinta por ciento (30%), el que podrá llegar al cuarenta por ciento (40%) siempre que la diferencia se destine a economías regionales".

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— La redacción es aceptable. El artículo que propone la comisión diría: "Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el treinta por ciento (30 %). Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales."

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: con relación al artículo 75 vamos a proponer

modificaciones al inciso g) . Después de donde dice "establecidas en el inciso n)" se agrega la expresión "y p)"

Sr. Presidente (Ruckauf).- El artículo 75 se refiere a las limitaciones, señor diputado.

Sr. González Gaviola.- El inciso g) del artículo 75 quedaría redactado de la siguiente manera: "En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso n) y p) del artículo 73 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones de fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias." Es decir que a la redacción originaria se agregaría la expresión "y p)" .

El inciso h) del artículo 75 también presenta una modificación, quedando redactado de la siguiente manera: "En ningún caso las inversiones en cuota partes de un fondo de inversión directa establecidas en el inciso ñ) del artículo 73 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo de inversión directa, establezcan las normas reglamentarias."

El 8º párrafo del artículo 78 que figura en el Orden del Día N° 922 se sustituye por el siguiente: "En el caso de los fondos de inversión directa se tendrá en cuenta la naturaleza y demás características de los proyectos de inversión, que a través de los mismos se encaren, así como también la solvencia técnica y económica de sus operadores y todo otro elemento relevante para evaluar el riesgo de los mismos."

En el inciso a) del artículo 82 se suprime la palabra "obligatorios". Antes decía "La integración de los aportes obligatorios destinados al régimen de capitalización..."

Hay otras modificaciones de las que va a informar el señor diputado Sueiro.

Sr. Presidente (Ruckauf). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. -- Señor presidente: siguiendo con el objetivo de que la normativa sea coherente con la nueva redacción del artículo 27, la comisión propone eliminar el último párrafo del artículos 90, desde donde dice: "... En virtud de las disposiciones del primer párrafo del artículo 27... ", hasta donde dice "... 31 de diciembre de 1946 inclusive."

Siguiendo el principio de encontrar un correlato con el artículo 27, se propone la siguiente redacción para el artículo 92: "Capital técnico necesario. El capital técnico necesario se determinar conforme a las siguientes pautas a) A

los efectos del retiro definitivo por invalidez, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencia del causante y de sus beneficiarios a partir de la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionadas en el artículo 27. b) A los efectos de la pensión por fallecimiento del afiliados en actividad, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencias de los beneficiarios de pensión a partir de la fecha del fallecimiento del causante y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionadas en el artículo 27.

"El capital técnico necesario se calculará según las bases técnicas que establezcan juntamente la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Seguros de la Nación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97."

Sr. Presidente (Ruckauf).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: creo que al artículo 90 habría que darle una revisada más, porque a mi entender deberíamos introducir algunas modificaciones en el primer párrafo.

En el artículo 93 se suprime la palabra "obligatorios".

En el artículo 94, inciso a), punto 1 también se suprime la palabra "obligatorios".

En el artículo 109 donde dice: "Los afiliados...", proponemos agregar "pertenecientes al régimen de capitalización", y luego la redacción continúa tal cual está.

En el artículo 123, donde dice: "El Estado garantizará a los afiliados al SIJP", debe agregarse "pertenecientes al régimen de capitalización".

En el artículo 124, donde dice "el haber que otorgue el régimen previsional público... ", se debe agregar "como suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria, si la hubiere, no será inferior..."

Sr. Fescina.- Hay una contradicción en la medida que este artículo establece que el indicador utilizado deberá ser de carácter oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística

y Censos, y en un artículo anterior no se aceptó la sugerencia en un sentido similar efectuada por algunos señores diputados.

Sr. González Gaviola.- Creo que de todas maneras todo índice oficial debe ser publicado.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Debe quedar en claro que no necesariamente un índice oficial tiene que ser publicado en algún momento por el INDEC. Por eso oportunamente el señor diputado Fescina y otros sostuvimos la tesis de la incorporación del INDEC. Si en este artículo la comisión sostiene la mención del INDEC, la Presidencia entiende que podría ser tomado como criterio interpretativo del artículo 24, quedando constancia en el Diario de Sesiones de que el concepto de índice oficial está ligado al INDEC.

Sr. Lamberto.— La Presidencia no puede interpretarlo que votó la Cámara.

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia está ejerciendo el rol interpretativo que el reglamento le otorga en este tipo de casos.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif.— Creo que el señor presidente hizo una buena interpretación. Me parece bien que quede registrada en el Diario de Sesiones. Coincido con la interpretación porque la redacción del artículo 124 es similar a la que tenía el artículo 24, y aquí estamos diciendo que el indicador deberá ser de carácter oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Si acá se decide que el órgano oficial es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, no encontramos razones para que se lo haya eliminado del otro artículo. Para evitar cualquier duda de interpretación o alguna cuestión judicial, insisto en que los índices oficiales deben entenderse como los que publica el INDEC. No nos olvidemos que ésta es una ley a largo plazo - como usted mismo señaló en su fundamentación, señor presidente-, y quien en este momento es oficialismo mañana puede llegar a ser oposición.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Queda aclarado que se mantiene el texto con la inclusión de "INDEC".

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: quiero volver sobre el artículo 94, al que debemos agregar una modificación, según me indica el señor diputado Sueiro. Debe quedar redactado así: "Responsabilidad y obligaciones. La administradora será exclusivamente responsable y estará obligada a: a) El pago del retiro transitorio por invalidez a los afiliados declarados inválidos una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto del artículo 27 mediante el dictamen transitorio, siempre que..." , y continúa con su redacción original.

El artículo 125 quedaría modificado en su re-

dacción de la siguiente manera: "El Estado garantiza a los afiliados que hubieran ejercido la opción del artículo 29 bis la percepción de la prestación adicional por permanencia."

Por otro lado, suprimimos los artículos 128 y 129.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Dado lo manifestado por el señor diputado por Mendoza en el sentido de que determinados artículos serán suprimidos, entiendo que la Presidencia luego deberá ser facultada por el cuerpo a fin de ordenar la numeración de los artículos de la ley...

Sr. González Gaviola. Sugiero a la Presidencia que transitoriamente sigamos refiriéndonos a los artículos según la numeración con que aparecen en el proyecto y en la correspondiente modificación, para luego facultar a la Presidencia a que haga un ordenamiento global.

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia entiende que es lógico el procedimiento sugerido por el señor diputado por Mendoza.

Sr. Albamonte.- Si me permite, señor presidente, quisiera señalar que sería interesante que no existiera ningún artículo "bis", pues eso facilitaría el reordenamiento que hará la Presidencia.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Oportunamente será tenida en cuenta su sugerencia.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — En relación con el artículo 130 referido a la vigencia, adelanto que se mantendrá su redacción original.

Sr. Presidente (Ruckauf). —De todas formas ese artículo forma parte del título IV, que ser considerado con posterioridad.

Sr. González Gaviola.- Simplemente quería hacer esa aclaración porque en algún momento se solicitó su modificación.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente faltaría terminar, de redactar el artículo 90, sobre uno de cuyos párrafos tenemos algunas discrepancias. El señor diputado Parrilli dará lectura de la redacción final.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. —El primer párrafo del artículo 90 quedaría redactado de la siguiente manera:

"Financiamiento. Las prestaciones de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento establecidas en esta ley para el régimen de capitalización se financiarán con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado, conforme al artículo 27 de esta ley."

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte.— Señor presidente: solicito que se modifique el segundo punto -referido al procedimiento- del artículo 61 de modo tal que su redacción comience del siguiente modo: "Cuando se presente ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos de jubilaciones y Pensiones una solicitud de autorización, ésta verificará y evaluará la documentación acompañada acreditando los requisitos:..."

El fundamento de esto es que en la parte final del primer punto se establece que quienes soliciten la autorización deben acompañar la demostración de la viabilidad económico-financiera del proyecto, lo cual requiere que sea evaluado. En consecuencia, la Superintendencia no puede limitarse a verificar pues si se está solicitando la demostración de la viabilidad económico-financiera evidentemente hace falta una evaluación ya que la resolución aceptando o denegando debe ser fundada. Entendemos que no existe mayor riesgo de arbitrariedad en este sentido. Luego acercaré a la comisión la redacción final a fin de facilitar su trabajo.

En cuanto al artículo 62 propongo una modificación del capital mínimo. El proyecto original del Poder Ejecutivo lo fijaba con buen criterio en un millón y medio de pesos. Yo insisto en eso valor tomando en cuenta la experiencia de nuestro país hermano Chile. Cómo en general no se han verificado aseguradoras de mayor volumen muchas veces se puede dar el caso —como ocurre en Chile— de que hay aseguradoras más pequeñas y eficientes. En consecuencia sería razonable volver a la redacción original de este proyecto, que asignaba un capital mínimo de un millón y medio de pesos.

Con respecto al artículo 73 proponemos una modificación muy simple de su inciso n) de modo tal de elevar el 20 por ciento de la participación al 40 por ciento. Esto permitiría movilizar fondos que por otro lado estarían resguardados por lo que establece el inciso y podrían ser vehículos muy eficaces para inversiones de tipo productivo. Por lo tanto encontramos absolutamente razonable aumentar ese porcentaje.

En el artículo 78 proponemos incorporar el siguiente párrafo final: "La Superintendencia de

las administradoras de jubilaciones y pensiones determinará qué grado de calificación podrá acceder a integrar inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones."

Entendemos que está bien que la ley estime un proceso de calificación pero asimismo entendemos que el mismo no es suficiente. Además de calificar los títulos, la Superintendencia deberá decidir el grado de calificación para ser aceptado. Esto es importante porque el solo hecho de que un título sea calificado no amerita la total seguridad que el título tiene, y en un sistema de seguridad social es importante también que exista además de la calificación la posibilidad de que haya diversos grados.

Estas serían las modificaciones que proponemos y que hago llegar por escrito a la comisión, tal como lo establece el reglamento.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Sánchez Galdeano. — Señor presidente: solicito la modificación de los artículos 39, 66, 70 y 104.

En el artículo 39 requiero la supresión del párrafo que dice: "El Estado nacional garantiza a los afiliados de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones creada en la segunda parte de este artículo el aporte depositado, deducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 98 de la presente, que en ningún caso será inferior a la mayor de las siguientes alternativas: a) Los importes depositados en pesos con más una tasa de interés que devengue el Banco de la Nación Argentina en sus cajas de ahorro para depósitos en pesos: b) Los importes depositados en pesos convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argentina del día en que se efectúe cada depósito, con más la tasa LIBO para depósitos a 90 días."

Fundamento la supresión de esta parte del artículo 39 en primer lugar porque el Estado nacional, al incorporar a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, está garantizando toda inversión o todo depósito que se efectúe. Es decir que sería redundar o reiterar un concepto que es fundamental y que está expresado en la ley 21.799 de creación del Banco de la Nación, en la cual se establece que el Estado na-

cional garantiza los depósitos correspondientes a cualquiera de los habitantes de la República. Entonces esta reiteración no tiene objeto. Además la inclusión de este párrafo en el artículo 39 establece una desigualdad con respecto a las otras instituciones que participan en este estado de capitalización. La diferencia es notable porque el Banco de la Nación garantiza a los afiliados de la administradora por él creada los aportes depositados, deduciendo exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 98. No fija ninguna de las otras deducciones que las empresas privadas deben efectuar a ese tipo de depósitos, lo que significa una considerable desigualdad en relación con los aportantes al sector oficial.

Por otra parte, el hecho de aumentar la masa depositada por cada uno de los afiliados, incrementada con los intereses que devengarán los aportes hechos en pesos, más los intereses provenientes de los importes depositados en pesos convertidos a dólares estadounidenses en base a la tasa LIBO para los depósitos a 90 días, constituye una desigualdad con respecto a los depositantes en otro tipo de cajas. Esta situación representa una competencia desleal de parte del Banco de la Nación para con las otras instituciones financieras, incluso las de tipo provincial que deseen participar en el sistema de capitalización.

Con respecto al artículo 66 solicito que en el último párrafo se suprima la palabra "libremente", y que luego de: "por cada administradora" se incluya: "hasta un tope que será determinado en la reglamentación de esta ley".

En el artículo 70, que establece los mecanismos de liquidación de una Administradora, solicito que se agregue un inciso por el que se establezca cerrarán las administradoras en las que se produzca una desafiliación masiva superior al 30 por ciento de los afiliados que hubiere registrados.

A su vez considero que es poco clara la redacción del primer párrafo del artículo 104 que dice lo siguiente: "Pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad del retiro programado. Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado." Realmente no sé lo que pretende expresar esta primera oración ni tampoco la que sigue: "Mientras no se haya ejercido opción, los cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión." En mi opinión este párrafo debería quedar redactado

así: "Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado, podrán disponer del saldo de la respectiva cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión."

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.— Señor presidente: deseo referirme a tres cuestiones. La primera de ellas es de orden gramatical, quizás de índole menor, pero como soy un diputado novel y desconozco qué es lo que vale respecto de las variadas versiones que se discuten, quiero hacer notar que al final del artículo 39 hay un párrafo que dice así: "Dispónese que el Banco de la Nación Argentina desempeña...", cuando en realidad debe decir "desempeñe". Se trata de modos verbales diferentes: el indicativo y el subjuntivo.

En un párrafo posterior del mismo artículo el señor diputado González Gaviola me parece que leyó lo siguiente: "El Estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo que el aporte depositado...", cuando en realidad el texto dice: "el aporte depositado".

Pido que oportunamente la comisión aclare estas cuestiones.

Asimismo deseo referirme a dos artículos, en particular el 39. Al igual que en la discusión del título anterior debo cumplir con un imperativo de conciencia, y más allá de las discusiones internas en el bloque creo que en un proyecto de ley de tanta trascendencia es fundamental para nosotros decir lo que realmente sentimos porque se está legislando para treinta o cuarenta años y en esta normativa se mezclan una gran cantidad de variables.

Tenemos una contradicción que es difícil de salvar, aunque nuestra buena voluntad, honestidad y vocación de trabajo han intentado hacerlo. La contradicción se da entre el bienestar de los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones y el equilibrio del sistema, lo que yo denominaría el problema del equilibrio macroeconómico. ¿Cuál es la mejor manera de repartir bienestar? ¿Se distribuye desde la buena voluntad o desde la producción? ¿Se distribuye desde el equilibrio o simplemente desde —reitero— la buena voluntad del legislador y la vocación política del gobernante? Esta es una de las grandes discusiones que sostienen todos aquellos que deben adoptar decisiones todos los días.

Quienes como yo fuimos formados en la sana y noble heterodoxia, muy lejanos mis tiempos

jóvenes de la ortodoxia que reina hoy en día, hacíamos primar la distribución sobre la producción. Entonces creíamos que el acuerdo de los sectores era más importante que el equilibrio macroeconómico.

Seguramente usted y yo, señor presidente, hemos hablado muchas veces de concertación como la solución que habíamos inventado los peronistas para todos los problemas del desequilibrio macroeconómico. Pero después nos dimos cuenta de que la concentración no alcanzaba; y dentro del funcionamiento de la economía, sobre todo cuando se pasan los límites del desorden aceptable —hay desórdenes aceptables y otros extremadamente negativos y la Argentina había superado ese umbral—, la idea de que la concertación o expresión de la voluntad política era mejor en sus efectos que el equilibrio macroeconómico fue sepultada por los hechos.

Hemos tenido que comenzar a meditar sobre muchas cosas y dentro de esa reflexión no hemos perdido la vocación primera de la distribución como eje y resultado final de la economía, pero sí hemos aprendido la necesidad del equilibrio. Este proyecto nos plantea en este sentido dilemas éticos muy profundos, porque si bien estamos legislando para nosotros mismos, para nuestra generación, para los futuros jubilados, no podemos separarnos de la imagen de la realidad de la calle, la realidad de nuestros padres y abuelos jubilados.

Se nos confunden las imágenes y tenemos miedo de que la ley no dé a los futuros jubilados una alternativa mejor que la que recibieron nuestros padres y abuelos, pero por otro lado nos planteamos cuáles son las armas para que todo suceda de la mejor manera posible.

He hecho este largo introito porque quienes redactaron y modificaron este proyecto saben que lo que ocurre con el artículo 39 es una muestra cabal del trabajo serio realizado en nuestro bloque, en las comisiones y en este recinto, sin ningún tipo de verticalismo.

Este artículo 39 es uno de los nudos de las modificaciones que se han hecho porque se introduce una garantía explícita. La idea de la garantía es muy importante porque avanza sobre uno de los aspectos centrales de la preocupación de todos los argentinos en función de nuestra memoria reciente acerca de la inestabilidad. ¿Es sano y razonable obligar a los argentinos a aportar a una caja negra que puede explotar en el futuro?

En el imaginario popular el Estado es mucho más seguro que el sector privado, más allá de que haya cambiado el paradigma. Para gran parte de la población el Estado sigue siendo más seguro que

el sector privado. Cuando pedimos a los futuros jubilados que aporten al sector privado, sanamente nos preguntamos cómo hacer para garantizarles la percepción de una jubilación digna, más allá de los avatares que a nuestra memoria cortoplacista nos trae al presente permanentemente. Por eso justamente está el artículo 39.

Debo decir que he dudado y pensado mucho acerca de las modificaciones y observaciones que voy a formular. Trataré de sintetizarlas.

Para que la futura ley cumpla en su totalidad con los objetivos que se han planteado deben concurrir varios factores. En primer lugar es necesario una economía que crezca, y como me juego desde la racionalidad y el sentimiento al crecimiento de la economía, sostengo que las previsiones pesimistas que se han hecho —especialmente desde el bloque de la oposición— no tienen el menor sentido y que las tasas de crecimiento y rentabilidad de la economía argentina van a superar en mucho los cálculos que se han realizado.

En segundo lugar es necesario un estado de equilibrio y finalmente el equilibrio interno del sistema jubilatorio. Estas son las tres variables que van a asegurar que, más allá de nuestra buena voluntad, los aportantes puedan cobrar una jubilación digna.

La previsión establecida en la garantía del artículo 39 en cuanto permita que sea definida al final —es decir, al momento de cobrar la prestación— introduce un gravísimo desequilibrio de naturaleza macroeconómica. Para decirlo de una manera muy simple, cualquier institución financiera tiene que tener sus pasivos calzados con sus activos; deben estar en la misma moneda, con el mismo riesgo o con la misma tasa de interés. De otra manera el sistema es explosivo porque ocurre algo parecido a lo que acontece con la economía doméstica: uno no puede gastar más de lo que le ingresa, y peor aún si esto se produce en el largo plazo. Por lo tanto, cuando la garantía que se propone es la mejor —sea en pesos o en dólares— y además estamos planificando a 30 o 40 años, la única solución posible de las administradoras de fondos de jubilación y pensión es colocarse en uno de los activos a los que se atribuye mayor seguridad. Teniendo en cuenta la historia pasada de la Argentina

y el hecho de que formamos parte de un país que durante mucho tiempo va a continuar siendo tomador de pesos en el mercado internacional, que vamos a seguir sufriendo la crisis de los mercados en términos del intercambio y que la balanza de pagos va a seguir siendo un elemento determinante de nuestra evolución, no cabe duda alguna de que existirá una tendencia masiva a la colocación de activos en dólares, lo que introducirá un grave factor de distorsión en el sistema pues ello puede llevarnos a una situación contradictoria con lo que se está buscando...

Sr. Manny.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Amadeo.— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny.- Señor presidente: es importante la observación que está planteando el señor diputado por Buenos Aires, por lo que es oportuno recordarle que —aun siendo cierto lo que ha dicho con respecto a la colocación en dólares —la divisa norteamericana en muchas oportunidades tuvo fuertes devaluaciones. Incluso hubo un período de dos años en el que la devaluación llegó al 40 por ciento. O sea que aunque se tomen recaudos en dólares, ello es medio difuso. Esto lo digo no como una observación sino como un aporte a la exposición del señor diputado Amadeo.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo. - Señor presidente: manifiesto mi preocupación con respecto a la redacción propuesta para el artículo 39.

Voy a cometer una infidencia al revelar que el señor diputado Aguado va a proponer una nueva redacción para dicho artículo. Invirtiendo el orden razonable del trabajo parlamentario me permito expresar mi adhesión por anticipado a esa propuesta que formulará el señor diputado por Buenos Aires.

Otra observación que quiero plantear está relacionada con el artículo 73, que se refiere al criterio general para las inversiones permitidas de las administradoras. En este caso existe otra variable que se vincula con la seguridad microeconómica -si se me permite la expresión- de las inversiones de las administradoras. Aquí el criterio es uno solo: el de la seguridad. La seguridad es más importante que la rentabilidad, porque se trata del dinero de los futuros viejos.

Por la reforma que se ha propuesto en el inciso a)

del artículo 73 se disminuye del 80 al 30 el porcentaje de los títulos públicos en los que podrán invertir las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. En este caso se está cometiendo un grave error, y voy dar una razón básica: el hecho de disminuir el porcentaje a invertir en títulos públicos puede generar una peligrosa tendencia de las administradoras a intentar compensar la menor seguridad con la mayor rentabilidad. Entonces se va a introducir volatilidad en el sistema, por lo que me sorprendió que el Poder Ejecutivo aceptara esta modificación de reducir del 80 al 30 por ciento la inversión en títulos públicos como para tapar la boca a la oposición, que hablaba del costo de la transición.

Esta especie de sentimiento magnánimo del Poder Ejecutivo es totalmente equivocada. Hay que dar a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones la seguridad de que van a poder invertir en títulos públicos -que aun en los peores momentos de la historia argentina han sido siempre honrados por la Nación- a tasas absolutamente razonables, por eso mismo, por que se sabe que son honrados por la Nación.

De manera que creo que es necesario subir ese porcentaje al 50 por ciento, por lo menos. Seguramente los señores diputados podrán realizar otros planteos, pero mi propuesta es que debe ser del 50 por ciento.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Señor presidente: debo decir que el señor diputado Amadeo ha sepultado la garantía del artículo 39.

Sr. Amadeo. — He dado una opinión, señor diputado.

Sr. Fescina.- Su razonamiento no deja de tener aspectos muy importantes. Pero voy a ceñirme estrictamente a las observaciones que pensaba formular.

Con relación al artículo 57, en función del juego que tenía con el artículo 128 -que ha sido suprimido- no se advierte que destino van a tener las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos, es decir, si quedarán para el fondo común de la administradora, si se deberán transferir a la cuenta individual del trabajador..

Señor presidente: solicito a los integrantes de la comisión que presten atención a las observaciones que estoy formulando.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Ruego a los señores diputados que presten atención a lo que está exponiendo el orador.

Sr. Fescina.— Del juego del artículo 57 con el desaparecido 128, quisiera saber que ocurrirá con relación a las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos. ¿Se los devuelve al trabajador? ¿Quedan para el fondo de la administradora? Creo que habría que darles un destino porque de la redacción de este artículo ello no surge.

Con relación al artículo 73 debo decir que, en virtud de todas las innovaciones que se le han introducido, me hace recordar al desmembramiento de Túpac Amaru, en el que cada jinete tiraba de las extremidades de Túpac Amaru. Acá cada uno tira del salario del trabajador.

Formulo un especial llamado a los integrantes de la comisión. El menú es importante en el sentido de que es bastante variado, pero también es cierto que por décadas la Argentina ha necesitado inversiones. En el planteo que voy a hacer no me acompaña un nacionalismo exacerbado; no dejo de tenerlo, pero no me acompaña en este momento. No advierto la razón por la cual conforme al inciso k) del artículo 73 se pueden hacer inversiones en títulos de países extranjeros o de organismos internacionales por hasta un 10 por ciento de los fondos administrados. Esto no es más que utilizar el esfuerzo del trabajador para que vaya a alimentar economías fronteras afuera.

Por lo tanto, pido seriamente a la comisión que considere la posibilidad de suprimir el inciso k), y si esto fuera aceptado por ella, en atención a las razones expuestas por el señor diputado Amadeo con relación a la exigua inversión en títulos públicos —que sería del 30 por ciento— propongo que ese 10 por ciento que surgiría de la supresión que mociono respecto de las sumas a ser invertidas en los Estados extranjeros sea incrementado al primer porcentaje indicado, para llevar la cifra al 40 por ciento -por lo menos- en materia de inversión en títulos públicos.

De este modo dejo planteada la propuesta de suprimir el inciso k) del artículo 73 y elevar al 40 o 50 por ciento la inversión de las administradoras en títulos públicos.

En cuanto al artículo 96 me agradecería que la comisión esclareciera una confusión que advierto, porque dadas las modificaciones que se nos entregaron hoy resultaría que el régimen de invalidez se disminuye al 50 por ciento para el aportante regular —figura que todavía subsiste— y al 30 por ciento para el aportante irregular. De la lectura que hizo el señor diputado González Gaviola me pareció que seguía vigente el artículo 96 del texto originario que figura en el Orden del Día N° 922. Estoy de acuerdo con los porcentajes que allí figuran, por lo que quisiera ratificar si son

los aceptados por la comisión.

Sr. González Gaviola.— Así es, señor diputado.

Sr. Fescina.— Con respecto al artículo 124 deseo que se me aclare lo siguiente. La garantía del Estado con respecto a la prestación básica universal, ¿subsiste aun cuando el trabajador haya optado por el sistema de reparto? ¿El Estado garantiza la prestación básica universal, tanto en el sistema de reparto como en el de capitalización?

Tengo esta contusión porque el artículo 124 está ubicado en el título referido al régimen de capitalización. Sería importante que a los efectos de esclarecer la debida interpretación de esta norma la comisión exprese si el Estado garantiza esta prestación tanto para el trabajador involucrado en el sistema de reparto como para el que adhiera al sistema de capitalización.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aguado.— Señor presidente: quiero efectuar algunas consideraciones y propuestas con respecto al artículo 39. Trataré de ser lo más sintético posible, dado lo avanzado de la hora.

En primer lugar digo con toda claridad que estoy totalmente a favor de la necesidad de la transformación de este sistema. También estoy, convencido de que este proyecto no será la ley ideal, pero tenemos que asumir el riesgo de empezar a caminar hacia la transformación.

Voy a efectuar una breve referencia al trámite de esta iniciativa. Cuando se empezó a discutir este proyecto se dijo con razón que en el sistema de capitalización se entregaba una población cautiva a las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones.

Se mencionó que era lógico establecer la posibilidad de que el Banco de la Nación Argentina también administrara un fondo, con la finalidad de crear un marco de comparación y de que la gente que sintiera que el Estado fuera más seguro pudiera adherir a él.

Si bien el Estado le puede parecer más seguro a mucha gente, también puede ser muy irresponsable. Al Estado es muy fácil fijarle obligaciones, pero a veces es muy difícil que las cumpla, sobre todo cuando esas obligaciones están vinculadas con meros deseos de que se cumplan y no se especifica cómo se generan los recursos.

Cuando se proyecta la administradora del Banco de la Nación Argentina, se establece el privilegio de que el Estado nacional va a garantizar el ajuste de los fondos al momento de otorgar el beneficio según el resultado que arrojen los mecanismos establecidos en la iniciativa. En principio esto implica un reconocimiento de que el Banco de la Nación Argentina, como banco en sí mismo, no puede dar esa garantía. Por lo tanto el proyecto de ley dice que el Estado nacional —es decir, todos los argentinos— va a pagar un subsidio en favor de aquellos que optaron en su momento por adherir al sistema de capitalización de la administradora del Banco de la Nación Argentina.

Luego se avanza y así acabamos de aprobar por el artículo 29 bis que la adhesión al sistema de capitalización será optativa. En consecuencia, surge una primera consideración y duda, esto es, por qué hay que establecer una garantía del Estado nacional para un sistema de adhesión optativo, cuando ya en el sistema anterior se establecía un privilegio que anula las reglas de la competencia leal entre el sistema privado y el sistema de la administradora del Banco de la Nación.

Debo decir con toda honestidad que, si pudiéramos avanzar decididamente, estaría totalmente de acuerdo con la propuesta del señor diputado Sánchez Galdeano y también con las consideraciones que ha hecho el señor diputado Amadeo, porque evidentemente es imposible para una entidad financiera poder prever cómo va a colocar sus fondos para responder a dos opciones de garantías, teniendo que cumplir con una de ellas en el momento final, cualquiera sea la mejor. Es realmente imposible, y por eso aquí se establece que quien puede cumplir con esto es solamente el Estado, sobre la base de que aunque aquí no se diga se fije un subsidio de privilegio.

Como tengo ánimo de trabajar para avanzar positivamente sobre el tema en consideración, tengo una propuesta alternativa, porque no me gustaría chocar con la negativa cerrada de la comisión en el mantenimiento del artículo tal cual está redactado. Creo que la fórmula que voy a proponer atiende de alguna manera estos razonamientos y además confío en que las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión tendrán la imaginación suficiente para poder competir con la administradora del Estado. Mi propuesta consiste en modificar el párrafo 7º del artículo 39, de la siguiente forma: "El Estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo el aporte depositado, deducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 98 de la

presente, de acuerdo a una de las dos alternativas por las que el afiliado deberá optar definitivamente en el momento de su adhesión. Dichas alternativas de garantía son las siguientes:...", y luego el artículo continúa tal cual está redactado. Me parece que lo que tenemos que lograr es que aquel que adhiera al sistema del Banco de la Nación opte por una de las dos garantías.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. — Señor presidente: deseo hacer un agregado al artículo 73. Este artículo prevé que las administradoras de fondos de jubilaciones y a pensiones puedan invertir en títulos públicos de la Nación, de las provincias, etcétera.

La idea es agregar un inciso o), que prevea la inversión en obras públicas de interés nacional y regional y un inciso p), sobre financiamiento de viviendas nuevas.

Solicitaría a la comisión que se agregue un inciso q), en atención a que estos fondos son suministrados por los propios trabajadores. "Todos toman limonada y el pobre naranjo nada." Este inciso q) que diría que el activo del fondo de jubilaciones y pensiones podrá ser invertido en "préstamos personales de corto, mediano y largo plazo en favor de trabajadores y beneficiarios del sistema, a cargo de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones del Banco de la Nación Argentina, con los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, hasta el diez por ciento (10 %)". Esta propuesta tiende a que aquellos que aportan también puedan ser beneficiarios, aunque más no sea en una proporción ínfima, de sus propios fondos.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. — Señor presidente: una breve reflexión con respecto al artículo 39. Después de escuchar las palabras de los señores diputados que me precedieron, quisiera traer a colación una experiencia del gobierno anterior con relación a un impuesto o ahorro —porque nunca se terminó de definir si era impuesto o ahorro—, que fue el ahorro obligatorio establecido durante el gobierno de la Unión Cívica Radical. Se dispuso entonces que esos ahorros iban a ser devueltos a los contribuyentes pagándose la tasa fijada por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y la realidad nos demuestra hoy que pueden devolverse esos ahorros a todos los contribuyentes con chaucha y palitos. No quisiera que esto se repita con los aportes que vamos a pedir a

los trabajadores para que nos ayuden al crecimiento del país, a crear fuentes de trabajo y a aumentar las inversiones en la Argentina.

Por otra parte, creo que las cláusulas de garantía que establece este artículo van a asegurar que los futuros gobiernos respeten el principio de que en la Argentina es necesario mantener el equilibrio fiscal y generar una política de crecimiento, poniendo freno a criterios distribucionistas como los que ya hemos vivido y que han producido la hiperinflación que todos hemos padecido. A mi juicio debe mantenerse la redacción que tiene el artículo 39 sobre las cláusulas de garantía.

En orden a otro tema no sé si en algún punto el proyecto prevé la posibilidad de que un afiliado que opta por un régimen se pase al otro e incluso pueda volver al primero. ¿Qué sucede si una persona que recién empieza a trabajar opta por el sistema de reparto, a los cinco años se le ocurre pasarse a la capitalización y después de otros cinco años, quiere volver al reparto? Creo que esto no está previsto en ninguna parte del proyecto y me parece que puede resultar muy dificultoso redactar esta noche una norma a tal efecto. Por esta razón a lo mejor lo conveniente es redactar algún artículo que establezca que esta materia será objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Green, quien no se encuentra presente en el recinto, y lo mismo sucede con la señora diputada Guzmán. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny.— Señor presidente: formularé una observación menor en relación con todas las que hemos escuchado, pero que de todas formas es importante.

El inciso m) del artículo 73, dice: "Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores y en las condiciones y sectores que éste establezca y reglamente, hasta el 10 por ciento (10 %);"

Si bien estoy de acuerdo con este inciso, ocurre que justamente los futuros y opciones no se cotizan todos en mercados controlados por la Comisión Nacional de Valores. Así sucede, por ejemplo, con los granos, que tienen un control estatal a través de otro organismo oficial. El control del Estado existe, pero no por parte de la Comisión Nacional de Valores. Por ello propongo que este inciso quede redactado así: "Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial."; luego se puede establecer en la reglamentación en qué casos se exigirá el contralor de la Comisión Nacional de Valores o

de algún otro organismo del Estado.

Sr. Presidente (Ruckauf). - Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela.— Señor presidente: naturalmente, a esta altura del debate no soy nada optimista en el sentido de que las propuestas que voy a formular puedan tener acogida por parte de la comisión. No obstante deseo dejar aclarada mi posición sobre el tema en debate.

En primer lugar entiendo que en la forma en que está redactado el proyecto; tanto en lo que se refiere al artículo 29 bis como al 38, no genera para el trabajador ningún tipo de opción. Es decir que estaríamos en presencia de una opción aparente, toda vez que el artículo 38 impone su incorporación automática al régimen de capitalización salvo que hubiese optado anteriormente por el régimen de reparto mediante mecanismos que no están establecidos en la ley.

Al haber desestimado la comisión la propuesta de modificación que formulara al artículo 29 bis, éste dice que las personas físicas comprendidas en el artículo 2º podrán optar por no quedar incluidas en las disposiciones establecidas en el título III. *Contrario sensu* esto quiere decir que están comprendidas en el título III. En consecuencia, salvo que optaren a posteriori por un mecanismo que no conocemos, imperativamente estarán incluidas dentro del régimen de reparto que prevé este artículo.

Por lo tanto, en concordancia con ello, quiero dejar salvada mi posición y proponer el cambio de redacción del artículo 38 para que en términos reales y concretos quede establecida en el texto de la ley la posibilidad de que el trabajador pueda optar, en un plano de igualdad, tanto por el sistema de reparto como por el de capitalización.

La redacción del artículo 29 bis y su concordancia con el artículo 38 perjudica fundamentalmente a los trabajadores de menores ingresos, toda vez que carecen de la posibilidad de acceder a los reglamentos, ya sean de naturaleza administrativa o jurídica, que determinan la factibilidad de optar, con lo cual automáticamente quedarían comprendidos en el título III.

Por otra parte quiero hacer una especial referencia al contenido del artículo 73. En oportunidad del tratamiento en general de este proyecto sostuve -cuando solicité una inserción en el Diario de Sesiones- que esta iniciativa es de naturaleza económica, de carácter centralista y macrocefálico y de alta concentración de la

riqueza, por oposición a quienes consideramos que debemos tender -a través del contenido gramatical de la ley y no de su modificación sustancial- hacia un federalismo económico auténtico, hacia un crecimiento armónico de las regiones geográficas del país y hacia una justa distribución de la riqueza en los sectores sociales y económicos; propendiendo al desarrollo real y concreto de la pequeña y la mediana empresa.

Los incisos contemplados en el artículo 73 hieren mortalmente a las economías regionales y afectan directamente a las provincias que nosotros representamos.

La vocación de federalismo para un crecimiento armónico del país se manifiesta con actos concretos en el momento de votar los proyectos. De lo contrario estaríamos fomentando este fenómeno de macrocefalización y de crecimiento desmesurado del puerto, con las consecuencias sociales que esto trae aparejadas en el conurbano bonaerense, siendo después la misma provincia de Buenos Aires y la Nación las que deben pagar esos costos socioeconómicos derivados de la emigración del interior hacia el puerto.

Si consideramos el contenido del artículo 73 observaremos que esta iniciativa implica lisa y llanamente que la totalidad de los recursos provenientes de los aportes de los trabajadores destinados a la inversión, que luego posibilitarían el crecimiento, recaerían directamente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y algunas regiones de la pampa húmeda. Digo esto porque al hablar de títulos públicos, debentures, acciones y calificación por parte de la Superintendencia —que obviamente calificará a aquellos que tengan posibilidades de mayor seguridad y rentabilidad— automáticamente se descalifican los posibilidades de crecimiento del interior del país y de las pequeñas y medianas empresas.

Ello significa, en buen romance, que en pocos años más nosotros tendremos -como desde 1910 y en proporción geométrica- que un 90 por ciento de los recursos destinados al crecimiento van a recaer en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y un sector de la pampa húmeda, aniquilando las posibilidades de las regiones que en este momento sufren un profundo raquitismo como consecuencia de una política centralista que no es patrimonio de un partido político sino que se remonta a la historia misma de la República Argentina. Desde 1810 los problemas del centralismo, el puerto y la distribución de la riqueza —en oposición al federalismo— no fueron patrimonio ni cuestiones de partidos políticos sino netamente económicas.

Por estas razones -y entrando concretamente en el tema que nos ocupa- propongo que al final del

artículo 73 se incluya lo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán destinar el 30 por ciento como mínimo de los aportes que constituyen sus fondos a inversiones con destino a las economías regionales en las condiciones que fije la reglamentación."

Si se observa la redacción de este artículo se advertirá que es absolutamente concordante con la propuesta de la comisión para el caso del artículo 39 en lo que respecta a la administradora del Banco de la Nación Argentina. En consecuencia me pregunto si imponemos al Banco de la Nación Argentina como administradora privada la obligación -porque dice "deberá"- de destinar parte de sus fondos a las economías regionales, ¿por qué no poner la misma norma respecto de las administradoras privadas de fondos, si lo que queremos es una justa distribución de la riqueza entre los sectores económicos y los sectores geográficos del país?

En cuanto al artículo 39 he escuchado fundadas y respetables opiniones sobre las presuntas desventajas en que se colocaría al Banco de la Nación como consecuencia de la inserción de las cláusulas de garantía. Pero parece que olvidamos aquí que estamos tratando un régimen previsional y no una ley financiera. Por ello todas las garantías que puedan brindarse a través de la norma escrita en favor de los jubilados y de los trabajadores y aportantes para evitar en la mayor medida posible los riesgos que naturalmente devienen, del sistema, bienvenidas sean, porque esto va a compeler a las administradoras privadas a una mayor eficiencia, competencia y seguridad. Por lo tanto, el artículo 39 debe quedar tal como está consignado por la comisión con las explícitas garantías que allí se proponen.

Deseo destacar a su vez que es total y absolutamente insoslayable la responsabilidad del Estado, más allá de lo que diga ésta o cualquier otra ley. Es un absurdo tanto social como económico, jurídico o político pensar que los jubilados del mañana pueden quedar totalmente desprotegidos por cualquier situación económica que pueda haber vivido el país o cualquier circunstancia coyuntural que se pueda haber presentado a las administradoras privadas.

El estado necesariamente siempre tendrá que concurrir de una forma u otra a la asistencia de este sector de la sociedad

Quiero concluir recordando una frase del general Perón, quien decía: ¡Cuidado cuando el Estado no quiere invertir parte de su riqueza en favor de los sectores más desprotegidos y en favor de los ancianos porque en ese caso seguramente mucho más caras serán las consecuencias que ello traerá aparejado!

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: simplemente deseaba hacer una observación a la comisión en cuanto al artículo 52 cuando trata la pensión por fallecimiento del cónyuge. A partir de 1983 ha habido modificaciones muy importantes que fueron sancionadas por el Congreso de la Nación en cuanto a los derechos del cónyuge supérstite.

Así como se han equiparado los derechos de la mujer con los del hombre, de igual forma corresponden los del hombre junto con los de la mujer. En la iniciativa que estamos considerando hay un retroceso, ya que se establece el derecho a la pensión a la viuda mientras que el viudo sólo tiene derecho a ella en caso de una discapacidad laboral.

Para ser consecuentes con la legislación que venimos aprobando desde 1983 y con la igualdad de los derechos de ambos cónyuges -y más aún si pensamos que van a entrar al sistema de capitalización, y ahí si existiría un sentido económico porque sería parte de los bienes gananciales-, debería decirse en lugar de los incisos a) y b) del artículo 52: "El cónyuge supérstite". De igual manera tiene que decir "el o la conviviente supérstite" en los incisos c) y d) de dicho artículo.

Sr. Presidente (Ruckauf). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto.- Señor presidente: en una ocasión un viajero proveniente de los Estados Unidos me trajo de recuerdo un cuadro con una leyenda que decía más o menos así: ningún ciudadano está seguro ni su propiedad a resguardo ni su vida asegurada cuando sesiona el Congreso de los Estados Unidos, Filadelfia, 1861.

Cuando se hace referencia a temas como los que aquí se han tratado se tiene la sensación de que no es tan inexacto lo que se expresa en ese cuadro porque, a pesar de que existe un dictamen de comisión, se abre el debate en torno a ciertos temas como si la Cámara estuviera constituida en comisión. Digo esto porque se mencionan puntos que ya han sido arduamente debatidos y sobre los que se ha arribado a acuerdos. Es cierto que no existe un parámetro para determinar quién tiene la razón, máxime cuando se habla de temas que tienen que ver con el futuro, con las creencias, con la experiencia y con elementos científicos,

pero en todo esto hay mucho de fe y de percepción de las cosas que pasan.

Los argentinos nos movemos en base a coyunturas de 24 horas, es decir que cada tema dura 24 horas, aparecen en los medios de prensa, la sociedad habla de ellos aunque no sepa de qué tratan. No obstante, dividen a la sociedad en buenos y malos, entre los que están de un lado y los del otro. El artículo 39 tiene esa característica; muy pocos saben de que trata, muy pocos lo han leído pero dividió a la sociedad en dos sectores: los que estaban a favor del artículo 39 tal cual estaba redactado en el dictamen de comisión eran los buenos y quienes pretendían perfeccionarlo o modificarlo eran los malos.

Recuerdo que una mañana me llamó un periodista para preguntarme si íbamos a dejar el artículo 39, porque según el representaba una garantía del sistema. Luego de hacer varias consideraciones me pide que quedemos en línea privada, oportunidad en la que me pregunta qué es el artículo 39. Esto demuestra claramente lo que ocurre en la sociedad argentina cuando un tema tiene las características de una cuestión coyuntural y no se lo analiza profundamente:

Como estoy involucrado en la historia de este artículo tengo el derecho a opinar no ya como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sino como un diputado más que quiere dejar constancia de su pensamiento cuando se está tratando una norma que va a regir durante muchos años, a fin de que en el momento en el que se juzgue nuestro accionar quede en claro qué pensábamos con respecto a determinados temas.

Cuando el sistema era obligatorio y compulsivo y la gente no tenía otra opción más que depositar su dinero en administradoras, teníamos la certeza de que el Estado debía contar con una administradora propia y ofrecer algún tipo de garantía, porque si imponíamos la obligación de que el dinero se depositara en esa administradora debíamos hacernos responsables de ello.

Desde aquel momento hasta ahora pasaron muchas cosas: se incorporó la opcionalidad; se incluyó una tasa de remuneración a fin de que la persona que quede comprendida en el sistema de reparto perciba un haber superior al estipulado en el dictamen original. El sistema fue

cambiando; pero el artículo 39 quedó como un hecho inmutable. Por supuesto esto no me asusta; tampoco me atemoriza que no se suprima la garantía, pero tengo la certeza de que en algún momento ésta tendrá que ser revisada porque es una bomba de tiempo metida en el sistema financiero argentino.

El sistema financiero no es ajeno al sistema previsional. No hay sistema previsional que funcione si no funciona el sistema económico. No hay sistema previsional que ande bien si no ocurre lo mismo con la economía y no hay sistema económico que funcione si las cuotas de riesgo no están acotadas a un sistema legislativo. Si hubiera tenido que votar en forma individual y razonablemente, me inclinaría por la propuesta del señor diputado Aguado, que mantiene la garantía y todos los conceptos que inicialmente llevaron a la inclusión de este artículo y brinda una razonabilidad al sistema que evita los desfases que pueden provocar las corridas cambiarias. En el pasado conocimos las corridas cambiarias, sabemos los efectos que tienen y es deseable que no vuelvan.

Cuando aprobamos la Ley de Convertibilidad, lo hicimos para que comenzara una nueva etapa en la República Argentina que estuviera jalonada por la estabilidad, un bien de la sociedad. Ello se hizo fundamentalmente a favor de los pobres, para garantizar la permisividad del sistema, porque los ricos viven bien en cualquier sistema, saben cómo protegerse, cómo cuidar sus intereses e incluso dónde ubicarlos en el exterior. En cambio los pobres permanecen aquí y en consecuencia todo aquello que pueda poner en riesgo la estabilidad pone en peligro la situación de los ciudadanos más humildes, y entre ellos los jubilados.

Por lo expuesto, sin modificar ni cuestionar las decisiones de mi bloque, solicitaría que dentro de este título —en el que entiendo existe acuerdo absoluto en la mayoría de sus artículos— este artículo se votara por separado a fin de que cada diputado pueda elegir de acuerdo con su conciencia el mantenimiento del sistema, con lo cual nada cambiaríamos, o la alternativa de agregar este párrafo, que no quita garantías, evita que a posteriori deba modificarse la norma y da permisividad al sistema otorgando un marco de racionalidad a una norma a la que se han ido efectuando agregados, todos con la intención de proteger a los jubilados. En ese sentido creo que esto también persigue ese objetivo, porque lograr que la economía sea previsible es lo mejor que se puede hacer para el sistema previsional.

Asimismo adhiero a la propuesta de que las administradoras puedan tener el 50 por ciento de sus activos en bonos del Estado.

Sr. Presidente (Ruckauf). - Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo. - Señor presidente: teniendo en cuenta que cuando el señor diputado Aguado efectuó su propuesta no había la misma cantidad de diputados presentes que en este momento, y la proposición formulada por el señor diputado Lamberto, solicito que se dé lectura nuevamente del texto propiciado por el señor diputado por a Buenos Aires.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Con mucho gusto la Presidencia otorgará el uso de la palabra al señor diputado Aguado para que aclare su moción, pero previamente la comisión debe responder al conjunto de observaciones que se han formulado.

Sr. Green.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia advierte al señor diputado por Buenos Aires que cuando le correspondió hacer uso de la palabra no estaba en el recinto.

Sr. Green.— Sí, señor presidente; pido disculpas por ello y solicito su autorización para hacer uso de la palabra muy brevemente.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green.— Señor presidente: simplemente quiero efectuar la defensa de las garantías insertas en el artículo 39 y señalar luego de los conceptos vertidos por el señor diputado Lamberto que pienso que la sociedad no se transforma en buena o mala porque unos piensen de una manera y otros de modo diferente. Cuando se incluyeron estas modificaciones la sociedad tenía en claro el significado de este artículo 39, la presencia del Banco de la Nación Argentina y las garantías referidas a la tasa de interés y al tipo de cambio.

Lo que sí estaba fuera de nuestro cálculo es la inclusión de la opcionalidad en este régimen, que si bien tiene como objetivo fundamental la transformación de todo el sistema previsional, no podemos ignorar que tiende también a formar un fondo de capitales necesarios para la inversión y el crecimiento que requiere el país. La única forma que tenemos de garantizar que la gente realmente ponga sus capitales para asegurarse una jubilación en un futuro, es mantener esta garantía del Banco Nación. De lo contrario, simplemente la gente quedará en el sistema de reparto y no lograremos ninguno de los dos objetivos propuestos: lograr la instalación de las

administradoras privadas y un fondo de capitales de inversión genuino.

Sr. Presidente (Ruckauf).—Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola — Me referiré a algunos de los artículos de este título.

Quiero adelantar que no aceptaremos modificaciones al artículo 38, si bien contestaré algunos de los pedidos formulados en tal sentido. Además me referiré específicamente al artículo 39, que sin duda no es un artículo más ya que a partir de él se logró el consenso necesario para que este proyecto de ley cambiara sustancialmente algunos de sus contenidos, con lo cual se logró arribar al dictamen de comisión.

Si modificáramos la cláusula de garantía del artículo 39 no estaríamos cambiando un artículo sino el espíritu del proyecto que consensuamos. Estamos votando esta norma con la cláusula de garantía del artículo 39; con ella la ley será una cosa y sin su presencia será otra totalmente distinta.

Por ello la posición del bloque es mantener el artículo 39 tal cual se ha modificado, lo que no quiere decir que hagamos oídos sordos a las propuestas de las distintas bancadas. Lo mantenemos porque consideramos que lo prioritario es dar seguridades al jubilado futuro, a quien invitamos a un sistema de capitalización que en este momento resulta incierto en el país. Lo único que le decimos es que vamos a devolverle la plata que puso con el mismo valor adquisitivo. No exigimos rentabilidades alocadas ni tasas equivalentes a las de los que toman créditos internacionales. Planteamos una opción equivalente la tasa pasiva de caja de ahorro y otra opción para compensar la inversión en dólares expresada en la tasa LIBO.

Esto quiere decir que si estamos apostando a un sistema de capitalización, el crecimiento económico por lo menos deberá superar la rentabilidad de la tasa para caja de ahorros o la inversión en dólares. En tal sentido pensamos que la alternativa planteada por el señor diputado Aguado no satisface las expectativas.

Creemos que hacerle optar al futuro jubilado en forma prematura por la opción dólar o la de caja de ahorros significa que debe asumir sobre sus hombros el riesgo de lo que ocurrirá con el dólar o con el peso en los próximos 20 o 30 años. Se trata de una situación de incertidumbre que tratamos de salvar con esta garantía.

Desde un principio ha sido nuestro espíritu establecer esta garantía, pero el justicialismo está totalmente dispuesto a cambiar si luego de la sanción de la ley aparecen propuestas técnicas que den garantías equivalentes a los jubilados y

que no generen efectos económicos como los que ya se han señalado. Queremos que quede registrado debidamente en el Diario de Sesiones que ésta es la actitud de nuestro bloque.

Hay otros aspectos de esta legislación, qua es muy compleja, que habrá, que revisar en el futuro. Nuestra postura consiste en que ante la presencia de una fórmula de garantía que dé seguridades equivalentes a los jubilados y tenga menos efectos económicos indeseables, aceptaremos las modificaciones que se propongan. Pero en este momento esa posibilidad no existe porque todas las alternativas que se llevaron a la comisión no satisfacen esos deseos: la de la opción entre peso y dólar, por lo que acabo de manifestar; la de la opción de la tasa intermedia entre tasa activa y pasiva, porque la serie con la que hemos contado no es lo suficientemente seria y no comprende un período abarcativo, además de mostrar oscilaciones tan grandes que según el momento en que se haga efectiva la garantía se puede distorsionar el capital en mucho, tanto en más como en menos, según las circunstancias económicas.

Reitero que la postura del bloque oficialista es mantener el artículo 39 con las modificaciones que han sido leídas previamente y mantener la garantía establecida para la administradora del Banco de la Nación.

Sr. Presidente (Ruckauf). - Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— Señor presidente: voy a expresar cuáles son las modificaciones que ha aceptado la comisión. En el artículo 61, punto 2 incorporaremos la sugerencia del señor diputado Albamonte, por lo que el primer párrafo quedaría redactado de la siguiente forma: "Cuando se presente ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos de jubilaciones y Pensiones una solicitud de autorización, ésta verificará y evaluará la documentación acompañada acreditando los requisitos...", y continúa el texto tal como figura en el proyecto de ley aprobado en general.

En el artículo 73, inciso n), se eleva la posibilidad de inversión en cédulas hipotecarias; letras hipotecarias y otros títulos valores; de un 20 a un 40 por ciento.

En cuanto al inciso a) del mismo artículo 73, se reduce la posibilidad de inversión en títulos públicos del 80 al 50 por ciento, aceptando la propuesta realizada por el señor diputado Amadeo.

En el inciso m) se cambia la expresión "Comisión Nacional de Valores" por "supervisión oficial", de acuerdo con lo peticionado por el señor diputado Manny. O sea que este inciso quedaría redactado de la siguiente forma: "Contratos que se negocien en los mercados de futuro y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que éste establezca y reglamente, hasta el diez por ciento (10 %)."

Sr. Fescina.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parrilli.— ¡Cómo no, señor diputado!

Sr. Presidente (Ruckauf).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.— Señor presidente: había solicitado la supresión del inciso k) del artículo 73, referido a la posibilidad de invertir en títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales. Quiero conocer cuál es la opinión de la comisión en este sentido.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Continúa en uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: la comisión no va a aceptar la propuesta formulada por el señor diputado Fescina; en cambio si estamos de acuerdo con que al final del artículo 78 se agregue un párrafo que diga lo siguiente: "La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará qué grado de calificación podrá acceder a integrar inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones."

También vamos a aceptar una propuesta del señor diputado Sabio con respecto a un agregado de un inciso que sería el q)— que diría lo siguiente: "Préstamos personales de corto, mediano y largo plazo..."

Sr. Balestrini (M. A.).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parrilli.— Si, señor diputado.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). -Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley sumamente importante que por su magnitud debe tener en sí mismo un equilibrio tanto jurídico como económico. Se trata de un sistema que no puede ser modificado ligeramente, colocando a los diputados en una situación de tener que decidir por sí o por no en dos minutos. Si además de lo expuesto no podemos oír las proposiciones de modificación que se efectúan, llegamos a un extremo inaceptable. Por eso pido al señor presidente que solicite a los oradores que hablen en voz alta.

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia comparte en todo lo que ha dicho el señor diputado preopinante, por lo que solicita a los señores diputados que alcen el tono de voz.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. —Intentaré levantar el tono de mi voz, señor presidente.

Con relación al artículo 73 aceptamos la propuesta formulada por el señor diputado Sabio en el sentido de agregar un inciso que llevaría la letra q) y que diría lo siguiente: "Préstamos personales de corto, mediano y largo plazo en favor de los trabajadores y beneficiarios del sistema a cargo de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la Nación Argentina con los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, hasta el diez por ciento (10 %)."

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif. —Señor presidente: había planteado una inquietud vinculada a la posibilidad de que los afiliados pudiesen cambiar de régimen y de cómo sería instrumentado este aspecto, es decir, si quedaría sujeto a la reglamentación de la ley.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. - La comisión entiende que con la redacción del proyecto no hay lugar a dudas en el sentido de que se debe hacer la opción, y en todo caso, la reglamentación determinará la forma y el momento de efectuarla.

Sr. Presidente (Ruckauf). —Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: la comisión no se ha expedido con relación al tema del cónyuge supérstite o conviviente supérstite de los incisos a) y b) del artículo 52, que proponía refundirlos en uno solo que aludiera al cónyuge supérstite, y sobre el planteo referido a los incisos c) y d), acerca del conviviente supérstite.

Además quisiera que se me informara cómo ha quedado la redacción del inciso g) del artículo 73.

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— Señor presidente: las modificaciones que aceptamos son las que hemos mencionado.

Con relación al inciso g) existe una propuesta efectuada por la señora diputada Guzmán y a la cual se hizo referencia en el informe respectivo en el sentido de que es aceptada por la comisión. No la hemos reiterado ahora porque ya se ha aludido a ella con anterioridad.

Su redacción definitiva ya ha sido expuesta para ilustración de la Honorable Cámara, pero la voy a reiterar para responder a lo solicitado por la señora diputada Guzmán. Diría así: "Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, basta el treinta por ciento (30 %). Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales."

Sr. Presidente (Ruckauf).- La Presidencia desea saber si se aceptó el tema del conviviente y el cónyuge supérstite.

Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Sánchez Galdeano.— Señor presidente: solicito una aclaración a la comisión sobre el artículo 104 pues estimo que su iniciación está mal redactada. Yo pedí que se modificara en base al siguiente texto: "Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado podrán disponer del saldo de la respectiva cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión."

Sr. Presidente (Ruckauf).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green.- Señor presidente: quiero expresar que me parece muy atinada la observación formulada por la señora diputada Guzmán con respecto al artículo 52, sobre todo teniendo en cuenta las dos filosofías que se expresan dentro de este nuevo sistema que contempla la iniciativa.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Green.— Comparto que el viudo no sea el beneficiario de la pensión que le correspondería por la muerte de su esposa en el régimen de reparto, pero en el sistema de capitalización no entiendo por qué se le va a negar la posibilidad concreta de gozar de este beneficio, cuando se trata de fondos que tienen un símil muy claro con lo que podría ser un depósito en caja de ahorro. Por ello solicito a la comisión que exprese cuáles son los fundamentos por los que no acepta esta modificación, ya que habría un enriquecimiento ilícito por parte de la administradora de fondos.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el

señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela.- Señor presidente: quisiera saber si la comisión acepta la propuesta de agregar un inciso al artículo 73 a fin de destinar el 30 por ciento de la recaudación de los aportes que perciban las administradoras privadas a las economías regionales, teniendo en cuenta que este mismo artículo prevé inversiones en el extranjero. Quisiera una aclaración de la comisión y los fundamentos correspondientes.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Señor presidente: proponemos la siguiente redacción para el artículo 104, teniendo en cuenta la observación que nos hiciera el señor diputado Sánchez Galdeano: "Pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado. Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado, podrán disponer del saldo de la respectiva cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión."; y luego el artículo continúa tal cual está, desde donde dice: "La administradora verificará el cumplimiento ..."

Respecto de la modificación propuesta por el señor diputado Varela al artículo 73, la comisión entiende que con el porcentual fijado en la inversión vinculada con el Banco de la Nación para la economías regionales se satisface el objetivo planteado, por lo que se mantiene la redacción prevista, sin la observación formulada por dicho legislador.

Sr. Presidente (Pierri).-Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: el artículo 104 está estrechamente vinculado con el artículo 52 y queda muy en claro cuando habla del sistema de capitalización. Obsérvese que este derecho a la cuenta de capitalización individual del causante no lo tiene el viudo o cónyuge supérstite que vive en aparente matrimonio, cuando aquí se está reconociendo claramente que hay un sistema de capitalización.

Entonces es realmente injusto que todos estos fondos que haya ido capitalizando la trabajadora vayan parar a las cajas aseguradoras, representando -como aquí se ha dicho- un verdadero enriquecimiento ilícito

Por estas razones insistimos en la modificación propuesta al artículo 52.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: deseo contestar algunas aclaraciones pedidas oportunamente por el señor diputado Fescina; relacionadas con los artículos 124 y 125. El señor diputado tenía dudas sobre si esta prestación se da sólo a la gente que opta por el régimen de capitalización o también a quienes lo hagan por el de reparto.

Deseo ratificarle que el régimen público de reparto funciona para los dos sistemas, y que a los efectos de ordenar y dar coherencia al texto nos parece oportuno que estos dos artículos sean puestos al final del título correspondiente, en el reordenamiento final que se haga de la ley.

Por otro lado el señor diputado Amadeo realizó dos apreciaciones gramaticales sobre la lectura del artículo 39 y tenemos que decir que efectivamente está en lo cierto. En el cuarto párrafo, donde dice: "Dispónse que el Banco de la Nación Argentina desempeña, sin perjuicio de las actividades que le permite su Carta Orgánica. .., debe decir "Dispónese que el Banco de la Nación Argentina desempeñe...". Y el párrafo referente a la garantía del Estado nacional debe ser leído así: "El Estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo el aporte depositado, deducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 98 de la presente, que en ningún caso será inferior a la mayor de las siguientes alternativas..."

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Crostelli.- Quisiera una aclaración sobre la parte final del artículo 39, que dice: "Las AFJP administradas por el sector privado podrán otorgar garantías a su costo y riesgo." A falta de una explicación mejor, esto suena como que alguien puede decir "yo garantizo". A estar a lo que se ha planteado en el debate estas cifras pueden ser imprescindibles. Si se garantizan los importes establecidos en los incisos a) y b), la cifra garantizada puede resultar incalculable. Me gustaría que la comisión aclarara el particular.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: cuando se planteó el tema de las garantías se mencionó la posibilidad de que fueran extendidas a la totalidad de las AFJP. Atendiendo a experiencias nefastas del pasado reciente en la Argentina -donde la extensión de la garantía sirvió para que algunas entidades privadas

tuvieran un accionar irresponsable y después se vieran beneficiadas- circunscribimos la garantía de rentabilidad mínima a la administradora del Banco de la Nación Argentina, sin por ello coartar la libertad de cualquier otra administradora para competir en el mercado ofreciendo garantías, pero bajo su propio costo y riesgo.

Sr. Green.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri).- ¿A qué efectos, señor diputado?

Sr. Green.- Para solicitar lo mismo que pedí hace un rato, sobre lo que no tuve respuesta. Por eso debo molestar nuevamente a la Presidencia.

Hemos solicitado una modificación en relación con el artículo 52 a fin de que el viudo pueda ser beneficiario de los aportes que hiciera su esposa. Esto no en el sistema de reparto —cuya filosofía entendemos— pero sí para quién hace una capitalización de fondos que son propios. De no ser estos fondos destinados a quien resulte sucesor de la fallecida, evidentemente habría un enriquecimiento ilícito por parte de la administradora, que quedaría con una cantidad de fondo que realmente no tiene por qué poseer. Recordemos que no son propietarias de los fondos sino simplemente administradoras. Si la ley considerara que el viudo no puede ser beneficiario de la pensión de quien fuera su esposa, tendría que establecer en alguno de sus artículos que esos fondos fueran destinados a algún fin específico, como podría ser el Ministerio de Educación. Entonces sí podría tener lógica o validez jurídica esa decisión.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf.- Señor presidente comparto lo manifestado por el señor diputado preopinante, así como también lo expresado por señora, diputada Guzmán, pues de hecho estamos diciendo sobre el acervo hereditario de una familia. En consecuencia solicito a la comisión que atienda a esos argumentos que son muy lógicos.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo.- Señor presidente: dado lo extenso de la discusión que venimos desarrollando,

pasé por alto una observación en relación con uno de los artículos del proyecto.

El artículo 135, que se refiere a los regímenes especiales establecidos por leyes que pudieran modificar algunos aspectos de esta norma, en su segundo párrafo determina lo siguiente: "Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir la prestación básica universal y la prestación complementaria acreditando una edad y un número de años de aporte inferiores en ambos casos, en no más de cinco años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general." En el mejor de los casos los trabajadores comprendidos en los regímenes especiales podrían acceder a los beneficios de esta ley a los 60 años. Pero existen algunos casos que debemos contemplar; por ejemplo, el de los trabajadores mineros, cuya expectativa de vida es notoriamente inferior a los 60 años. En consecuencia solicito que en lugar de cinco años se fijen diez, para que el límite inferior sea de 55 años. Ello, a fin de que los regímenes especiales que contemplan la situación de los más desprotegidos de esta tierra funcionen adecuadamente y las prestaciones de esta ley no sean un sueño sino una realidad.

Sr. Fescina.- Si me permite, señor presidente, deseo aclarar al señor diputado por Buenos Aires que todavía no hemos comenzado a considerar el artículo 135, que está contenido en el Libro II. En consecuencia esa cuestión deberá ser analizada con posterioridad.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti. — Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo de la bancada de la democracia cristiana a todo este Título III. Asimismo el señor diputado García me pide en este acto que también exteriorice su voto negativo, seguramente por las mismas razones por las que vamos a votar en contra de todo este título, ya que hemos presentado junto con los representantes de otras bancadas un proyecto alternativo, que para nada contempla este régimen de ahorro privado.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: deseo informar que la comisión considera acertadas las apreciaciones del señor diputado Green, que han sido respaldadas por otros colegas, en el sentido que el inciso b) del artículo 152 en vez de decir "el viudo incapacitado" diga directamente "el viudo".

Con respecto a las observaciones del señor diputado Amadeo, que también las consideramos

convenientes, nos parece que corresponde discutir las con el título que vamos a considerar a continuación.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe. La Presidencia le solicita que sea breve en su exposición.

Sr. Lamberto.- Voy a utilizar todo el tiempo que me confieren mis derechos como diputado, señor presidente.

Simplemente lo que quiero plantear es que como hay una decisión de no permitir la votación individual de un artículo y evidentemente como tampoco lo ha puesto a consideración la Presidencia sino que es una decisión de la comisión, quiero dejar aclarado que cuando dentro de tres o cuatro años en este Congreso se vote un nuevo bono de consolidación se sepa que hubo algunos señores diputados que lo advirtieron y los demás no los escucharon.

Sr. Flores. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores.— Señor presidente: simplemente deseo que la comisión aclare, en el caso del artículo 52, si la modificación que se aceptó para el inciso b) también se va a aplicar para el caso del inciso d), es decir, cuando se trata del conviviente.

Sr. González Gaviola.- La comisión considera que corresponde el mismo criterio.

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título III con las modificaciones propuestas aceptadas por la comisión.

En primer término se va a votar el artículo 39.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el resto del título III, que comprende el artículo 38 y desde el artículo 40 al 129.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- En consideración el título IV, que comprende los artículos 130 a 132. Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano.- Señor presidente: formulo moción de reconsideración del artículo 19, porque las mujeres que en esta Cámara representamos a una porción de la población entendemos que la votación se ha realizado en forma confusa. Asimismo; en caso de aprobarse la mo-

ción que estoy formulando, solicito que la nueva votación se realice por el sistema electrónico.

Sr. Presidente (Pierri).- En consideración la moción formulada por la señora diputada por Salta.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: debe quedar claro que si se acepta la reconsideración solicitada por la señora diputada por Salta debe votarse nuevamente no sólo el artículo 19 sino también los artículos 37 y 127 que guardan correlación con aquél.

Hago esta advertencia porque también deberían reconsiderarse otros artículos que ya han sido votados.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va votar por el sistema electrónico la reconsideración de los artículos 19, 37 y 127. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa de 88 votos. Votan 116 señores diputados sobre 130 presentes.

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia aclara que las 13 abstenciones registradas de ningún modo modifican el resultado de la votación, ya que las dos terceras partes se alcanzan con 86 votos.

Queda aprobada la moción. En consecuencia, corresponde considerar nuevamente los artículos 19, 37 y 127 del proyecto de ley aprobado en general.

Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano.- Señor presidente: muy brevemente deseo argumentar por qué solicitamos la modificación de la edad de la mujer prevista en el proyecto para acceder a la jubilación. Como es sabido en esta norma se aumenta la edad para jubilarse en cinco años para los varones y diez para las mujeres.

A esa edad la capacidad laboral de la mujer es diferente de la del varón. En la actualidad la perspectiva de vida de la mujer es más alta, pero no sabemos si las mujeres que se han incorporado al mercado laboral diez años atrás tendrán esas mismas perspectivas de vida. El empleo de la mujer en el área de servicios es mucho más desgastante, y cabe preguntar qué puede hacer a los 65 años de edad una docente con sus alumnos o una empleada doméstica.

En una apretada síntesis debo decir que nosotros percibimos que esta diferencia que se ha establecido en la edad surge como una aparente revancha por la posibilidad que tenemos las mujeres de disfrutar en el campo político del 30 por ciento del cupo femenino en la integración de las listas de candidatos. Por lo expuesto solicitamos que en el artículo 19 la edad para

jubilarse sea de 60 años para la mujer y de 65 para el varón.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Señor presidente: celebro la rehabilitación de la rama femenina en el justicialismo porque sin duda alguna ha habido un esfuerzo solidario de la mujer en este tema.

Aclaro que yo también formulé una propuesta respecto de mantener la diferencia de edad entre varones y mujeres. En ese sentido me permito hacer reflexionar a las señoras diputadas que como el proyecto que estamos considerando de hecho envía a todas las trabajadoras al sistema de capitalización, al disminuir la edad también se les quita la posibilidad de capitalizar cinco años más. Allí está la gran duda: el beneficio de la edad o el perjuicio de la capitalización; que decidan las mujeres

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: entiendo lo que plantea el señor diputado Fescina, quien como él mismo lo expresó ya antes abogó por los 60 años como edad de jubilación para la mujer. Pero él apunta a que si las mujeres están en un sistema de capitalización, en esos cinco años menos los que habría capitalización se produciría una reducción en la renta jubilatoria.

La solución que podemos encontrar a este problema es dar al trabajador la opción de estar en uno u otro régimen. Podríamos establecer que fuera optativo acogerse a los 60 o a los 65 años; quien tiene 60 y quiere capitalizar cinco más, que lo haga.

Sr. Presidente (Pierri).- ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. Parrilli.— En nombre de los integrantes de la comisión deseo poner de manifiesto que mantenemos en este sentido el dictamen de comisión contenido en el Orden del Día 922.

Sr. Presidente (Pierri).- Corresponde votar los artículos 19, 37 y 127 con las modificaciones propuestas.

Se va a llamar para votar.

-Mientras se llama para votar

Sr. Matzkin.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin.— Señor presidente: en esta situación de equilibrios inestables y de caminar sobre mercurio nos encontramos ante la necesidad de solicitar que esta votación se postergue de ma-

nera de poder proseguir en la consideración de los pocos artículos que restan y culminar así nuestra tarea.

Sr. Presidente (Pierri).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se postergará la votación hasta tanto se reúna el quórum reglamentario y mientras tanto se avanzará en la consideración de los artículos restantes.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título IV, que comprende los artículos 130 a 132. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Roy.- Señor presidente: una vez más las mujeres de esta Cámara somos víctimas de la presión de los hombres pues son mayoría. Ello ya fue advertido antes de que se levantaran de sus bancas para irse diciendo que si no se votaba hasta el final ellos no regresarían a dar el número necesario. Esto ya lo han dicho aquí.

Que hagan lo que quieran, porque de todas maneras votan la norma que se necesita y luego se levantan de sus bancas. Entonces, ¿quién pierde? Como de costumbre, la mujer.

Sr. Presidente (Pierri).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf.- Señor presidente: para solucionar esta cuestión, mientras se continúa debatiendo, perfectamente se puede estudiar la forma de redactar un artículo con los criterios de voluntariedad que planteaba el señor diputado Fescina.

Sr. Presidente (Pierri).- Eso es lo que estamos haciendo, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.- Señor presidente: el artículo 130, que se refiere a la entrada en vigencia del régimen de capitalización, queda redactado tal como figura en el proyecto de ley aprobado en general.

En cuanto al artículo 131 proponemos que luego de: "... quedaren comprendidas en el mismo." se suprima el punto y en su reemplazo se coloque una coma, continuando de la siguiente forma: "así como los de quienes ejerzan la opción a que se refiere el artículo 29 bis".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio.- Señor presidente: quería aclarar que el señor miembro informante estaba hablando los artículos 130 y 131, pero al suprimirse los artículos 128 y 129 habría que variar la numeración.

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia informa al señor diputado preopinante que ha sido autorizada por la Cámara para reenumerar los artículos.

Corresponde pasar a la consideración del Título V, que comprende el artículo 133.

Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— Señor presidente: voy a leer la forma en que quedará redactado el Título V, que se refiere a las sanciones. Dice así: "Capítulo I. Delitos contra la integración de los fondos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Artículo 133.- Infracción al deber de información: Será reprimido con prisión de quince días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b), e) o i) del artículo 12 y del artículo 42, segunda parte de la presente. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios

El artículo 134 tiene como enunciado el siguiente: "Infracción al deber de actuación como agente de retención o percepción, al deber de depósito y evasión de aportes y contribuciones", y queda redactado tal cual figura en el Orden del Día N° 922, artículo II.

En el capítulo II, intitulado: "Delitos contra la adecuada imputación de los depósitos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", el artículo 135, cuyo enunciado dice: "Omisión de transferencia de depósitos", queda redactado tal como figura en el Orden del Día N° 922, artículo III.

En cuanto al capítulo III, sobre "Delitos contra la libertad de elección de AFJP", el enunciado del artículo 136 dice: "Delitos contra la libertad de elección de AFJP", y su texto sería "Será reprimido con prisión de 6 meses a dos años el que por imposición de requisitos no contemplados en la presente ley y sus normas reglamentarias para la incorporación o traspaso a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones o valiéndose de cualquier otro medio, no admitiera la incorporación a una administradora o el traspaso a otra, de un trabajador obligatoria o voluntariamente incorporado al SIJP. La misma pena sufrirá quien incorporare a un trabajador AFJP sin contar con la pertinente solicitud suscrita por el mismo o lo diera de baja de su registro de afiliados sin observar los requisitos, de la presente ley y sus normas reglamentarias.

"Igual pena sufrirá quien, empleando medios publicitarios o denominaciones engañosas, o falseando o induciendo a error sobre las prestaciones del SIJP o de una determinada administradora, o efectuando promesas de prestaciones complementarias inexistentes o prohibidas por esta ley o sus normas reglamentarias, o mediante promesas de pagos en efectivo o de cualquier otro bien que no sean las prestaciones contempladas en esta ley, o mediante abuso de confianza, o de firma en blanco, o valiéndose de cualquier otro abuso, ardid o engaño, limitara de cualquier modo el derecho de elección del trabajador a elegir libremente la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones a que desee incorporarse.

"Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que engañare a un trabajador que en forma obligatoria deba incorporarse al SIJP, adhiriendo a un servicio que no sea establecido en la presente ley o vendiéndole cualquier otro servicio o producto."

Con relación al capítulo IV, intitulado: "Delitos contra el deber de información", el enunciado del artículo 137 dice: "Delitos contra el deber de suministrar información"; y queda redactado, tal cual figura en el Orden del Día N° 922, artículo V.

Asimismo, el artículo 138, titulado: "Información falsa", queda redactado tal cual aparece en el Orden del Día N° 922, artículo VI.

Con respecto al capítulo V, cuyo título es: "Delitos contra el fondo de jubilaciones y pensiones", el artículo 139 denominado: "Calificaciones. Perjuicio", diría lo siguiente: "Será reprimido con prisión de 4 a 10 años, el responsable de la calificación de entidades financieras, bancarias o de títulos valores y depósitos a plazo fijo, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, efectuare una calificación incorrecta causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones; incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones."

El artículo 140, cuyo enunciado dice: "Autorizaciones, determinaciones, aprobaciones. Perjuicio", quedaría redactado de la siguiente forma: "Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de: a) autorizar a la oferta pública o admitir su cotización en mercados de títulos valores que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones; b) autorizar fondos comunes de inversiones que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones; c) determinar los mercados que reúnan los requisitos enunciados en el artículo 77 de esta ley;

d) aprobar las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo a que se refiere el artículo 78 de esta ley; e) autorizar cajas de valores y bancos para el depósito y custodia de inversiones de fondos de jubilaciones y pensiones que, por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que debe ajustar su actividad, efectuare una autorización, admisión, determinación o aprobación indebida, causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones."

El artículo 141 diría: "Inversiones. Depósito y custodia y control. Perjuicio. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años, el responsable de efectuar las inversiones de un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones, o de depositarlos o custodiarlos, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, llevare a cabo las inversiones, depósitos o custodia de un modo indebido, causando perjuicio a un fondo."

"La misma pena se aplicará al responsable del control de las inversiones, depósitos o custodia que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, efectuare el control indebidamente, causando perjuicio al fondo."

El artículo 142 expresaría: "Figuras agravadas. Perjuicio a un fondo en beneficio propio o de un tercero. Será reprimido con prisión de 5 a 15 años quien, incurriendo en los ilícitos tipificados en este capítulo, causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones procurando un beneficio indebido para sí o para un tercero."

El capítulo VI se refiere a los delitos por incumplimiento de las prestaciones. El artículo 143 diría "Incumplimiento de las prestaciones previsionales. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentra obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los cinco días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios."

El capítulo VII se refiere a las disposiciones comunes a los capítulos I a VI de este título. El artículo 144; diría: "Aplicación del Código Penal y leyes penales específicas. Las disposi-

ciones del presente título sean aplicables siempre que la conducta no estuviese prevista con una pena mayor en el Código Penal u otras leyes penales."

El artículo 145 quedaría redactado de la siguiente manera: "Personas de existencia ideal. Cuando el delito se hubiera cometido a través de una persona de existencia ideal, pública o privada, la pena de prisión se aplicará a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, que hubiesen intervenido en el hecho, o que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera."

El artículo 146 quedaría redactado tal como figura en el artículo XV del capítulo VII del Orden del Día N° 922.

El artículo 147 quedaría redactado de la siguiente manera: "Inhabilitación a funcionarios públicos, escribanos y contadores. Los funcionarios públicos, escribanos y contadores, que en violación de las normas de actuación de su cargo a profesión, a sabiendas informen, den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o documentación. para la comisión de los delitos previstos en este título, serán sancionados con la pena que corresponda al delito en que han participado y con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena."

El artículo 148 quedaría redactado como aparece en el artículo XVII del capítulo VII del Orden del Día N° 922.

El artículo 149 quedaría redactado como figura en el artículo XVIII del Orden del Día N° 922.

El artículo 150 quedaría de la siguiente manera: "Juez competente. Será competente la justicia federal para entender en los procesos por delitos tipificados en el presente título.

"En la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo penal económico."

El artículo 151 quedaría redactado como figura en el artículo XX del Orden del Día N° 922.

Pasamos al capítulo VIII, referido a otras sanciones. El artículo 152 quedaría redactado como figura en el artículo XXI del Orden del Día N° 922.

El artículo 153 quedaría redactado de la siguiente manera: "Superintendencia de las Administradoras de Fondos de jubilaciones y Pensiones. Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones aplicará a las administradoras en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, las

siguientes sanciones: a) Apercibimiento, por una sola vez, a cada administradora y si la falta o incumplimiento fuera leve y no causara perjuicio; b) Multa, que se calculará en base a múltiplos de AMPO, siendo la mínima el múltiplo de 100 AMPO y la máxima de 100.000 AMPO. El importe máximo de la multa podrá elevarse hasta cinco veces el monto del perjuicio causado por el accionar ilícito al fondo de jubilaciones y pensiones, si fuera mayor. El monto de la multa se graduará conforme la gravedad de la falta. Los directores, administradores, síndicos y gerentes, serán solidariamente responsables de las multas impuestas a las administradoras cuando con sus actos y omisiones hubieran dado lugar a que el hecho se produjera; c) Inhabilitación para el ejercicio de la dirección, administración, gerencia o sindicatura de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en forma permanente o transitoria; d) Revocación de la autorización para funcionar de la administradora.

"La sanción será recurrible ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal o ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia penal del interior del país, según fuese el domicilio de la administradora."

"En caso de multa, la sanción será recurrible previo depósito de la multa a la orden del tribunal o juzgado."

El artículo 154 quedaría redactado como figura en el artículo XXIII del Orden del Día N° 922; el artículo 155, como el artículo XXIV y el artículo 156, como el artículo XXV del Orden del Día N° 922.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Hasta que artículo llegó, señor diputado?

Sr. Parrilli.— Hasta el final del Libro I, que incluye el título por la reenumeración, hasta el artículo 156.

Sr. Presidente. (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Varela Barrio. — Señor presidente: planteo solamente una cuestión terminológica.

El título V habla de sanciones y todo su contenido se refiere a delitos configurados en la ley penal. De manera que la denominación correcta sería "Penalidades".

Sr. Presidente (Pierri). -Tiene le palabra la señora diputada por Jujuy.

Sr. Guzmán. — Señor presidente: estoy escuchando hablar de artículos superiores al 150 y de acuerdo con el Orden del Día N° 922 el

libro I concluye en el artículo 133 inclusive. No entiendo el corrimiento que han hecho en la numeración señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— Señor presidente: para aclaración de los señores diputados, hemos usado la numeración arábica en donde había números romanos. En consecuencia, el libro II -que en el Orden del Día N° 922 comienza con el artículo 134- ahora, reenumerado, empieza con el artículo 157.

De todas formas la numeración final queda a cargo de la Presidencia.

Aprovecho esta oportunidad para hacer un especial agradecimiento, en nombre de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, quienes nos han realizado una serie de observaciones que hemos aceptado, con excepción de aquellas que proponen reducir las penas, dado que nuestro criterio es mantener la severidad a los efectos de que este tipo de delitos no sean excarcelables.

Reitero el agradecimiento a la Comisión de Legislación Penal por el aporte recibido.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soderó Nieves.— Señor presidente: propongo la siguiente redacción para el artículo 140: "Esta ley no importa modificaciones a la ley 24.018, excepto lo dispuesto en el artículo 162."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. - Señor presidente primero quiero preguntar si estamos considerando el Libro II o no. Además, como el señor diputado se ha referido al artículo 140, quiero saber hasta dónde ha avanzado la discusión,

Sr. Presidente (Pierri).— Hasta el artículo 156.

Sr. Fescina. — ¿En la nueva numeración?

Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado por Neuquén aclarará su duda.

Sr. Parrilli.- En la numeración del Orden del Día N° 922 estamos tratando hasta el artículo 133 inclusive -título V del libro I-. Todavía no hemos ingresado al libro II, que se inicia con el artículo 134 conforme a la numeración del Orden del Día N° 922.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar el título I del libro II, que comprende los artículos 134 y 135.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones con respecto al artículo 135. Si bien se ha dicho que el espíritu de la elevación de la edad es prestar atención a la

mayor expectativa de vida de la gente, no todos los trabajos son idénticos ni tampoco los lugares en los que se desempeñan dan la misma posibilidad de continuar con la capacidad laboral hasta una determinada época de la vida.

Traigo a la reflexión, por ejemplo, a los que trabajan con elementos radiactivos; a los trabajadores mineros, que están expuestos a la silicosis y a la neumoconiosis y que tienen una expectativa de vida muy por debajo de la normal; y a los peones de campo. Estos ejemplos nos están diciendo que, si no adoptamos una legislación acorde a las circunstancias especiales de los trabajadores, la jubilación será un derecho declarado pero jamás ejercido.

De manera que con respecto a los regímenes especiales, que contemplan la situación de quienes se desempeñan en actividades riesgosas y penosas -por ejemplo, la minería es una actividad penosa— que agotan prematuramente la capacidad laboral, o de quienes trabajan en zonas geográficas que por las condiciones especiales de clima o de altura sobre el nivel del mar producen también una expectativa de vida inferior a la normal, propicio que el límite quince años para reducir la edad jubilatoria se lleve a diez años.

En concordancia con las modificaciones propuestas anteriormente en el sentido de agregar la prestación adicional por permanencia, en el segundo párrafo del artículo 135 deberían agregarse a continuación de "Prestación Complementaria" los términos "y Prestación Adicional por Permanencia".

Sr. Presidente (Pierri).-Tiene la palabra el señor diputado por la Capital

Sr. Fescina.— Señor presidente: con respecto al artículo 135 formularé las siguientes observaciones. El párrafo segundo se refiere a la jubilación ordinaria. Dado que en el régimen que se va a sancionar no existe la jubilación ordinaria, debería hacerse alusión a la PBU. En tal sentido creo que se ha deslizado un error en función de proyectos anteriores.

En segundo lugar, no advierto la justicia de que el 5 por ciento extra que debe pagar el empleador se destine al sistema de capitalización, toda vez que la PBU también va a ser percibida en el sistema de reparto y a raíz de la jubilación por invalidez. Por lo tanto, ese 5 por ciento debe ir al sistema público y no al de capitalización, porque es en aquél en donde está garantizada la PBU. Además el sistema

público también va a pagar toda o parte de la jubilación por invalidez.

En tercer término, en las modificaciones al artículo 135 a las que tuvimos acceso esta mañana se establece que continúan vigentes las normas contenidas en el decreto 1.021/74. Recuerdo que ese decreto, que tengo a la vista, se refiere a la posibilidad de que los trabajadores rurales obtengan la jubilación por edad avanzada conforme al artículo 30 de la ley 18.037. Dado que estamos derogando esta ley no tiene sentido sostener la vigencia de aquel decreto. Por si esto fuera poco, el artículo 172 del proyecto de ley aprobado en general establece que continúan vigentes todas aquellas normas que no fueran expresamente derogadas. De manera tal que el agregado propuesto al artículo 135 es impropio habida cuenta de la derogación de la ley 18.037 y es sobreabundante dado lo establecido en el artículo 172 del proyecto.

Quizá no he sido muy claro, pero mis expresiones son el fruto de la poca claridad que tiene este proyecto.

Sr. Ruckauf.— Señor presidente: deseo dar lectura de la redacción del artículo 19 consensuada entre la comisión y las compañeras diputadas que hicieron las observaciones y teniendo en cuenta además la pertinente observación del diputado Fescina.

Sr. Presidente (Pierri). La Presidencia solicita al señor diputado que postergue la consideración de esa propuesta hasta que se termine la discusión de los artículos que estamos tratando.

Corresponde que la comisión de respuesta a las propuestas efectuadas por la señora diputada Guzmán y por el señor diputado Fescina.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Señor presidente: con respecto a lo planteado por la señora diputada Guzmán en cuanto al artículo 135, si no entendimos mal, planteaba la extensión del plazo. De todas maneras solicitamos a la señora diputada que reitere la propuesta.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.— Señor presidente: la propuesta dice así: "Regímenes especiales. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que en el término de un año a partir de la publicación de la ley, proponga un listado de actividades que, por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, tales como el trabajo en lugares geográficos que por las condiciones especiales de clima o altura sobre el nivel del mar producen también una expectativa de vida inferior a las que se realizan en otras condiciones o en otros lugares, o por configurar situaciones especiales,

merezan ser objeto de tratamientos legislativos particulares. Hasta que el Poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado la ley respectiva, continúan vigentes las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos."

Y continúa así: "Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir la Prestación Básica Universal, la Prestación Complementaria y la Prestación Adicional por Permanencia en el Sistema acreditando una edad y un número de años de aportes inferior en ambos casos a diez años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general."

Sr. Sueiro. Solicitamos a la señora diputada que haga llegar a la comisión la redacción que acaba de leer del artículo 135 a los efectos de poder confeccionar un texto definitivo.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.).— Señor presidente: solicito a los señores diputados que presten un poco de atención porque estamos discutiendo un artículo que es importante, referido a los regímenes especiales de los que gozan actualmente los trabajadores.

Considero conveniente tener un intercambio de ideas con la señora diputada Guzmán, porque si enumeramos cualquier tipo de actividad corremos el riesgo de que alguna quede fuera de la nómina. Por ello considero conveniente establecer un texto general para no perjudicar a nadie.

Por lo expuesto propicio que el primer párrafo del artículo 135 quede tal cual está redactado porque abarca a la totalidad de los regímenes especiales vigentes que fueron prorrogados por la ley 24.175. Pero con respecto al segundo párrafo del mencionado artículo propongo que sea sustituido por el siguiente texto: "Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir el beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan optado, acreditando una edad y un número de años de aportes inferiores en ambos regímenes en no más de diez años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general." De esta manera queda comprendida la inquietud planteada por la señora diputada por Jujuy, ninguna actividad queda excluida y el Poder Ejecutivo tendrá que considerar cada uno de los regímenes y, de todos modos, contamos con la posibilidad en el futuro de que se incorpore alguna actividad que no haya sido contemplada.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: lo expresado por el señor diputado preopinante en relación con la enumeración de las actividades lo había señalado yo con anterioridad al hablar del caso de los mineros.

Difiero de lo manifestado por el señor diputado en cuanto al primer párrafo del artículo que estamos mencionando, ya que cuando habla de agotamiento prematuro de la capacidad laboral donde se incluyen actividades penosas y riesgosas deberíamos agregar el siguiente texto "También tales como el trabajo en lugares geográficos que por las condiciones especiales de clima o altura sobre el nivel del mar producen una expectativa de vida inferior a la que se realiza en otras condiciones o en otros lugares"

El desgaste que produce desarrollar tareas a grandes alturas sobre el nivel del mar está comprobado científicamente. En este sentido el minero que trabaja en Mina Aguilar a 4.800 metros de altura estaría cubierto, pero no ocurre lo mismo con el docente que también desarrolla sus tareas en ese sitio.

Lo que ahora estamos haciendo no es otra cosa que reflejar lo que está debidamente estudiado con respecto a que hay personas que tienen una expectativa de vida inferior a la normal por habitar en lugares con determinadas características geográficas, climáticas o de mucha altura sobre el nivel del mar. Además el texto que propuse no enumera cada una de las actividades porque ellas están contempladas en las distintas leyes especiales.

Con respecto a la modificación propuesta por el señor diputado Castillo en el relación con el segundo párrafo del artículo 135, entiendo que corresponde reflexionar un poco más sobre la cuestión que allí se menciona, pues no tenemos en claro si los trabajadores comprendidos en los regímenes especiales deben ingresar al sistema de reparto o en el de capitalización.

En el segundo párrafo resulta claro que el artículo se refiere a la Prestación Básica Universal y a la Prestación Complementaria, a lo que habría que agregar la Prestación Adicional por Permanencia en el Sistema. En ese sentido quisiera que la comisión aclare si el espíritu de la norma involucra también a los que quieren capitalizar.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: en el artículo 135, a continuación de la palabra "establecidos", se agrega la siguiente frase "Asimismo continúan vigentes las normas contenidas en el decreto 1.021/74."

No compartimos la posición del señor diputado Fescina que señala que está vinculado con la ley 18.037, porque en realidad el artículo 134 mantiene la vigencia de esa norma en lo que no se oponga a la presente. Resulta claro que el decreto 1.021/74 que se incorpora abarca la situación de los trabajadores rurales, a quienes desde un primer momento este proyecto pretendió mantener con un régimen especial.

Con respecto a lo que plantea la señora diputada Guzmán, el artículo 135 se refiere concretamente al agotamiento prematuro, que es abarcativo de todas las situaciones que ella menciona. El agotamiento prematuro se puede dar de muy diversas formas, una de las cuales es la que cita la señora diputada por Jujuy. Por eso creemos que en esta norma está comprendida la preocupación de la señora diputada Guzmán, que desde luego también es la nuestra.

En definitiva, el segundo párrafo del artículo 135 quedaría redactado en los términos que expresó el señor diputado José Luis Castillo.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: me permito insistir en mi solicitud de que se agregue un párrafo que diga lo siguiente: "tales como el trabajo en lugares geográficos que por las condiciones especiales del clima o la altura sobre el nivel del mar producen una expectativa de vida inferior a la que se realiza en otras condiciones o en otros lugares".

Teniendo en cuenta que el señor diputado Sueiro expresa que la comisión también está de acuerdo con el sentido, pediría que se haga un esfuerzo más y se incluya este agregado en el texto.

Sr. Flores. - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores.- Señor presidente: entiendo que las amables tertulias que se realizan en el recinto, particularmente la que se está celebrando cerca del palco, pueden ser de mucho interés, pero impiden que el resto de los legisladores escuche las opiniones que se están exponiendo sobre la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto de ley aprobado en general. Por ello solicito a la Presidencia que invite a los señores diputados a guardar silencio a fin de que se pueda escuchar al orador.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Cabrera.- Señor presidente: quiero referirme fundamentalmente a la razón expuesta por la señora diputada Guzmán.

A título aclaratorio deseo señalar que en el segundo párrafo del artículo 135 se mencionan las facultades del Poder Ejecutivo porque se ha superado lo establecido en el primer párrafo de dicha artículo en el que se determina que hasta que el Poder Ejecutivo envíe nuevas normas avaladas con documentación que pasen por este Congreso, todas las actividades —recuerdo que son más de 40, entre las que se encuentran la minería, la fragua de vidrio, la metalurgia y el 60 por ciento de la industria frigorífica—, seguirán estando reguladas por el régimen de la ley 24.175, que establece una diferencia de 10 años.

En definitiva, estamos prorrogando los plazos establecidos en la ley 24.175 hasta tanto el Poder Ejecutivo determine que han variado las condiciones en algunas actividades y sea necesario introducir modificaciones.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.- Quisiera preguntar a la comisión cuál es la razón por la que se regala a las administradoras de fondos un 5 por ciento adicional a cargo del empleador en estos casos de regímenes especiales. Creo que esos fondos deberían destinarse al sistema público y no al de capitalización.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.- Este es un régimen que se ha planteado para el futuro. El incremento del 5 por ciento a cargo del empleador, que se destina a la cuenta de capitalización individual del trabajador, se relaciona precisamente con la necesidad de incrementar la parte que dicho trabajador va a capitalizar porque justamente tendrá 10 años menos para hacerlo.

Por esa razón se considero justo que dichos fondos no se destinen al sistema público de reparto y sí a la capitalización individual del trabajador.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.).- Señor presidente: hay otro texto que puede dejar satisfecho el requerimiento del señor diputado Fescina y que pongo a consideración de la comisión. Su redacción sería la siguiente: "Los empleadores estarán obligados a efectuar un depósito adicional del afiliado de hasta un 5 por ciento del salario a fin de permitir una mayor acumulación de fondos en menor tiempo. Este depósito será asimilable a un depósito convenido."

El hecho que el depósito se destine a la cuenta de

capitalización individual y sea asimilable a un depósito convenido puede sugerir que estamos ante un régimen especial.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Parrilli.— Señor presidente: si el trabajador opta por ir al sistema público de reparto para tener la prestación adicional por permanencia, no tiene importancia si se trata del 11 o del 16 por ciento, porque por la prestación adicional por permanencia tiene un porcentaje del 0,85 por año —tal como quedó establecido— sobre el salario que aquél perciba en los últimos diez años. De manera que va a aportar por menos tiempo.

Por lo expuesto la comisión no va a aceptar modificaciones en este caso.

Sr. Presidente (Pierri).— A continuación pasamos a la consideración del título II, del libro II, que incluye los artículos 136 a 147.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Señor presidente: vamos a proponer una serie de modificaciones.

En primer lugar, en el artículo 138 donde dice: "Régimen general de jubilaciones y pensiones", debe decir: "Sistema integrado de jubilaciones y pensiones".

El artículo 147 se reemplaza por el siguiente: "Derogación de las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias: deróganse las leyes 18.037 y 18.038 sus complementarias y modificatorias con excepción del artículo 82 y los artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto:

"(Artículos 80 y 81, ley 18.037): Las cajas reconocedoras de servicios deberán transferir a la caja del organismo otorgante de la prestación, los aportes previsionales, contribuciones patronales y las sustitutivas de estas últimas si las hubiera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondiente a los servicios reconocidos, a efectos de su amortización ante la caja otorgante. La transferencia deberá efectuarse en moneda de curso legal en forma mensual y de acuerdo al procedimiento que se determine en la reglamentación. Será organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicios con aportes. En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con

aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgante. Queda derogada la ley 18.038 sus complementarias y modificatorias, todo con la salvedad de lo que disponen los artículos 130, 134 y 138 de la presente ley."

Sra. Guzmán.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Sueiro. — Si, señora diputada.

Sr. Presidente (Pierri). Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente: quería preguntar por qué motivo, al final del artículo propuesto, cuando se habla de lo que disponen los artículos 130, 134 y 138 de la presente ley, no se incluye también el artículo 137.

Sr. Presidente (Pierri).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Señor presidente: no se incluye el artículo 137 porque ya hemos hecho referencia a la ley 18.038.

Sra. Guzmán.- Pero en el artículo 134 de las disposiciones complementarias se dice que continuarán aplicándose supletoriamente las leyes 18.037 y 18.038 en los casos no previstos en la presente ley. Sin embargo, aquí omitimos esto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: propongo la eliminación del artículo 140.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina.— Señor presidente: comprendo que a esta altura del debate estén fatigados los integrantes de la comisión pero entiendo necesario formular tres observaciones.

En primer término, con relación al artículo 136 del Orden del Día N° 922, punto I, hay un error material. En vez de decir: "Art. 136", debería decir: "138", porque se remite al mismo artículo y se trata del 138.

En segundo lugar, en el punto 5, subpuntos 2 a) y b), se advierte un problema de redacción, pues debería decir "si no excede de un año" y, sucesivamente, si no excediera de dos años, de tres años; de lo contrario esto traerá problemas de interpretación.

Finalmente, y a este respecto pido especial atención de los integrantes de la comisión, el punto 6 del artículo 136 del Orden del Día N° 922 habla del haber máximo y dice: "El haber máximo de jubilaciones de esta ley, incluida la movilidad que corresponde, será equivalente a diez (10) veces el haber mínimo de jubilación ordinaria vigente a la fecha de la promulgación de esta ley."

Quiero destacar que el actual haber máximo es de 1.899,12 pesos. Si se tomara el mínimo ga-

rantizado llegaríamos a 1.500 pesos, pero si en realidad se parte de lo que es, la jubilación mínima instituida por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 5 de abril de 1991, la cifra es de 55 pesos, lo que llevaría el máximo a 550 pesos.

Por lo tanto sugiero la siguiente redacción: "El haber máximo de las jubilaciones otorgadas conforme a esta ley será el vigente a la fecha de promulgación de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. A partir de esta fecha dicho máximo se registrará, de acuerdo con el artículo 138 de dicha ley." De lo contrario corremos el riesgo de que se achique sustancialmente el máximo vigente. De esta manera aseguramos y damos garantía a los actuales y futuro a jubilados por este régimen.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: nos parece acertada la aclaración efectuada por el señor diputado Fescina y es aceptada por la comisión.

A su vez, la comisión acepta la propuesta del señor diputado Sodero Nievas en cuanto al artículo 140.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración los artículos 148 a 152 del libro III.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: con respecto a estos artículos la comisión no propone modificaciones.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el libro IV, que comprende los artículos 153 a 154 del capítulo I, los artículos 155 a 157 del capítulo II y los artículos 158 a 161 del capítulo III.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.- Señor presidente: antes de ingresar al libro IV, la comisión propone una modificación al artículo 142 -contenidos en el título II del libro II—, que consiste en eliminar su último párrafo.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: la próxima modificación que propondrá la comisión será con respecto al artículo 168.

Sr. Presidente (Pierri). — Entonces hasta el artículo 161 no hay modificaciones. La comisión tampoco propone modificaciones a los artículos 162 a 166 del libro V. La modificación sería en el artículo 168 del libro VI, que comprende los artículos 167 a 171.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: la comisión propone reemplazar el texto del artículo 168 por el siguiente: "Cuando el aumento de los fondos que le corresponden a la Nación, conforme al artículo 39, inciso a), de la ley 23.548 lo permitiera, el Poder Ejecutivo podrá disponer, en la proporción que represente dicho aumento, que el importe abonado en concepto de contribución a cargo del empleador, establecido por el artículo 9º de la ley 18.037, t. o. 1976 y su modificación, se deduzca total o parcialmente de los mismos."

El texto del artículo 169 se sustituiría por el siguiente: "Anualmente, de manera conjunta con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto general de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá incluir el estado financiero del Régimen Previsional Público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios."

El artículo 171 se reemplaza por el siguiente:

"A los efectos de la interpretación de la presente ley, debe estarse a lo siguiente: a) Las normas que no fueran expresamente derogadas mantienen su plena vigencia; b) Cumplida la condición establecida en el artículo 130 de la presente ley, las referencias que la legislación vigente haga las leyes 18.037 y 18.038, en cuanto al concepto de remuneración a aportes o contribuciones vinculadas a dicho concepto, debe entenderse como hechas, en lo pertinente, a lo prescrito en los artículos 69 y 11 de la presente; c) Las referencias que la legislación vigente haga al concepto haberes de las prestaciones previsionales, deben entenderse como hechas a la sumatoria total de los haberes que el beneficiario perciba tanto del régimen de reparto cuanto del régimen de capitalización; d) Con la salvedad de lo prescrito en el artículo 130, esta ley entrará en vigencia al momento de su promulgación."

Finalmente, se incorpora como artículo 172 el siguiente "Modifícase la Ley de Concursos (ley 19.551), texto ordenado en 1984, en la siguiente forma:

"1. Sustitúyese el primer párrafo del inciso 8, del artículo 11, por el siguiente:

"8. Acompañar la documentación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social, del personal en relación de dependencia

actualizada al momento de la presentación.

2. Incorpórase como segundo párrafo del inciso 8 del artículo 11 el siguiente:

"El cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social deberá ajustarse a las modalidades y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo en la pertinente reglamentación." Con estas modificaciones que propone la comisión, más el agregado que hará el señor diputado Parrilli, damos por concluida nuestra propuesta respecto de los artículos restantes del proyecto de ley bajo análisis.

Sr. Presidente (Pierri).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: vamos a incorporar un último artículo de acuerdo con el compromiso que asumimos con el señor diputado Gatti cuando estuvimos tratando el libro I.

Este artículo -a numerarse en su oportunidad- debe decir lo siguiente: "Los trabajadores que hubiesen prestado servicios bajo dependencia de un empleador acogido a las disposiciones del artículo 12 y concordantes de la ley 24.013, podrán acreditar los años trabajados con los mismos en los términos del inciso b) del artículo 19 de la presente ley."

La referencia se debe a la ley nacional de empleo, donde se da a los empleadores la posibilidad de regularizar la situación de aportes no realizados. Si los empleadores pueden gozar de este tipo de beneficio, ingresando en una moratoria determinada, justo es reconocer a los trabajadores estos años como servicios con aporte.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Loutaif— Señor presidente: no escuché decir que se suprime el artículo 170. Si no se lo elimina, estamos derogando el artículo 40 de la ley 24.073, que se refiere a la distribución de los fondos del impuesto a las ganancias. Yo había sugerido que el artículo 170 sea eliminado del proyecto.

Sr. Presidente (Pierri) — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Señor presidente: voy a hacer la última observación de la noche pero antes me gustaría que elevemos una plegaria: "Que Dios premie a quien sea capaz de interpretar esta ley". Mi observación se refiero al inciso d) del artículo 171 propuesto por la comisión que dice: "Con la salvedad de lo prescrito en el artículo

130, esta ley entrará en vigencia al momento de su promulgación." Solicito que se exceptúen de esta disposición los artículos 136, 137, 140 y 144, fijándose que entrarán en vigencia a los sesenta días de la promulgación de la ley. Con esta modificación cualquier trabajador -tanto el de Alpargatas como el del frigorífico equis- podrá jubilarse antes de que entren en vigor estos artículos. Así como damos chances a las administradoras para que se organicen en seis meses, demos a los trabajadores aunque sea sesenta días para que se acojan al régimen vigente.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.- Señor presidente: entendemos que es razonable la observación formulada por el señor diputado Fescina. La comisión acepta el plazo de sesenta días para que entren en vigencia los artículos en cuestión.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto.- Señor presidente: La comisión también acepta la propuesta de eliminación del artículo 170 que formulara el señor diputado Loutaif.

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título IV del Libro I, que comprende los artículos 130 a 132 del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título V del libro I, que comprende el artículo 133 del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Se van a votar los títulos I y II del libro II, que contienen los artículos 134 y 135, y 136 a 147 respectivamente, del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el libro III que contiene los artículos 148 a 152 del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el libro IV, que comprende los artículos 153 y 154 del capítulo I; 155 a 157 del capítulo II, y 158 a 161 del capítulo III del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el libro V, que comprende los artículos 162 a 166 del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el libro VI que contiene los artículos 167 a 171 del Orden del Día N° 922, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se van a votar los artículos nuevos propuestos por los señores diputados Sueiro y Parrilli, que deben incorporarse al final del texto y cuya numeración definitiva resultará de la remuneración final que deberá efectuarse.

—Resulta afirmativa.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin.- Antes de finalizar la votación, deberíamos facultar a la Presidencia a que proceda al ordenamiento de la numeración de los artículos del proyecto de ley, habida cuenta de las modificaciones producidas.

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia siempre ha procedido de esa manera. De todas formas no existe inconveniente en autorizarla nuevamente a ello.

Se va a votar si se concede autorización a la Presidencia para proceder al ordenamiento de los artículos del proyecto de ley.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital para dar lectura de la propuesta del texto del artículo 19 que se reconsidera.

Sr. Ruckauf.— Dice así: "Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servi-

cios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

"En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo 127".

Sr. Zamora (F.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (F.).— Señor presidente: hoy nuevamente hemos visto cómo la presión de la rama femenina del justicialismo ha tenido éxito, al igual que lo tuvo en su momento cuando desde las galerías nos presionaban para sancionar la ley de cupos, aunque seguramente muchos estarán preguntándose por qué se cedió a esa presión, algo que no ha ocurrido justamente con este bloque.

Para evitar que estas presiones se manifiesten en el momento de la votación solicito que ésta sea realizada mediante el sistema electrónico.

Sólo quiero agregar una reflexión: entiendo los argumentos que dieron las señoras diputadas pero también, en la búsqueda de la igualdad y de la no discriminación, deberían contemplarse las actividades de aquellos hombres que a los 60 o 65 años de edad realizan tareas que no están en condiciones de efectuar. Me refiero, por ejemplo, a los obreros de la construcción, a los choferes, a los mineros y a tantas otras tareas respecto de las que debería existir una situación distintiva como la que han solicitado las señoras diputadas.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar por el sistema electrónico el artículo 19, con la redacción de que ha dado lectura el señor diputado Ruckauf.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 120 señores diputados sobre 130 presentes.

Sr. Presidente (Pierri).— Corresponde reconsiderar los artículos 36 y 127.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola.— Señor presidente: ambos artículos se refieren a una escala de gradualismo a utilizar. Por lo tanto hay que adaptar estos artículos a la nueva redacción del artículo 17, por lo que habría que suprimir en la columna de mujeres la opción de 60 a 65 años.

Sr. Presidente (Pierri). — Se van a votar los artículos 36 y 127, con las modificaciones propuestas por el señor diputado por Mendoza.

— Resulta afirmativa

—El artículo 174 es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el

proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri).— Se va a votar si se efectúen las inserciones solicitadas por los señores diputados Albamonte, Baglini, Gioja, Martínez Raymonda, Estévez Boero, Gatti, Sánchez Galdeano; Hardy, Sabio, García, Gómez Centurión, Manny, Topa, Bravo, Corchuelo Blasco, Gargiulo, Algaba, Bisciotti, Antonio Isaac Guerrero, Puricelli, Green, Loutaif, Folloni, Michelli, Nicolás Eduardo Becerra, Varela, Beltrán, Rodríguez Sañudo y Soderó Nievas.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). - Quedan autorizadas las inserciones solicitadas².

Sr. Albamonte.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: en el momento en que ejercía la Presidencia el señor diputado Ruckauf se formuló una observación - que contó con el asentimiento de la Cámara- a fin de que cuando se ordene definitivamente el proyecto que acabamos de sancionar no exista ningún artículo bis.

Asimismo corresponde que en dicho ordenamiento se tenga en cuenta la modificación introducida al artículo 19 -que ahora cuenta con tres incisos en vez de dos- a efectos de adecuar aquellos artículos que remitían al inciso b) y que ahora deben referirse al inciso c).

Sr. Presidente (Pierri). -Así se hará, señor diputado.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 326)

² Véase el texto de las inserciones en el Apéndice (Página 368). Las inserciones solicitadas por los señores diputados Gioja, Gatti, García, Manny, Corchuelo Blasco, Gargiulo, Algaba, Puricelli y Green no figuran por no haber sido remitidas para su publicación.

Proyecto de ley que pasa en revisión al Honorable Senado

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

LIBRO I

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

TITULO I

Disposiciones generales

Capitulo I

Creación - Ambito de aplicación

Institución del sistema integrado de jubilaciones y pensiones

Artículo. 1° -. Institúyese con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS).

Conforman este sistema: 1) un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto, en adelante también régimen de reparto; y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también régimen de capitalización.

Incorporación obligatoria.

Art. 2°- Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas a las disposiciones que sobre afiliación establece esta ley y a las normas reglamentarias que se dicten, las personas físicas mayores de dieciocho (18) años de edad que a continuación se detallan:

a) Personas que desempeñen alguna de las actividades en relación de dependencia que se enumeran en los apartados siguientes, aunque el contrato de trabajo o la relación de empleo público fueren a plazo fijo;

1. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque sean de carácter electivo, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado, sociedades

del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales y obras sociales del sector público, con exclusión del personal militar de las fuerzas armadas y del personal militarizado o con estado policial de las fuerzas de seguridad y policiales;

2. El personal civil de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad y policiales.
3. Los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos en organismos oficiales interprovinciales, o integrados por la Nación y una o más provincias, cuyas remuneraciones se atiendan con fondos de dichos organismos;
4. Los funcionarios, empleados y agentes civiles dependientes de los gobiernos y municipalidades provinciales, a condición que previamente las autoridades respectivas adhieran al SIJP, mediante convenio con el Poder Ejecutivo nacional;
5. Las personas que en cualquier lugar del territorio del país presten en forma permanente, transitoria o eventual, servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada;
6. Las personas que en virtud de un contrato de trabajo celebrado o relación laboral iniciada en la República, o de un traslado o comisión dispuestos por el empleador, presten en el extranjero servicios de naturaleza prevista en el apartado anterior, siempre que dichas personas tuvieran domicilio real en el país al tiempo de celebrarse el contrato, iniciarse la relación laboral o disponerse el traslado o comisión;
7. En general todas las personas que hasta la vigencia de la presente ley estuvieran obligatoriamente comprendidas en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones por actividades no incluidas con carácter obligatorio en el régimen para trabajadores autónomos.

Cuando se trata de socios en relación de dependencia con sociedades se estará a lo dispuesto en el inciso d)

- b) Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no configuren una relación de dependencia

1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de

- lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno;
2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada;
 3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o similares;
 4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes;
- c) Personas al servicio de las representaciones y agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país, como también el dependiente de organismos internacionales que preste servicios en la República, si de conformidad con las convenciones y tratados vigentes resultan aplicables a dicho personal las leyes de jubilaciones y pensiones argentinas. Al personal que quede excluido le será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4°;
- d) Cuando se trata de socios de sociedades, a los fines de su inclusión obligatoria en los incisos a) o b), o en ambos serán de aplicación las siguientes normas:
1. No se incluirán obligatoriamente en el inciso a):
 - 1.1 Los socios de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el capital sea igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número cien (100) por el número total de socios.
 - 1.2 El socio comanditado único de las sociedades en comandita simple o por acciones. Si hubiera más de un socio comanditado se aplicará lo dispuesto en el punto anterior tomando en consideración solamente el capital comanditado.
 - 1.3 Los socios de las sociedades civiles y de las sociedades comerciales irregulares de hecho, aunque no se cumpla el requisito al que se refiere el punto
 - 1.4 Los socios de sociedades de cualquier tipo –aunque no estuvieran comprendidos en los puntos anteriores- cuando la totalidad de los integrantes de la sociedad estén ligados por un vínculo de parentesco de hasta el segundo grado de consaguinidad y/o afinidad.
 2. Sin perjuicio de su inclusión en el inciso b) cuando un socio quede incluido obligatoria mente en el inciso a) la sociedad y el socio estarán sujetos a las obligaciones de aportes y

contribuciones obligatorios por la proporción de la remuneración y participación en las utilidades que el socio perciba y/o se le acrediten en cuenta, en la medida que exceda el monto que le hubiera correspondido con su participación en el capital social.

Incorporación voluntaria

Art. 3-. La incorporación al SIJP es voluntaria para las personas mayores de dieciocho (18) años de edad , que a continuación se detallan:

a) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso a) del artículo anterior:

1. Los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que perciban en la misma sociedad por actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de dependencia.
2. Los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten incluidos obligatoriamente conforme a lo dispuesto en el inciso d) del artículo anterior.

b) Con las obligaciones y beneficios que corresponden a los incluidos en el inciso b) del artículo anterior:

1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna por esas funciones, socios no gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios.
2. Los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común.
3. Los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al culto católico apostólico romano, u otros inscritos en el Registro Nacional de Cultos.
4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo 2° inciso b), apartado 2, y que por ellas se encontraren obligatoriamente afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley. Esta incorporación no modificará la obligatoriedad que dimana de los respectivos regímenes locales.

5. Las amas de casa.

Excepción

Art. 4º-. Quedan exceptuados del SIJP los profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para prestar servicios en el país por un plazo no mayor de dos (2) años y por una sola vez, a condición que no tengan residencia permanente en la República y estén amparados contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su nacionalidad o residencia permanente. La solicitud de exención deberá ser formulada ante la autoridad de aplicación por el interesado o su empleador.

La precedente exención no impedirá la afiliación a este sistema, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, o aquél efectuar su propio aporte y la contribución correspondiente al empleador.

Las disposiciones precedentes no modifican las contenidas en los convenios sobre seguridad social celebrados por la República con otros países, ni las de la ley 17.514.

Actividades simultáneas

Art. 5º -. La circunstancia de estar también comprendido en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, no eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y contribuciones a este sistema salvo en los casos expresamente determinados en la presente ley.

Las personas que ejerzan en forma simultánea más de una actividad de las comprendidas en los incisos a), b) o c) del artículo 2º, así como los empleadores en su caso contribuirán obligatoriamente por cada una de ellas.

CAPITULO II

Remuneración. Aportes y contribuciones

Concepto de remuneración

Art. 6º-. Se considera remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiera el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de

habituales y regulares, viáticos y gastos de representación excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia.

La autoridad de aplicación determinará las condiciones en que los viáticos y gastos de representación no se considerarán sujetos a aportes ni contribuciones, no obstante la inexistencia total o parcial de comprobantes que acrediten el gasto.

Las propinas y las retribuciones en especie de valor incierto serán estimadas por el empleador. Si el afiliado estuviera disconforme, podrá reclamar ante la autoridad de aplicación la que resolverá teniendo en cuenta la naturaleza y modalidades de la actividad y de la retribución. Aun mediando conformidad del afiliado, la autoridad de aplicación podrá rever la estimación que no considerara ajustada a estas pautas.

Se consideran asimismo remuneración las sumas a distribuir a los agentes de la administración pública o que éstos perciban en carácter de:

1. Premio estímulo, gratificaciones u otros conceptos de análogas características. En este caso también las contribuciones estarán a cargo de los agentes, a cuyo efecto antes de proceder a la distribución de dichas sumas se deberá retener el importe correspondiente a la contribución.
2. Cajas de empleados o similares, cuando ello estuviere autorizado. En este caso el organismo o entidad que tenga a su cargo la recaudación y distribución de estas sumas deberá practicar los descuentos correspondientes a los aportes personales y depositarlas dentro del plazo pertinente.

Concepto excluidos

Art. 7º. No se consideran remuneración las asignaciones familiares las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se consideran remuneración las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral, en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.

Renta imponible

Art. 8° -. Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios establecidos en el artículo 10, sobre los niveles de rentas de referencia calculados en base a categorías que fijarán las normas reglamentarias de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) Capacidad contributiva
- b) La calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso su condición de responsable inscripto, de responsable no inscripto o no responsable en dicho impuesto.

Base imponible

Art. 9° -. A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al SIJP, las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el valor del aporte medio previsional obligatorio (AMPO), definido en el artículo 21. A su vez, la mencionada base imponible previsional tendrá un límite máximo equivalente a veinte (20) veces el citado mínimo.

Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como trabajador en relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a los efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente párrafo.

Aportes y contribuciones obligatorios

Art. 10 -. Los aportes y contribuciones obligatorios al SIJP se calcularán tomando como base las remuneraciones y rentas de referencia, y serán los siguientes:

- a) Aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en este sistema;
- b) Contribución a cargo de los empleadores;
- c) Aporte personal de los trabajadores autónomos comprendidos en el presente sistema.

Porcentajes de aportes y contribuciones

Art. 11 -. El aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia será del once por ciento (11 %), y la contribución a cargo de los empleadores del dieciséis por ciento (16 %).

El aporte personal de los trabajadores autónomos será del veintisiete por ciento (27 %).

Los aportes y contribuciones obligatorios serán ingresados a través del SUSS. A tal efecto, los mismos deberán ser declarados o ingresados por el trabajador autónomo o por el empleador en su doble carácter de agente de retención de las obligaciones a cargo de los trabajadores y de contribuyente al SIJP, según corresponda, en los plazos y con las modalidades que establezca la autoridad de aplicación.

Capítulo III

Obligaciones de los empleadores, de los afiliados y de los beneficiarios

Obligaciones de los empleadores

Art. 12 -. Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:

- a) Inscribirse como tales ante la autoridad de aplicación y comunicar a la misma toda modificación en su situación como empleadores, en los plazos y con las modalidades que dicha autoridad establezca;
- b) Dar cuenta a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal;
- c) Practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal y depositarlos a la orden del SUSS;
- d) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior las contribuciones a su cargo;
- e) Remitir a la autoridad de aplicación las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal;
- f) Suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera, en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los lugares de trabajo, libros anotaciones, papeles y documentos;
- g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u

- otorgamiento de cualquier prestación ;
- h) Requerir de los trabajadores comprendidos en el SIJP al comienzo de la relación laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca, la presentación de una declaración jurada escrita de si son o no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación, en caso afirmativo, del organismo otorgante y datos de individualización de la prestación;
 - i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia concerniente a los trabajadores, que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones que a éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión;
 - j) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga.

Las reparticiones y organismos del Estado mencionados en el apartado 1 del inciso a) del artículo 2º, están también sujetos a las obligaciones enumeradas precedentemente

Obligaciones de los afiliados y de los beneficiarios

Art.13.-.

- a) Son obligaciones de los afiliados en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:
 1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión.
 2. Presentar al empleador la declaración jurada a la que se refiere el inciso h) del artículo 12, y actualizar la misma cuando adquieran el carácter de beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, en el plazo y con las modalidades que la autoridad de aplicación establezca.
 3. Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador a las obligaciones establecidas por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones.

La autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 45 días, deberá investigar los hechos denunciados, dictar resolución desestimando la denuncia o imponiendo las sanciones pertinentes y efectuar la

- denuncia penal, según corresponda, y notificar fehacientemente al denunciante todo lo actuado y resuelto. El funcionario público que no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en este inciso incurrirá en falta grave;
- b) Son obligaciones de los afiliados autónomos, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:
 - 1) Depositar el aporte a la orden del SUSS
 - 2) Suministrar todo informe referente a su situación frente a las leyes de previsión exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos.
 - 3) En general dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga;
- c) Son obligaciones de los beneficiarios, sin perjuicio de las demás establecidas en la presente ley:
 1. Suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación, referentes a su situación frente a las leyes de previsión;
 2. Comunicar a la autoridad de aplicación toda situación prevista por las disposiciones legales, que afecte o pueda afectar el derecho a la percepción total o parcial de la prestación que gozan.
 3. Presentar al empleador la declaración jurada respectiva en el caso que volvieren a la actividad.

Si el beneficiario fuera incapaz, el cumplimiento de las obligaciones precedentemente establecidas incumbe a su representante legal.

Si existiera incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la actividad, y el beneficiario omitiere denunciar esta circunstancia, a partir del momento en que la autoridad de aplicación tome conocimiento de la misma, se suspenderá o reducirá el pago de la prestación, según corresponda. El beneficiario deberá, además, reintegrar lo cobrado indebidamente en concepto de haberes previsionales, con los accesorios correspondientes, importe que será deducido íntegramente de la prestación que tuviere derecho a percibir, si continuare en actividad; en caso contrario se le formulará cargo en los términos del inciso d) del artículo 14.

El empleador que conociendo que el beneficiario se halla en infracción a las normas sobre incompatibilidad no denunciara esta circunstancia a la autoridad de aplicación, se hará pasible de una multa equivalente a diez (10) veces lo percibido indebidamente por el beneficiario en concepto de haberes previsionales. El hecho de que el empleador no practique las retenciones en concepto de aportes hace presumir, cuando el trabajador fuere beneficiario de prestación previsional, que aquél conocía la circunstancia señalada precedentemente.

Capítulo IV

Caracteres de las prestaciones

Art. 14 -. Las prestaciones que su acuerden por el SIJP reúnen los siguientes caracteres:

- a) Son personalísimas, y sólo corresponden a sus titulares;
- b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo las prestaciones mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas y mutualidades, con los cuales los beneficiarios convengan el anticipo de las prestaciones;
- c) Son inenajenables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas;
- d) Las prestaciones del régimen de reparto están sujetas a las deducciones que las autoridades judiciales y administrativas competentes dispongan en concepto de cargos prevenientes de créditos a favor de organismos de seguridad social o por la percepción indebida de haberes de jubilaciones, pensiones, retiros o prestaciones no contributivas. Dichas deducciones no podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del haber mensual de la prestación, salvo cuando en razón del plazo de duración de ésta no resultara posible cancelar el cargo mediante ese porcentaje, en cuyo caso la deuda se prorrateará en función de dicho plazo;
- e) Son imprescriptibles, salvo las establecidas en el artículo 17, que se registrarán por las normas del artículo 82 de la ley 18.037 (texto ordenado en 1976);

- f) Sólo se extinguen por las causas previstas por la ley.

Todo acto jurídico que contrarie lo dispuesto precedentemente será nulo y sin valor alguno.

Reapertura del procedimiento. Nulidad

Art. 15. -. Cuando hubiere recaído resolución judicial o administrativa firme, que denegare en todo o en parte el derecho reclamado, se estará al contenido de la misma. Si como consecuencia de la reapertura del procedimiento a frente nuevas invocaciones se hiciera lugar al reconocimiento de este derecho, se considerará como fecha de solicitud la del pedido de reapertura del procedimiento.

Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviere afectada de nulidad absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida, revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa, mediante resolución fundada aunque la prestación se hallare en curso de pago.

TÍTULO II

Régimen previsional público

Capítulo I

Garantía - Financiamiento – Prestaciones

Garantía del Estado

Art. 16.-. El Estado nacional garantiza el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este título, las que se financiarán a través de un régimen de reparto.

Prestaciones

Artículo. 17- El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones

- a) Prestación Básica Universal;
- b) Prestación compensatoria;
- c) Retiro por invalidez
- d) Pensión por fallecimiento
- e) Prestación adicional por permanencia

Financiamiento.

Art. 18. Las prestaciones correspondientes al régimen de reparto se financiarán mediante

fondos provenientes de:

- a) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11;
- b) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos, establecidos en el Artículo 11;
- c) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y otros tributos de afectación específica al Régimen Nacional de Previsión Social o a este régimen;
- d) Los recursos provenientes de "Rentas Generales de la Nación";
- e) Intereses, multas y recargos;
- f) Rentas provenientes de inversiones;
- g) Todo otro recurso que corresponda ingresar al régimen de reparto;
- h) Los aportes correspondientes a los afiliados previstos en el artículo 30 que no hayan ejercido la opción prevista en el artículo 39 .

Capítulo II

Prestación básica universal

Requisitos

Art. 19. Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU), y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados:

- a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad;
- b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad;
- c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes, computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad

En cualquier de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo 128..

Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal, se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes.

A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones de los artículos 36 y 37, respectivamente.

Haber de la Prestación

Art. 20. -. El haber mensual de la prestación básica universal se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Para los beneficiarios que acrediten treinta (30) años de servicios en las condiciones del inciso c) del artículo anterior, el haber será equivalente a dos veces y media (2,5) el aporte medio previsional obligatorio al que se refiere el artículo siguiente;
- b) Para los beneficiarios que acrediten más de treinta (30) y hasta cuarenta y cinco (45) años como máximo de servicios en las condiciones preindicadas, el haber se incrementará en un uno por ciento (1 %) por año adicional sobre la suma a que alude el inciso a)

Aporte medio previsional obligatorio

Art. 21. - El Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) se obtendrá dividiendo el promedio mensual de los aportes establecidos en el artículo 39, ingresados en cada semestre, excluidos los aportes sobre sueldo anual complementario, por el número total promedio mensual de afiliados que se encuentren aportando, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias.

El cómputo del AMPO se realizará en los meses de marzo y septiembre de cada año.

Cómputo de servicios

Art. 22.- A los fines del artículo 19, inciso c), serán computables los servicios comprendidos en el presente sistema, como también los prestados con anterioridad. Dicho cómputo comprenderá exclusivamente las actividades desarrolladas hasta el momento de solicitar la prestación básica universal.

Capítulo III

Prestación compensatoria

Requisitos

Art. 23.- Tendrán derecho a la prestación compensatoria, los afiliados que:

- a) Acrediten los requisitos para acceder a la prestación básica universal;
- b) Acrediten servicios con aportes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, prestados hasta

- la fecha de vigencia del presente libro;
- c) No se encuentren percibiendo retiro por invalidez, cualquiera fuera el régimen otorgante.

Haber de la prestación

Art. 24.- El haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Si todos los servicios con aportes computados fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente a uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes, o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.
- A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de carácter oficial.
- b) Si todos los servicios con aportes computados fueren autónomos, el haber será equivalente a un uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes, o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado, ponderado por el tiempo con aportes computados en cada una de ellas;
- c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte para los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios. Si el período

computado excediera de treinta y cinco (35) años a los fines de este inciso se considerarán los treinta y cinco (35) años más favorables.

Para determinar el haber de la prestación se tomarán en cuenta únicamente servicios de los indicados en el inciso b) del artículo anterior.

Promedio de remuneraciones

Art. 25.- Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo.

Haber máximo

Art. 26.- El haber máximo de la prestación compensatoria será equivalente a una (1) vez el AMPO por cada año de servicios con aportes computados.

CAPITULO IV

Prestaciones de retiro por invalidez y de pensión por fallecimiento

Normas aplicables

Art. 27. - Estarán a cargo del régimen previsional público las prestaciones de retiro por invalidez y de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad hasta la suma de la Prestación Básica Universal más la Prestación Compensatoria que correspondiere al momento de producida la contingencia.

También estará a cargo de dicho régimen la pensión por fallecimiento del beneficiario de alguna de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 17.

Las prestaciones indicadas en los párrafos precedentes se regirán para su otorgamiento, por los mismos requisitos que para dichas prestaciones establece el régimen de Capitalización.

El cálculo de la Prestación Básica Universal se efectuará de acuerdo al artículo 20, inciso a), considerando como años de servicio la suma de los años de servicios con aportes anteriores a la invalidez o al fallecimiento, más los años futuros hasta la edad establecida en el artículo 19, inciso a) y b), o la establecida en el artículo 37, si correspondiere.

En ningún caso la prestación establecida en este

artículo será superior al haber de las prestaciones establecido en el artículo 28

Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento a seguir relacionado con la determinación de la invalidez en el caso de los afiliados que hubieran ejercido la opción por el régimen de reparto, el que deberá ser compatible en lo pertinente, con lo dispuesto en el capítulo II del título III.

Las prestaciones por invalidez o fallecimiento a otorgarse a los beneficiarios que opten por permanecer en el régimen de reparto, será equivalentes a las que se establecen en los artículos 97 y 98.

Haber de las prestaciones

Art. 28.- El haber de las prestaciones mencionadas en el artículo anterior se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

- a) El retiro por invalidez, según lo establecido en el artículo 97;
- b) La pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 98;
- c) La pensión por fallecimiento del beneficiario, establecida en el segundo párrafo del artículo anterior, según las disposiciones del apartado 3 del artículo 98

Pago de las prestaciones

Art. 29.- Las prestaciones indicadas en el primer párrafo del artículo 27, y la pensión derivada de la prestación mencionada en el inciso c) del artículo 17, serán abonadas a los beneficiarios en forma directa por el SUSS.

Opción de los afiliados

Artículo.30.- Prestación adicional por permanencia: las personas físicas comprendidas en el artículo 2º podrán optar por no quedar comprendidas en las disposiciones establecidas en el título III del presente libro. Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos administrativos para el ejercicio de la mencionada opción.

La mencionada opción producirá los siguientes efectos para los afiliados.

- a) Los aportes establecidos en el artículo 39 serán destinados al financiamiento del régimen previsional público.

- b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción por parte del régimen público de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17. El haber mensual de esta prestación se determinará computando ochenta y cinco centésimos por ciento (0,85%) por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria.

Para acceder a la prestación adicional por permanencia los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23;

- c) Las prestaciones de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad serán financiadas por régimen de reparto acorde a lo establecido en el título III del capítulo VII, independientemente de la fecha de nacimiento del afiliado
- d) A los efectos de aspectos de movilidad, prestación anual complementaria y otros inherentes a la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la prestación compensatoria.

Capítulo V

Disposiciones comunes

Prestación anual complementaria

Art. 31.- Se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos (2) cuotas, equivalente cada una al cincuenta por ciento (50 %) de las prestaciones mencionadas en el artículo 17, en los meses de junio y diciembre.

Cuando se hubiere tenido derecho a gozar de las prestaciones sólo durante parte de un semestre, la cuantía respectiva se determinará en proporción al tiempo en que se devengaron los haberes.

Movilidad de las prestaciones

Art. 32.- Los haberes de las prestaciones correspondientes al régimen de reparto serán móviles, en función de las variaciones entre dos (2) estimaciones consecutivas del AMPO, no pudiendo ello importar por ningún concepto la disminución en términos nominales del haber

respectivo.

Límite de acumulación

Art. 33. -. La misma persona no podrá ser titular de más de una (1) prestación básica universal y, en caso de corresponder, de más de una (1) prestación compensatoria, ni más de una (1) prestación adicional por permanencia, debiendo optar por cada una de ellas.

Incompatibilidad - Excepción para el personal docente universitario

Art. 34.- Si el beneficiario de una prestación básica universal reingresare a la actividad en relación de dependencia, se le suspenderá el goce de esa prestación, como también el de la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia en caso de corresponder, hasta tanto cese en dicha actividad, la que no dará derecho a reajuste del haber de las prestaciones mencionadas.

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior al beneficiario que se reintegrare a la actividad o continuare en la misma en cargos docentes o de investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo, o en facultades, escuelas, departamentos, institutos y demás establecimientos de nivel universitario que dependan de ellas.

El Poder Ejecutivo podrá extender esa compatibilidad a los cargos docentes o de investigación científica desempeñados en otros establecimientos o institutos oficiales de nivel universitario, científico o de investigación, como también establecer en los supuestos contemplados en este párrafo y en el anterior, límites de compatibilidad con reducción del haber de las prestaciones.

Percepción unificada

Art. 35.- La prestación básica universal y la prestación compensatoria serán abonadas en forma coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con algunas de las prestaciones detalladas en el artículo 27 otorgada a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos de transferencia por parte del Sistema Unico de la Seguridad Social a la entidad responsable del pago de la prestación derivada del régimen de capitalización, a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos.

CAPITULO VI

Autoridad de aplicación, fiscalización y control

Facultades y atribuciones

Art. 36- La ANSES tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización del régimen de reparto, así como la recaudación de la Contribución Unica de la Seguridad Social (CUSS), la que además de los conceptos que constituyen recursos del régimen de reparto, incluirá el aporte personal de los trabajadores que se orientará al Régimen de Capitalización.

Corresponderá al citado organismo el dictado de normas reglamentarias en relación a los siguientes ítem:

- a) Las modalidades de recaudación de los aportes y contribuciones previsionales, los que deberán efectivizarse por los obligados al pago, en entidades regidas por la ley 21.526 conforme a la forma en que lo establezcan las normas reglamentarias;
- b) Las transferencias de los correspondientes aportes previsionales a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, debiendo las entidades bancarias receptoras de los mismos remitirlos directamente a las administradoras correspondientes dentro de las 48 horas de recibidos, y enviar a la ANSES la información de las transferencias efectuadas dentro de las 48 horas siguientes;
- c) La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones previsionales;
- d) La determinación de intereses moratorios y punitivos y sanciones aplicables en caso de mora;
- e) La fijación de las fechas para declaración e ingreso de los aportes y contribuciones;
- f) La certificación de los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones estatuidas en el presente título;
- g) La instrumentación de normas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35;
- h) El requerimiento de toda información periódica u ocasional a los responsables de la declaración e ingreso de los aportes y

contribuciones necesarias para un adecuado cumplimiento de sus funciones de control;

- i) La concesión de las prestaciones establecidas en el presente título;
- j) El procedimiento para la tramitación de denuncias a que se refiere el apartado 3 del inciso a) del artículo 13.

En el ejercicio de sus atribuciones podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, iniciar acciones judiciales, denunciar delitos y constituirse en parte querellante.

Esta enumeración es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de Seguridad Social.

CAPITULO VII

Disposiciones Transitorias

Gradualismo de edad

Art. 37.- La edad establecida en el artículo 19, inciso b) para el logro de la prestación básica universal se aplicará de acuerdo con la siguiente escala:

Hombres		Mujeres		
Desde el Año	Relación de dependencia	Autónomos	Relación de dependencia	Autónomos
1994	62	65	57	60
1996	63	65	58	60
1998	64	65	59	60
2001	65	65	60	60
2003	65	65	60	60
2005	65	65	60	60
2007	65	65	60	60
2009	65	65	60	60
2011	65	65	60	60

Declaración jurada de servicios con aportes

Art. 38.- Para el cómputo de los años de servicios con aportes requeridos por el artículo 19 para el logro de la prestación básica universal, sólo podrán acreditarse mediante declaración jurada, como máximo, la cantidad de años que a continuación se indican, según el año de cese del afiliado:

1994	7 años
1995	7 años
1996	6 años
1997	6 años
1998	5 años
1999	5 años
2000	4 años
2001	4 años
2002	3 años
2003	3 años
2004	2 años
2005	2 años
2006	1 año
2007	1 año

TITULO III

Régimen de capitalización

CAPITULO I

Disposiciones generales

Financiamiento

Art. 39. -. Se destinarán al régimen de capitalización los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia establecidos en el artículo 11, y once (11) puntos de los veintisiete (27) correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos, que no hubieran ejercido la opción prevista en el mismo artículo 30

Entidades receptoras de los aportes

Art. 40.- La capitalización de los aportes destinados a este régimen será efectuada por sociedades anónimas denominadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en adelante también administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y control previstos en esta ley y en sus normas reglamentarias.

Asimismo los estados provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, otras sociedades, entidades o asociaciones de diversa naturaleza -con o sin fines de lucro-, que se erigieren con este objeto exclusivo podrán constituirse como administradoras, las que sin perjuicio de adoptar una figura jurídica diferente, quedarán sujetas a idénticos requisitos, normas y controles.

Toda administradora, sin distinción de su forma

jurídica quedará bajo el control y la supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que instituye el artículo 117 de la presente; ello no obstante el controlar que pudieren desarrollar los diversos órganos de fiscalización pertinentes, según la forma legal que hubieren adoptado. Dichos órganos deberán actuar sin interferir en las funciones específicas de la citada Superintendencia, cuyas formas serán de observancia obligatoria para las administradoras.

Queda derogada toda norma que impida a las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, mutuales, cooperativas, colegios públicos de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otro ente de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, constituir o participar como accionista de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

Dispónese que el Banco de la Nación Argentina desempeñe, sin perjuicio de las actividades que le permite su Carta Orgánica, la actividad de administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, debiendo adecuar su estructura a tal efecto dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley.

Agrégase al artículo 3° de la ley 21.799:

Inciso g): Administrar Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la actividad aseguradora exclusivamente inherente a este efecto, dando cumplimiento en lo pertinente a la ley 20.091 sometiéndose a su organismo de control.

La AFJP así constituida quedará bajo el control y supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, estando sujeta a los mismos requisitos, normas y controles que rigen al resto de las AFJP. El Estado nacional garantiza a los afiliados de la AFJP creada en la segunda parte de este artículo que el aporte depositado, deducidas exclusivamente las primas del seguro previsto en el artículo 99 de la presente, en ningún caso será inferior a la mayor de las siguientes alternativas:

- a) Los importes depositados en pesos con más una tasa de interés que devengue el Banco de la Nación Argentina en sus cajas de ahorro para depósitos en pesos;
- b) Los importes depositados en pesos convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador correspondiente al cierre de las operaciones del Banco de la

Nación Argentina del día en que se efectúe cada depósito, con más la tasa LIBO para depósitos a 90 días.

Esta administradora del Banco de la Nación Argentina orientará no menos del 20% de los aportes que constituyan su fondo, a créditos o inversiones con destino a las economías regionales en las condiciones que fije la reglamentación.

Las AFJP administradas por el sector privado podrán otorgar garantías a su costo y riesgo.

Elección de la administradora

Art. 41.- Toda persona que quede incorporada al régimen de capitalización deberá elegir individual y libremente una administradora, la cual capitalizará en su respectivo fondo de jubilaciones y pensiones los aportes establecidos en el artículo 39 y las imposiciones y depósitos a que se refieren los artículos 56 y 57. La libertad de elección de la administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada administradora. Cualquier acuerdo contractual al respecto resultará nulo de nulidad absoluta, sin que ello afecte al beneficio concedido.

El afiliado deberá incorporarse a una única administradora aunque el mismo preste servicios para varios empleadores o realice simultáneamente tareas como trabajador dependiente y en forma autónoma.

Obligaciones de la administradora relativas a la incorporación

Art. 42.- Las administradoras no podrán rechazar la incorporación de un afiliado efectuada conforme a las normas de esta ley ni realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente.

Las administradoras deberán hacer llegar al empleador una copia de la solicitud de incorporación o traspaso de cada trabajador en relación de dependencia.

Obligaciones del afiliado y del empleador

Art. 43. - El trabajador en relación de dependencia deberá comunicar a su empleador la administradora en la que se encuentra incorporado o decida incorporarse, dentro del término de treinta (30) días corridos posteriores al inicio de la relación laboral o la opción ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30.

Si el afiliado omitiere la notificación y el empleador tampoco hubiere recibido comunicación de alguna administradora sobre la incorporación del empleado, los aportes destinados a este régimen deberán hacerse efectivos indicando como administradora a aquella en la cual se encuentren incorporados la mayoría de sus empleados.

Derecho de traspaso a otra administradora

Art. 44- Todo afiliado o beneficiario que cumpla las normas del artículo 45 tiene derecho a cambiar de administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquella en la que se encuentre incorporado y a su empleador en caso de corresponder. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias

Condiciones para el traspaso

Art. 45- El derecho a traspaso por parte del afiliado o beneficiario se limitará a dos (2) veces por año calendario y se regirá por las siguientes normas:

- a) Tratándose de afiliados, el traspaso podrá ser efectuado en la medida en que éste registre al menos cuatro (4) meses de aportes en la entidad que abandona;
- b) Tratándose de beneficiarios bajo las modalidades establecidas en los incisos b) o c) del artículo 100, el traspaso podrá ser efectuado siempre que el beneficiario registre al menos cuatro (4) cobros en la entidad que abandona;
- c) Tratándose de beneficiarios que se encuentran percibiendo retiro transitorio por invalidez, el derecho a traspaso de administradora no podrá ser ejercido mientras aquéllos perciban el correspondiente haber.

Capítulo II

Prestaciones

Prestaciones

Art. 46.- El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:

- a) Jubilación ordinaria;
- b) Retiro por invalidez;
- c) Pensión por fallecimiento del afiliado o beneficiario.

Dichas prestaciones se financiarán a través de la capitalización individual de los aportes previsionales destinados a este régimen.

Jubilación ordinaria

Art. 47. -. Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, y mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad, con la salvedad de lo que dispone el artículo 128 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.

Si un afiliado permanece en actividad con posterioridad a la fecha en que cumpla la edad establecida para acceder al beneficio de jubilación ordinaria, se aplicarán las disposiciones del artículo 111

Art. 48. – Tendrán derecho al retiro por invalidez, los afiliados que:

- a) Se incapaciten física o intelectualmente en forma total por cualquier causa. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento (66 %) o más; se excluyen las invalideces sociales o de ganancias;
- b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria ni se encuentren percibiendo la jubilación en forma anticipada.

La determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado será establecida por una comisión médica cuyo dictamen deberá ser técnicamente fundado, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley y los que dispongan el decreto reglamentario de la presente.

No da derecho a la prestación la invalidez total temporaria que sólo produzca una incapacidad verificada o probable que no exceda del tiempo en que el afiliado en relación de dependencia fuere acreedor a la percepción de remuneración u otra prestación sustitutiva, o de un (1) año en el caso del afiliado autónomo.

Dictamen transitorio por invalidez

Art. 49-

1. - Solicitud

El afiliado que esté comprendido en la situación indicada en el inciso b) del artículo 48 y que considere estar comprendido en la situación descrita en el inciso a) del mismo artículo, podrá solicitar el retiro por invalidez ante la administradora a la cual se encuentre incorporado.

Para efectuar tal solicitud el afiliado deberá acreditar su identidad, denunciar su domicilio real, adjuntar los estudios diagnósticos y certificaciones médicas que poseyera, las que deberán ser formuladas y firmadas exclusivamente por los médicos asistentes del afiliado, detallando los médicos que lo atendieron o actualmente lo atienden, si lo supiera, así como también la documentación que acredite los niveles de educación formal alcanzados, si la poseyera, y en su defecto una declaración jurada sobre el nivel de educación formal alcanzado.

La administradora no podrá requerir ninguna otra información o documentación de la descrita para dar curso a la solicitud. En el mismo momento de presentarse ésta, deberá verificar si el afiliado se encuentra incorporado a la misma.

Si la verificación fuere negativa, rechazará la solicitud, sirviendo el certificado emitido por la administradora de resolución fundada suficiente, entregándole un duplicado de igual tener al solicitante. Si la verificación fuere positiva, la administradora deberá remitirla dentro de las 48 horas a la comisión médica con jurisdicción en el domicilio real del afiliado. Atento lo normado en el artículo 90 *in fine*, la administradora deberá remitir a la dependencia de la ANSES que la reglamentación determine, copia de la solicitud del afiliado.

2. Actuación ante las comisiones médicas

La comisión médica analizará los antecedentes y citará fehacientemente al afiliado en su domicilio real denunciado a revisión, la que deberá practicarse dentro de los quince (15) días corridos de efectuada la solicitud.

Si el afiliado no concurriere a la citación se reservarán las actuaciones hasta que el mismo comparezca.

Si el afiliado diere cumplimiento a la citación o se presentara posteriormente, en primer lugar se lo efectuará un psicodiagnóstico completo; el informe deberá contener en sus conclusiones las aptitudes del afiliado para capacitarse en la realización de tareas acordes con su minusvalía psicofísica. Asimismo si la comisión médica lo considerare oportuno podrá solicitar la colaboración de médicos especialistas en la afección que padezca el afiliado.

Si con los antecedentes aportados por el afiliado y

la revisión practicada al mismo por los médicos éstos no estuvieran en condiciones de dictaminar, la comisión médica deberá en ese mismo momento: a) Indicar los estudios diagnósticos necesarios que deben practicarse al afiliado; b) Concertar con los profesionales que los efectuarán el lugar, fecha y hora en que el afiliado deberá concurrir a practicarse los mismos; c) Extender las órdenes correspondientes; d) Entregar dichas órdenes al afiliado con las indicaciones pertinentes; e) Fijar nueva fecha y hora, para una segunda revisión del afiliado, y f) Dejar constancia de lo actuado en un acta que suscribirá el afiliado y los médicos designados por los interesados, si concurrieran.

Los estudios complementarios serán gratuitos para el afiliado y a cargo de la comisión médica, al igual que los de traslado del afiliado para practicarse los estudios complementarios y asistir a las citaciones de la comisión médica, cuando estuviera imposibilitado de movilizarse por sus propios medios. Estos gastos se financiarán conforme a los estipulados en el artículo 51. El afiliado podrá realizar los estudios solicitados y los que considere pertinentes para aportar a la comisión médica, con los profesionales que él designó, pero a su costa. Ello no lo releva de la obligación de practicárselos conforme las indicaciones de la comisión médica.

Si el afiliado no concurriera ante la comisión médica a la segunda revisión o lo hiciere sin los estudios complementarios solicitados por la misma se reservarán las actuaciones hasta que se presente nuevamente con dichos estudios, en cuyo caso se le fijará nueva fecha de revisión dentro de los diez (10) días corridos siguientes.

Si el afiliado concurriera ante la comisión médica con los estudios complementarios solicitados, la comisión médica dentro de los diez (10) días siguientes, deberá emitir dictamen considerando verificados, o no los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 48, conforme las normas a que se refiere el artículo 52. Este dictamen deberá ser notificado dentro de los tres (3) días corridos al afiliado, a la administradora a la cual el afiliado se encuentra incorporado, a la compañía de seguros vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro previsto en el artículo 99 o a la ANSES en los casos del artículo 91 *in fine*.

En el supuesto de considerar verificados en el afiliado dichos requisitos por parte de la comisión médica, el trabajador tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez a partir de la fecha en que se declare la incapacidad. En este caso el dictamen deberá indicar el tratamiento de rehabilitación psicofísica y de recapacitación laboral que deberá seguir el afiliado. Dichos

tratamientos serán gratuitos para el afiliado y si éste se negare a cumplirlos en forma regular, percibirá el setenta por ciento (70 %) del haber de este retiro.

En caso de existir tratamientos médicos curativos de probada eficacia para la curación de la o las afecciones invalidantes del afiliado, la comisión médica los prescribirá. Si el afiliado se negare a someterse a ellos o no los concluyera sin causa justificada, será suspendido en la percepción del retiro transitorio por invalidez. Estos tratamientos también serán gratuitos para el afiliado.

Si la comisión médica no emitiera dictamen en el plazo estipulado, el afiliado tendrá derecho al retiro transitorio por invalidez hasta tanto se pronuncie la comisión médica.

El afiliado, la administradora a la cual se encuentre incorporado, la compañía de seguros vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro previsto en el artículo 99 y la ANSES, podrán designar un médico para estar presentes y participar durante los actos que realice la comisión médica para evaluar la incapacidad del afiliado. Los honorarios que los mismos irroguen serán a cargo de los proponentes. Estos profesionales tendrán derecho a ser oídos por la comisión médica, presentar los estudios diagnósticos realizados a su costa y una síntesis de sus dichos será volcada en las actas que se labren, las que deberán ser suscrita por ellos, haciéndose responsables de sus dichos y opiniones, pero no podrán plantear incidencias en la tramitación del expediente.

La comisión médica informará toda actuación realizada a la administradora en la cual estuviera incorporado el afiliado, a su aseguradora y a la ANSES.

3. Actuación ante la comisión médica central.

Los dictámenes que emitan las comisiones médicas serán recurribles ante una comisión médica central por: a) El afiliado; b) La administradora a la cual el afiliado se encuentre incorporado; c) La compañía de seguros de vida con la cual la administradora hubiera contratado el seguro establecido en el artículo 99; d) La ANSES. Bastará para ello con hacer una presentación dentro de los cinco (5) días de notificado el dictamen consignando que se apela la resolución notificada.

En cuanto a las modalidades y plazos para la actuación de esta instancia, rige íntegramente lo dispuesto en el procedimiento establecido para las comisiones médicas, fijándose un plazo de 48 horas desde la finalización del plazo de apelación, para que la comisión médica remita las

actuaciones a la comisión médica central.

4. Procedimiento ante la Cámara Nacional de Seguridad Social

Las resoluciones de la comisión médica central serán recurribles; por ante la Cámara Nacional de Seguridad Social por las personas indicadas en el punto 3 del presente artículo y con las modalidades en él establecidas.

La comisión médica central elevará las actuaciones a la Cámara dentro de las 48 horas de concluido el plazo para interponer la apelación.

La Cámara deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días de recibidas las actuaciones por la comisión médica el siguiente procedimiento: a) Inmediatamente de recibidas las actuaciones, dará vista por diez (10) días al cuerpo médico forense para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado en los términos del inciso a) del artículo 48, y conforme las normas a que se refiere el artículo 52; b) En casos excepcionales y suficientemente justificados el cuerpo médico forense podrá someter a nueva revisión médica al afiliado y solicitarle nuevos estudios complementarios, los que deberán concluirse en diez (10) días; c) Del dictamen del cuerpo médico forense se dará vista al recurrente y al afiliado por el término de cinco (5) días para que aleguen sobre el mérito de las actuaciones y pruebas producidas; d) Vencido dicho plazo, la Cámara dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes.

Los horarios y gastos que irroque la apelación ante la Cámara Nacional de Seguridad Social serán soportados por el recurrente vencido.

5. Efecto de las apelaciones

Las apelaciones en estos procedimientos serán con efecto devolutivo.

6. Fondo para tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral.

Créase un fondo para tratamiento de rehabilitación psicofísica laboral constituido por los recursos que a tal efecto determine el Poder Ejecutivo nacional, y el treinta por ciento (30 %) del haber de retiro transitorio por invalidez que se les descontará a los afiliados que no cumplan regularmente los tratamientos de rehabilitación o capacitación laboral prescritos por la comisión médica.

Este fondo será administrado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y destinado exclusivamente para organizar los programas para implementar los tratamientos prescritos por las comisiones médicas.

Sin perjuicio de ello las compañías de seguros de vida podrán, con autorización de la comisión médica correspondiente, sustituir o complementar el tratamiento indicado con otro u otros a su exclusivo cargo.

Dictamen definitivo por invalidez

Art. 50. -. Los profesionales e institutos que llevan adelante los tratamientos de rehabilitación psicofísica y capacitación laboral, deberán informar, en los plazos que establezcan las normas reglamentarias, la evolución del afiliado a las comisiones, médicas.

Cuando la comisión médica conforme los informes recibidos, considere rehabilitado al afiliado, procederá a citar al afiliado a través de la administradora y emitirá un dictamen definitivo revocando el derecho a retiro transitorio por invalidez. Transcurridos tres (3) años desde la fecha del dictamen transitorio, la comisión médica deberá citar al afiliado a través de la administradora, y procederá a la emisión del dictamen definitivo de invalidez que ratifique el derecho al retiro definitivo por invalidez o lo deje sin efecto en un todo de acuerdo con los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 48 y conforme las normas a que se refiere el artículo 52. Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente por dos (2) años más si la comisión médica considerare que en dicho plazo se podrá rehabilitar al afiliado.

El dictamen definitivo será recurrible por las mismas personas y con las mismas modalidades y plazos que las establecidas para el dictamen transitorio

Comisiones médicas. Integración y financiamiento

Art. 51.. Las comisiones médicas y la comisión médica central estarán integradas por tres (3) médicos que serán designados por concurso público de oposición y antecedentes por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Contarán, con la colaboración de personal profesional, técnico y administrativo necesario.

Los gastos que demande el funcionamiento de las mencionadas comisiones serán financiados por las administradoras en conjunto, en la proporción que corresponda según el número de afiliados que soliciten retiro por invalidez en cada una de ellas. Las normas reglamentarias determinarán los procedimientos aplicables a tal fin.

Normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez

Art. 52. -. Las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez a que se refiere el artículo 48 inciso a) estarán contenidas las en el decreto reglamentario de la presente ley.

Las normas deberán contener: a) Pruebas y estudios diagnósticos que deban practicarse a las personas, conforme las afecciones denunciadas o detectadas; b) El grado de invalidez por cada una de las afecciones diagnosticadas; c) El procedimiento de compatibilización de los mismos a fin de determinar el grado de invalidez psicofísica de la persona; d) Los coeficientes de ponderación del grado de validez psicofísica conforme el nivel de educación formal que tengan las personas; e) Los coeficientes de ponderación del grado de invalidez psicofísica conforme la edad de las personas. De la combinación de los factores de los incisos c), d) y e) deberá surgir el grado de invalidez de las personas.

La autoridad de aplicación convocará a una comisión honoraria para la preparación de las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez, invitando a integrarla al decano del cuerpo médico forense, al presidente de la Academia Nacional de Medicina y a los representantes de las universidades públicas o privadas del país. Esta comisión honoraria será convocada por el secretario de Seguridad Social de la Nación, quien la presidirá dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley y deberá expedirse dentro de los seis (6) meses de constituida.

Pensión por fallecimiento. Derechohabientes

Art 53- En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de Retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:

- a) La viuda;
- b) El viudo;
- c) La conviviente;
- d) El conviviente
- e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraren

incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.

En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente interiores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por ambas convivientes.

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiera sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

Transmisión hereditaria

Art. 54- En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en el artículo precedente, se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente.

Capítulo III

Aportes e imposiciones voluntarias

Aportes

Art. 55- Los aportes personales obligatorios con destino al Régimen de Capitalización establecidos en el artículo 39, una vez transferidos conforme al procedimiento indicado en el inciso b) del artículo 36 de la presente ley, serán acreditados en las respectivas cuentas de capitalización individual de cada afiliado.

Imposiciones voluntarias

Art. 56- Con el fin de incrementar el haber de jubilación ordinaria o de anticipar la fecha de su percepción, conforme lo establece el artículo 110, el afiliado podrá efectuar imposiciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual. A opción del afiliado estas imposiciones podrán ser ingresadas a través del SUSS una vez que las normas reglamentarias establezcan los respectivos procedimientos, o bien en forma directa en la administradora.

Depósitos convenidos

Art. 57- Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en su respectiva cuenta de capitalización individual. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descripta para las imposiciones voluntarias y podrán ingresarse a la administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito que será remitido a la administradora en la que se encuentre incorporado el afiliado con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

Registro de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos

Art. 58- Las cuotas representativas de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, si bien integran la cuenta de capitalización individual, no serán consideradas en la determinación del saldo de la misma a los efectos del cálculo del capital complementario señalado en el artículo 92.

Capítulo IV

Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

Objeto

Art. 59-. Las administradores tendrán como objeto único y exclusivo:

- Administrar un fondo que se denominará fondo de jubilaciones y pensiones;
- Otorgar las prestaciones y beneficios que establece la presente ley.

Cada administradora podrá administrar solamente un fondo de jubilaciones y pensiones, debiendo llevar su propia contabilidad separada de la del respectivo fondo.

Las administradoras no podrán formular ofertas complementarias fuera de su objeto, ni podrán

acordar sorteos, premios u otras formas que implicaren un medio de captación indebido de afiliaciones.

Inhabilitaciones.

Art. 60. - No podrán ser directores, administradores, gerentes ni síndicos de una administradora:

- a) Los afectados por las habilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 264 y 286 de la Ley de Sociedades, ni los inhabilitados por aplicación del inciso 5 del artículo 41 de la ley 21.526;
- b) Los que por decisión firme de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno, administración y control de entidades financieras o compañías de seguros;
- c) Los que hayan sido condenados por delitos cometidos con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe pública o por delitos comunes, excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido otro tiempo igual al doble de la condena y los que se encuentren sometidos a prisión preventiva por esos mismos delitos, hasta su sobreseimiento definitivos; los inhabilitados para el uso de las cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un año después de su rehabilitación; los que hayan sido sancionados como directores, administradores o gerentes de una sociedad declarada en quiebra, mientras dure su inhabilitación.

Denominación

Art 61- La denominación social de las administradoras deberá incluir la frase "Administra dora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones" o la sigla "AFJP", quedando vedado consignar en la misma: a) Nombres de personas físicas existentes, b) Nombres o siglas de personas jurídicas existentes o que hubieren existido en el lapso de cinco (5) años anteriores a la vigencia de la presente ley, c) Nombres de entidades extranjeras que actúen en ramas financieras, aseguradoras, de administración de fondos u otras similares, d) Nombres de fantasía que pudieran inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad. En los casos de apartados c) y d), corresponderá a la Superintendencia de

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones resolver, en función de las normas reglamentarias que se dicten, sobre la procedencia de la denominación que se pretende asignar a una administradora.

Requisitos para la autorización. Procedimiento

Art 62. -. Las administradoras de fondos de Jubilaciones y Pensiones y autorizadas a administrar fondos de jubilaciones y pensiones y otorgar los beneficios y servicios que establece esta ley, cuando reúnan las siguientes condiciones y se ajusten al procedimiento que en el presente artículo se estatuyen:

1. Condiciones:

- a) Se hayan constituido bajo las formas jurídicas mencionadas en el artículo 40;
- b) Demuestren la integración total del capital mínimo a que se refiere el artículo 63 y del encaje a que se refiere el artículo 89;
- c) Se verifique que sus directores, administradores, gerentes y síndicos no se encuentren inhabilitados conforme a lo normado por el artículo 60 de esta ley y éstos hayan presentado un detalle completo de su patrimonio personal;
- d) Se acredite el cumplimiento o de los niveles de idoneidad técnica para la conducción y administración, empresaria, de la calidad de organización para el cumplimiento de su objetivo, existencia de un ámbito físico para el desarrollo de sus actividades, sistema de comercialización, y toda otra información que demuestre la viabilidad económico-financiera del proyecto.

2. Procedimiento:

Cuando se presentara ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones una solicitud de autorización, ésta se limitará a verificar si la documentación acompañada acredita los requisitos exigidos en los incisos a) al d) del apartado 1, así como también habrá de obtener los informes de los organismos pertinentes a fin de verificar lo prescripto en el inciso c) del apartado de referencia, debiendo dichos datos ser proporcionados dentro de los quince (15) días de haber sido requeridos.

Dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud y producidos los informes mencionados precedentemente, el superintendente deberá dictar una resolución fundada, dando curso al pedido o denegando el mismo.

La resolución que denegara la autorización

contendrá una relación completa, precisa y circunstanciada de todos los requisitos que se consideran no cumplimentados con la documentación acompañada y/o con los informes producidos. La solicitante podrá elevar nuevo pedido de autorización adjuntando nueva documentación que acredite los requisitos no probados y/o sustituyendo los directores, administradores, gerentes o síndicos inhabilitados.

En este supuesto regirán el procedimiento indicado en el segundo párrafo del apartado 2.

El superintendente no podrá denegar la autorización solicitada, si ello no obedeciere a la falta de acreditación de los requisitos exigidos por esta ley y las restantes condiciones que fijaren las normas reglamentarias.

Capital mínimo

Art. 63. -. El capital mínimo necesario para la constitución de una administradora será de tres millones de pesos (\$ 3.000.000) el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo, al momento de la constitución. El capital mínimo exigido podrá ser modificado por resolución de la autoridad de contralor de acuerdo con el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias.

Todo capital inicial superior al mínimo, deberá integrarse dentro del plazo establecido en la Ley de Sociedades Comerciales.

Si el capital mínimo exigido de la administradora se redujere por cualquier causa, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres (3) meses de producido el hecho. En caso contrario la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones procederá a revocar la autorización para funcionar y la liquidación de la administradora.

La reintegración del capital mínimo deberá ser efectuada por la administradora, en el plazo señalado sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control.

Además del capital mínimo exigido, la administradora deberá constituir el encaje establecido en el artículo 89

Publicidad

Art. 64.. Las administradoras sólo podrán realizar publicidad a partir de la fecha que a tal efecto establezcan las normas reglamentarias y siempre que haya sido dictada la resolución que autorice su funcionamiento como administradora de fondos de jubilaciones y pensiones.

Toda publicidad o promoción por parte de las administradoras deberá estar de acuerdo con las normas generales que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones fija a tal efecto. La información deberá ser veraz y oportuna, y no inducir a equívocos ni confusiones, ya sea en cuanto a las características patrimoniales de la administradora o a los fines, fundamentos y beneficios del sistema

Información al público.

Art. 65- Las administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar de fácil acceso al público, la siguiente información escrita y actualizada:

1. Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de los directores, administradores, gerentes y síndicos.
2. Balance general del último ejercicio, estados de resultados y toda otra información contable que determine la autoridad de aplicación.
3. Valor del fondo de jubilaciones y pensiones, del fondo de fluctuación a que se refiere el artículo 87 y del encaje.
4. Valor de la cuota del fondo de jubilaciones y pensiones.
5. Esquema e importe de las comisiones vigentes.
6. Composición de la cartera de inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones y nombre de las cajas de valores y bancos donde se encuentren depositados los títulos, y de la compañía de seguros vida con la que hubiera contratado el seguro referido en artículo 99 de esta ley.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, o citando cualquier acontecimiento externo e interno pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

Información al afiliado o beneficiario

Art. 66- La administradora deberá enviar periódicamente a cada uno de sus afiliados o beneficiarios, a su domicilio y al menos cada cuatro (4) meses, la siguiente información referente a la composición del saldo de su cuenta de capitalización individual:

1. Número de cuotas registradas al inicio del período que se informa.
2. Tipo de movimiento, fecha e importe en cuotas. Cuando el movimiento se refiera al débito por comisiones se deberá discriminar

en su importe el costo imputable a la prima del seguro por invalidez y fallecimiento del resto de los conceptos que forman parte de la comisión. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3. Saldo de la respectiva cuenta en cuotas.
4. Valor de la cuota al momento de cada movimiento.
5. Variación porcentual del valor de la cuota para, cada uno de los meses comprendidos en el período de información.
6. Rentabilidad del fondo.
7. Rentabilidad promedio del sistema y comisión promedio del sistema.

Esta comunicación podrá suspenderse para todo afiliado que no registra movimientos por aportes, imposiciones voluntarias o depósito convenidos en su cuenta durante el último período que deba ser informado. No obstante ello, la administradora que suspenda el envío de esta información, deberá comunicar al afiliado al menos una (1) vez al año el estado de su cuenta. Las normas reglamentarias podrán disponer la reducción de los plazos de información al afiliado.

Comisiones

Art. 67. -. La administración tendrá derecho a una retribución mediante el cobro de comisiones, las que serán debitadas de las respectivas cuentas de capitalización individual.

Las comisiones serán el único ingreso de la administradora por cuenta de sus afiliados y beneficiarios, debiendo contemplar el financiamiento de la totalidad de los servicios, obligaciones y beneficios por los que en definitiva resulte responsable, en favor de los afiliados y beneficiarios a ella incorporados, conforme lo prescribe esta ley o sus normas reglamentarias.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada administradora. Su aplicación será con carácter uniforme para todos sus afiliados o beneficiarios, salvo las situaciones que esta ley o sus normas reglamentarias prevean.

Régimen de comisiones

Art. 68- El régimen de comisiones que cada administradora fije se ajustará a las siguientes pautas:

- a) Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes, la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos; y el pago de los retiros

que se practiquen bajo la modalidad de retiro programado;

- b) La comisión por la acreditación de los aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen, como una suma fija por operación o como una combinación de ambos. No se aplicará esta comisión sobre los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º, excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo;
- c) Las comisiones por la acreditación de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos podrán establecerse sobre la base de un porcentaje sobre los valores involucrados, una suma fija por operación, o una combinación de ambos;
- d) Las comisiones por el pago de los retiros programados podrán establecerse como un porcentaje mensual sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual del beneficiario, como una suma fija por operación o como una combinación de ambos.

Bonificación de las comisiones

Art. 69. Las administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir un esquema de bonificación a las comisiones establecidas en los incisos b) y d) del artículo 68, el que no podrá admitir discriminaciones para los afiliados o beneficiarios que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados o beneficiarios sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes o retiros en la correspondiente administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como un porcentaje de quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de capitalización individual del afiliado o beneficiario según corresponda.

Vigencia del régimen de comisiones

Art. 70-. El régimen de comisiones determinado por cada administradora deberá ser informado a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la forma que señalen las normas reglamentarias, y sus

modificaciones entrarán en vigencia noventa (90) días después de su aprobación

Liquidación de una administradora

Art. 71. -. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones procederá a la liquidación de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) El capital de la administradora se redujere a un importe inferior al mínimo establecido en el artículo 63, y no se hubiere reintegrado totalmente el mismo dentro del plazo establecido;
- b) Se verifique dentro de un año calendario, déficit de encaje en más de dos (2) oportunidades, A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el artículo 90;
- c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida en el artículo 86 o recompuesto el encaje afectado dentro de los plazos fijados en el artículo 90;
- d) La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones hubiera verificado cualquier otro hecho de los que tengan previsto como sanción tal consecuencia;
- e) Hubiera entrado la administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la causa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 90.

Procedimiento de liquidación

Art. 72- Dentro de las 72 horas hábiles de llegado a conocimiento de la Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones cualquiera de los hechos enunciados en el artículo precedente que afecten a una administradora, el superintendente deberá:

- a) Dictar resolución revocando la autorización para operar en la administración de un fondo de jubilaciones y pensiones a la administradora incurso en los supuestos indicados en el artículo anterior. Esta resolución implicará la disolución por pérdida de objeto de la administradora, y conlleva la caducidad de todos los derechos de la

administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, de sus directores, representantes, gerentes y síndicos y restantes organismos de dirección, administración y fiscalización, a administrar el fondo. La resolución será comunicada fehacientemente a la administradora y a todas las entidades bancarias autorizadas por la ley 21.526 y cajas de valores donde estuvieren depositados el fondo de jubilaciones y pensiones y el fondo transitorio, debiéndose requerir a tal fin la colaboración a que estarán obligados el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores;

- b) Sustituirla en la administración del fondo de jubilaciones y pensiones que administra, de su fondo transitorio y de cualquier otro bien que perteneciera al fondo, para lo cual designará a los funcionarios de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que transitoriamente ejercerán la administración, tomando posesión de las dependencias de la administradora, y comunicando su designación conforme lo establecido en el inciso anterior y al director, representante, síndico, gerente o cualquier miembro de los organismos de dirección, administración y control que fuere hallado. Si al personal designado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones se le negare el ingreso y el cumplimiento de sus funciones, podrá solicitar el inmediato y debido auxilio de la fuerza pública a fin de garantizar que no se sustraiga o destruya documentación o información de la administradora, requiriendo la pertinente orden de allanamiento al juez competente, si por cuestiones de celeridad no lo hubiera podido hacer con anterioridad a la diligencia;
- c) Poner en conocimiento todo lo actuado al juez nacional en lo comercial, o juez federal con competencia en lo comercial según la jurisdicción correspondiente al domicilio de la administradora solicitándole:
 1. Decrete la liquidación de la administradora y la designación de un interventor liquidador de la misma.
 2. Trabe embargo sobre todos los bienes de la administradora
 3. Si se diera el supuesto indicado en el apartado siguiente deberá solicitar también se decrete la inhibición general de los bienes de los directores, representantes, síndicos,

gerentes y de todo otro integrante de los organismos de dirección, administración y control de la administradora.

- d) Si hubiere indicios de haberse cometido un ilícito deberá denunciarlo ante juez federal con competencia en lo penal de la jurisdicción del domicilio de la administradora;
- e) En los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, prorrogables por resolución fundada por otros cuarenta y cinco días más, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones continuará administrando el fondo de jubilaciones y pensiones pudiendo contratar para colaborar en la administración, personal temporario, inclusive de la propia administradora liquidada. Asimismo deberá:
1. Determinar el importe que sea necesario para efectivizar las garantías establecidas en el capítulo XII de este título.
 2. La comisión que perciba en este período serán aplicables a la recomposición del fondo y al pago de los insumos indispensables para la administración del fondo.
 3. Si efectuado el procedimiento indicado en los apartados anteriores; y no se hubiera recompuesto el fondo, la superintendencia solicitará a la Secretaría de Hacienda que, en mérito a la garantía prevista en el capítulo XII, remita el importe faltante para cubrir estos objetivos, el que deberá ser enviado dentro de los cinco días.
 4. Efectivizada la garantía, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones intimará a todos los afiliados, incorporados a la administradora en liquidación lora que pasen a otra en el término de noventa días, bajo apercibimiento de proceder en la forma indicada en el segundo párrafo del artículo 43, notificando tal resolución al empleador de cada afiliado. El derecho de traspaso de los afiliados quedará suspendido hasta la recomposición del fondo al nivel de rentabilidad mínima. El decreto, reglamentario de la presente ley fijará el procedimiento de traspaso de los afiliados autónomos.

Vencido el plazo establecido en el inciso e) de este artículo cesa la intervención de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, salvo para garantizar el traspaso efectivo de las cuentas de los afiliados a la nueva administradora que hayan elegido y para representar al Estado nacional en el proceso de liquidación de la administradora.

El Estado nacional, por los aportes efectuados en virtud de la garantía efectivizada, tendrá en la liquidación de la administradora igual preferencia que los acreedores del concurso.

Las resoluciones que durante este proceso dicte la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones serán recurribles, con efecto devolutivo, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en lo comercial, según sea el domicilio de la administradora en Capital Federal o en provincias, respectivamente.

Si la liquidación de una administradora se debiera a hechos ilícitos cometidos por sus directivos, representantes gerentes, síndicos, y en general los integrantes de los organismos de dirección, administración y fiscalización, quienes lo hayan cometido o consentido responderán por las deudas de la administradora con sus bienes personales.

Absorción

Art. 73- La disolución de dos a más administradoras que se fusionan para constituir una nueva o la disolución de una o más administradoras por absorción de otra, deberá ser autorizada por la autoridad de contralor, dando cumplimiento a los requisitos que las normas reglamentarias establezcan para estos casos.

Capítulo V

Inversiones

Criterio general. Inversiones permitidas

Art. 74.- El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en:

- a) Títulos públicos, emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda o el Banco Central de la República Argentina hasta el cincuenta por ciento (50 %) del total

- del activo del fondo;
- b) Títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades, entes autárquicos del Estado nacional y provincial, empresas del Estado nacionales, provinciales o municipales, hasta el treinta por ciento (30 %);
 - c) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a más de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40%);
 - d) Obligaciones negociables, debentures u otros títulos valores de deuda con vencimiento a menos de dos (2) años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores hasta el veinte por ciento (20 %);
 - e) Obligaciones negociables convertibles emitidas por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40 %);
 - f) Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20 %);
 - g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526, hasta el treinta por ciento (30 %) Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales.
 - h) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cincuenta por ciento (50 %).
La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias;
 - i) Acciones de empresas públicas privatizadas autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el veinte por ciento (20%);
 - j) Cuotaspertes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, hasta un veinte por ciento (20%);
 - k) Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales, hasta un diez por ciento (10%);
 - l) Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras admitidos a la cotización en mercados que la Comisión Nacional de Valores determine, hasta el diez por ciento (10 %);
 - m) Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el diez por ciento (10 %);
 - n) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40 %);
 - ñ) Títulos valores representativos de participaciones en fondos de inversión directa, de carácter fiduciario y singular, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta un diez por ciento (10 %).
 - o) Obras públicas de interés nacional o regional de infraestructuras y servicios públicos, de utilización de mano de obra intensiva o que promuevan el desarrollo de actividades productivas a largo plazo, tengan asegurada suficientemente la restitución y como mínimo las garantías de intangibilidad y rentabilidad prevista en el artículo 40. En estos casos estarán a cargo de la AFJP que cree el Banco de la Nación Argentina, hasta un treinta por ciento (30 %);
 - p) Financiamiento de viviendas nuevas garantizados por entidades financieras a través de la emisión de certificados de depósitos con fines constructivos y a tasa variable durante la etapa de construcción y de títulos, cédulas o letras hipotecarias una vez finalizadas las mismas, hasta un veinte por ciento (20 %);
 - q) Préstamos personales de corto, mediano y largo plazo a favor de los trabajadores y beneficiarios del sistema a cargo de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la Nación Argentina con los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, hasta el diez por ciento (10 %).

Las inversiones señaladas en los incisos b) al ñ) estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 76.

Las normas reglamentarias no podrán fijar límites mínimos para las inversiones señaladas en este artículo.

Corresponderá conjuntamente a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones la fijación de límites máximos para las inversiones incluidas en los incisos a) al ñ), siempre que resulten inferiores a los porcentajes establecidos en el presente artículo

Prohibiciones

Art. 75- El activo del fondo de jubilaciones y pensiones no podrá ser invertido en:

- a) Acciones de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;
- b) Acciones de compañías de seguros;
- c) Acciones de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, ya sean comunes o directo, de carácter fiduciario y singular;
- d) Acciones de sociedades calificadoras de riesgo;
- e) Títulos valores emitidos por la contratante, controladas o vinculadas a la respectiva administradora, ya sea directamente o por su integración dentro de un grupo económico sujeto a un control común;
- f) Acciones preferidas;
- g) Acciones de voto múltiple.

En ningún caso podrán las administradoras realizar operaciones de caución bursátil o extrabursátil con los títulos valores que conformen el activo del fondo de jubilaciones y pensiones, ni operaciones financieras que requieran la constitución de prendas o gravámenes sobre el activo del fondo.

Limitaciones.

Art. 76. –

- a) Las inversiones en obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetos a las siguientes limitaciones:

1. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos d), e) y f) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la

suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha sociedad y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.

2. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 74 podrá superar el cuarenta por ciento (40 %) del activo del fondo.
- b) Las inversiones en acciones correspondientes a emisores argentinos estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el capital social de la emisora y/o la proporción que sobre el activo total de fondo establezcan las normas reglamentarias.
 2. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74, podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) del activo del fondo.
 3. Las limitaciones a que se refieren los incisos anteriores podrán excederse transitoriamente, en los casos que determinen las normas reglamentarias, debiendo restablecerse los límites correspondientes en los plazos que fije la Comisión Nacional de Valores;
- c) Las inversiones en títulos valores correspondientes a emisores extranjeros estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso l) del artículo 74 correspondiente a una sola emisora podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros y/o la proporción que sobre el capital de cada sociedad o el pasivo

instrumentado en títulos valores por la misma y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.

2. En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso k) del artículo 74 correspondiente a un solo emisor podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros, establezcan las normas reglamentarias.
 3. En ningún caso la suma de las inversiones establecidas en los incisos k) y l) del artículo 74 podrá superar el diez por ciento (10 %) del activo total del fondo.
- d) Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo común de inversión establecidas en el inciso j) del artículo 74 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo común de inversiones, establezcan las normas reglamentarias;
- e) En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso g) del artículo 74 depositadas en una sola entidad financiera podrán superar la proporción que sobre el total de la inversión efectuada en depósitos a plazo fijo por el fondo, establezcan las normas reglamentarias;
- f) En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva;
- g) En ningún caso las inversiones establecidas en los incisos n) y p) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha emisora y/o la proporción que sobre el activo total del fondo establezcan las normas reglamentarias;
- h) En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo de inversión directa establecidas en el inciso ñ) del artículo 74, podrá superar la proporción que sobre el

total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio el fondo de inversión directa, establezcan las normas reglamentarias.

Fondos transitorios. Cuentas corrientes

Art. 77- El activo del fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente aplicado según lo establecido en el artículo 74 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será depositado en entidades bancarias en cuentas destinadas exclusivamente al fondo, en las que deberán depositarse la totalidad de los aportes correspondientes al régimen de capitalización de los afiliados, el producto de las inversiones, los ingresos por transferencias de otras administradoras y las transferencias del encaje.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo, y al pago de las prestaciones de las comisiones, transferencias, y traspasos que establece la presente ley.

Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526 y calificadas para recibir esta clase de depósitos por el Banco Central de la República Argentina.

El mencionado banco podrá delegar en sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5º del decreto 656/92, la calificación descrita en el párrafo precedente, dictando las normas correspondientes a dicha calificación.

Requisitos de los títulos y de los mercados

Art. 78. - Todos los títulos valores, públicos o privados, que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones, deben estar autorizados para la oferta a pública y ser transados en mercados secundarios transparentes, que brinden diariamente información veraz y precisa sobre el curso de las cotizaciones en forma pública y accesible al público en general.

La Comisión Nacional de Valores determinará los mercados que reúnen los requisitos enunciados en este artículo.

Calificaciones de riesgo

Art. 79. -. Las inversiones enunciadas en el artículo 74 incisos b), g) y k) deberán estar previamente calificadas por el Banco Central de la República Argentina como susceptibles de ser adquiridas con los recursos de los fondos de

jubilaciones y pensiones.

A los efectos de la calificación el Banco Central de la República Argentina dictará la reglamentación correspondiente, la que atenderá a las garantías, plazo, responsabilidad patrimonial de las entidades emisoras, condiciones de los mercados mundiales en cuanto a la libertad de cambios y todo otro requisito que tienda a resguardar la seguridad y aceptable rentabilidad de las inversiones.

El Banco Central de la República Argentina podrá delegar en sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del decreto 656/92, la calificación descrita en los párrafos precedentes.

Los títulos valores privados enunciados en los incisos c), d), e), f), h), j), l) y n) del artículo 74 deberán haber sido objeto de calificación previa por sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Calificadoras de Riesgo previsto en el artículo 5° del decreto 656/92.

La Comisión Nacional de Valores dictará las normas regulatorias de la actividad clasificadora prevista en esta ley en concordancia con lo establecido en el decreto 656/92.

Las normas reglamentarias deberán atender a las condiciones de garantía de los títulos, no solamente en relación a aquellas garantías especiales que pudieran contener sino también a las que responden a la organización y administración de la sociedad, la existencia de accionistas mayoritarios, enunciación de su política de inversiones y distribución de utilidades y una adecuada apertura del capital.

En el caso de los fondos comunes de inversión se tendrá especialmente en cuenta el grado de diversificación de riesgo de su cartera, así como las características especiales del fondo en cuanto a su política de inversiones.

En el caso de fondos de inversión directa se tendrá en cuenta la naturaleza y demás características de los proyectos de inversión, que a través de los mismos se encaren, así como también la solvencia técnica y económica de sus operadores y todo otro elemento relevante para evaluar el riesgo del mismo.

Las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo, serán presentadas a la Comisión Nacional de Valores para su aprobación, si ello es exigido por las normas reglamentarias, de acuerdo con las disposiciones que al respecto en ellas se incluyan.

Las inversiones establecidas en los incisos f) e i) del artículo 74 no requerirán de calificación de riesgo durante el período comprendido entre la efectiva privatización de la empresa y la fecha de presentación de los estados contables

correspondientes al primer cierre de ejercicio de la nueva sociedad. La reglamentación establecerá las normas a las cuales las carteras de los fondos de jubilaciones y pensiones deban ajustarse, una vez que las sociedades sean calificadas.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará que grado de calificación podrá acceder a integrar inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones.

Control de las inversiones

Art. 80. -. El control de las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Inversiones. Custodia. Enajenación y entrega de títulos

Art. 81- Los títulos representativos de las inversiones del fondo de jubilaciones y pensiones y del encaje deberán ser mantenidos en todo momento en un depósito cuyo titular podrá ser una caja de valores autorizada por la Comisión Nacional de Valores, o una de las entidades bancarias que el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinen.

Mensualmente, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones informará al depositario el monto mínimo que cada administradora deberá mantener en custodia.

La administradora que no cumpliera con estas disposiciones será pasible de las sanciones establecidas en esta ley y en sus normas reglamentarias. La entidad depositaria será responsable por cualquier retiro de títulos depositados en custodia si con ello deja de cumplirse con la obligación establecida en el presente artículo.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes. A los fines de la validez de la enajenación o cesión de los títulos de propiedad del fondo, la misma deberá ser efectuada mediante la entrega del título debidamente endosado en su caso, y cuando fuere nominativo no endosable o escritural, con la respectiva notificación al emisor.

Fondo de jubilaciones y pensiones

Fondo de jubilaciones y pensiones

Art. 82. - El fondo de Jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados. La administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del fondo de jubilaciones y pensiones serán inembargables y estarán sólo destinados a generar las prestaciones de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Integración

Art. 83. -. El fondo de jubilaciones y pensiones se constituirá por:

- a) La integración de los aportes destinados al Régimen de Capitalización, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos;
- b) La integración de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra administradora;
- c) La integración de los capitales complementarios y de recomposición establecidos en los artículos 92 y 94;
- d) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del capítulo V del presente título;
- e) Las transferencias de fondos provenientes del encaje en las condiciones establecidas en el artículo 90;
- f) Las transferencias de recursos provenientes del fondo de fluctuación de acuerdo con lo previsto en los artículos 88 y 90;
- g) Las integraciones del Estado nacional en las condiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 124

Deducciones

Art. 84.-. Se deducirán del patrimonio del fondo los siguientes conceptos:

- a) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones a la administradora;
- b) La transferencia de fondos a las compañías de seguro de retiro correspondientes a los afiliados que opten por la modalidad de renta vitalicia previsional;
- c) El pago de las prestaciones que se rijan por las modalidades de los incisos b) y c) del artículo 100;

- d) El pago de las sumas correspondientes a la transmisión hereditaria conforme a lo previsto por el artículo 54 de esta ley;
- e) Las transferencias de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra administradora;
- f) Las sumas correspondientes a la parte del saldo de las cuentas de capitalización individual que deban ser transferidas al SUSS en virtud de lo establecido en los artículos 126

Cuotas

Art. 85. – Los derechos de copropiedad de cada uno de los afiliados o beneficiarios sobre el fondo de jubilaciones y pensiones respectivo serán representados por cuotas de igual valor y características. El valor de las citadas cuotas se determinará en forma diaria sobre la base de la valoración establecida por esta ley y sus normas reglamentarias, de las inversiones representativas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones. Al iniciar su funcionamiento una administradora, deberá definir el valor inicial de la cuota del fondo de jubilaciones y pensiones que administre, el que se corresponderá a un múltiplo entero de diez pesos (\$ 10).

El valor promedio para un mes calendario de la cuota de un fondo se determinará dividiendo la suma del valor de la cuota de cada día del respectivo mes por el número de días del mes

Rentabilidad.

Art. 86- Se define como rentabilidad del fondo al porcentaje de variación durante los últimos doce (12) meses del valor promedio de su respectiva cuota. El cálculo de este índice y todos los que de él deriven se realizará mensualmente.

La rentabilidad promedio del sistema se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de cada fondo según el mecanismo que establezcan las normas reglamentarias. Las administradoras serán responsables de que la rentabilidad del respectivo fondo no sea inferior a la rentabilidad mínima del sistema. Esta responsabilidad se determinará en forma mensual.

Se define como rentabilidad mínima del sistema al setenta por ciento (70 %) de la rentabilidad promedio del sistema, o a la rentabilidad promedio del sistema menos dos (2) puntos porcentuales, de ambas la que fuese menor.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las administradoras que cuenten con

menos de doce (12) meses de funcionamiento.

Fondo de fluctuación

Art. 87- Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo anterior, existirá para cada fondo de jubilaciones y pensiones un fondo de fluctuación que será parte integrante de aquél.

Integración y aplicación del fondo de fluctuación

Art. 88.- El fondo de fluctuación se constituirá en forma mensual y siempre que la rentabilidad del fondo fuese positiva. Este se integrará con todo exceso de la rentabilidad del fondo sobre la rentabilidad promedio del sistema incrementada en un treinta por ciento (30 %), o la rentabilidad promedio del sistema incrementada en dos (2) puntos porcentuales, de ambas la que fuese mayor. El fondo de fluctuación estará expresado en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones y su saldo sólo tendrá los siguientes destinos;

- a) Cubrir la diferencia entre la rentabilidad mínima del sistema definida en el artículo 86 y la rentabilidad del fondo, en caso de que esta última resultare menor;
- b) Incrementar, en la oportunidad que la administradora así lo considere conveniente, la rentabilidad del fondo en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:
 1. Luego de la afectación del fondo de fluctuación, el saldo de éste deberá como mínimo representar el tres por ciento (3%) del importe del fondo de jubilaciones y pensiones.
 2. No se podrá en un mes dado desafectar más del diez por ciento (10 %) del correspondiente fondo de fluctuación.
- c) Acreditar obligatoriamente como cuotas adicionales en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, según el procedimiento que establezcan las normas reglamentarias, los fondos acumulados que superen por más de dos (2) años el cinco por ciento (5 %) del valor del fondo de jubilaciones y pensiones;
- d) Imputar al fondo de jubilaciones y pensiones el saldo total del fondo de fluctuación a la fecha de liquidación o disolución de la administradora.

Encaje

Art. 89.- Las administradoras deberán integrar y

mantener en todo momento, un activo equivalente por lo menos al dos por ciento (2 %) del fondo de jubilaciones y pensiones respectivo, el cual se denominará encaje. Este encaje nunca podrá ser inferior a tres millones de pesos (\$3.000.000) y tendrá por objeto responder a los requisitos de rentabilidades mínimas a que se refiere el artículo 86.

El cálculo del encaje se efectuará en forma semanal teniendo en cuenta el valor promedio del fondo durante los quince (15) días corridos anteriores a la fecha de cálculo.

El monto del encaje deberá ser invertido en los mismos instrumentos autorizados para el fondo y con iguales limitaciones. El encaje es inembargable.

Todo déficit del encaje no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo 90, se registrará por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto establezcan las normas reglamentarias.

Garantía de la rentabilidad mínima

Art. 90.- Cuando la rentabilidad del fondo fuere en un mes dado inferior a la rentabilidad mínima del sistema y esta diferencia no pudiere ser cubierta con el respectivo fondo de fluctuación, la administradora deberá aplicar dentro del plazo de diez (10) días de notificada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones los recursos de encaje que sean necesarios a tal efecto. Si aplicados totalmente los recursos del encaje, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del fondo, el Estado complementará la diferencia.

Se disolverá de pleno derecho, la administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del sistema o recompuesto el encaje dentro de los quince (15) días siguientes al de su afectación, debiendo liquidarse conforme lo establece el artículo 71.

Capítulo VII

Financiamiento de las prestaciones

Financiamiento

Art. 91 – Las prestaciones de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento establecidas en esta ley para el régimen de capitalización se financiarán con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado, conforme al artículo 27 de esta ley.

Respecto de la jubilación ordinaria y de la pensión por fallecimiento que de ella se derive, el

saldo da la cuenta de capitalización individual estará constituido por el capital acumulado.

Respecto del retiro por invalidez y de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, el saldo de la cuenta de capitalización individual estará constituido por el capital acumulado más el capital complementario que deba integrar la administradora según lo establecido en los artículos 92 y 93.

Capital complementario

Art. 92- A los efectos del retiro definitivo por invalidez y de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, el capital complementario estará dado por la diferencia entre: 1) el capital técnico necesario determinado conforme al artículo 93, y 2) el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado, a la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez o fecha de fallecimiento, según la prestación que corresponda. Cuando la mencionada diferencia arroje un valor negativo, el capital complementario será nulo

Capital técnico necesario

Art. 93.- El capital técnico necesario se determinará conforme a las siguientes pautas:

- a) A los efectos del retiro definitivo por invalidez, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencia del causante y de sus beneficiarios a partir de la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionados en el artículo 27;
- b) A los efectos de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, como el valor actual esperado de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión a partir de la fecha de fallecimiento del causante y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionadas en el artículo 27;

El capital técnico necesario se calculará según las bases técnicas que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Seguros de la Nación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 98

Capital de recomposición.

Art. 94.- Se define como capital de recomposición al monto representativo de los aportes con destino al régimen de capitalización, que el afiliado con derecho a retiro transitorio por invalidez hubiera acumulado en su cuenta durante el período de percepción de la prestación en forma transitoria. Las normas reglamentarias determinarán la forma de cálculo del correspondiente capital.

Responsabilidad y obligaciones

Art. 95 - La administradora será exclusivamente responsable y estará obligada a:

- a) El pago del retiro transitorio por invalidez a los afiliados declarados inválidos una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto del artículo 27 mediante el dictamen transitorio, siempre que:
 1. Los afiliados se encuentren efectuando regularmente sus aportes, de conformidad con lo que determinen las normas reglamentarias.
 2. Los afiliados que, según lo dispongan las normas reglamentarias, estuvieran cumpliendo en forma irregular con su obligación de aportar pero conservarán sus derechos;
- b) La integración del correspondiente capital complementario para los afiliados en actividad que generen pensiones por fallecimiento en las condiciones que establezcan los apartados 1 y 2 del inciso a).

Otras obligaciones de la administradora

Art. 96. -. La administradora estará también obligada frente a los afiliados comprendidos en el inciso a) del artículo precedente por los siguientes conceptos:

- a) La integración del correspondiente capital complementario cuando adquieren el derecho a percibir el retiro definitivo por invalidez, conforme al dictamen definitivo;
- b) La integración del correspondiente capital complementario cuando con motivo de su muerte generen pensiones por fallecimiento;
- c) La integración del capital de recomposición, cuando no adquieren el derecho a retiro definitivo por invalidez, conforme al dictamen definitivo.

Una vez cumplidas por parte de la administradora las obligaciones del inciso b) del artículo 95 e

incisos a) y b) de este artículo, no se podrán acreditar nuevos derechohabientes para los efectos del cálculo del capital complementario, sin perjuicio de que éstos mantengan su calidad de beneficiarios de pensión. La obligación establecida en el inciso c) deberá ser cumplida en la fecha en que el dictamen definitivo que rechaza la invalidez quede firme o bien al concluir el plazo que establezcan las normas reglamentarias.

Ingreso base. Prestación de referencia del causante. Prestación del causante

Art. 97 - Se entenderá por ingreso base el valor representativo del promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas en los cinco (5) años anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento o se declare la invalidez transitoria de un afiliado. No se tendrán en cuenta en el cálculo precedente los importes correspondientes al sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de las normas establecidas en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento de cálculo del ingreso base, el que una vez determinado deberá expresarse en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones, tomando el valor de la misma correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del fallecimiento o de declaración de la invalidez transitoria.

A efectos del cálculo del capital técnico necesario establecido en el artículo 93 y del pago del retiro transitorio por invalidez la prestación de referencia del causante o el haber de la prestación establecido en el inciso a) del artículo 28, será equivalente a:

- a) El setenta por ciento (70 %) del ingreso base, en el caso de los afiliados que se encuadren en el apartado 1 del inciso a) del artículo 95 que fallezcan o tengan derecho a percibir retiro transitorio por invalidez;
- b) El cincuenta por ciento (50 %) del ingreso base, en el caso de los afiliados que se encuadren en el apartado 2 del inciso a) del artículo 95, que fallezcan o tengan derecho a percibir retiro transitorio por invalidez.

Prestación de referencia de los beneficiarios de pensión Haber de las pensiones por fallecimiento.

Art. 98- Serán de aplicación para la determinación de las prestaciones de referencia de los

beneficiarios de pensión y del haber de las pensiones por fallecimiento, los porcentajes que en el presente artículo se detallan, los que se aplicarán de acuerdo con las siguientes normas:

1. Para la determinación de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión, establecidas en el artículo 93, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 97.
2. Para la determinación del haber de las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad, establecidas en el artículo 27, los porcentajes se aplicarán sobre la prestación de referencia del causante determinada en el artículo 97.
3. Para la determinación del haber de las pensiones por fallecimiento del beneficiario, establecidas en el segundo párrafo del artículo 27, los porcentajes se aplicarán sobre el importe de la prestación que se encontraba percibiendo el causante.

Los porcentajes a que se hace referencia serán:

- a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda, viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión;
- b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda, viudo o conviviente, cuando existan hijos con derecho a pensión;
- c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.

Además de los porcentajes enunciados se deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

1. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de la pensión del o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado en el inciso b);
2. La suma de las pensiones de todos los beneficiarios no podrá exceder al ciento por ciento (100 %) de la prestación del causante. En caso de que así ocurriera, la pensión de cada uno de los beneficiarios deberá recalcularse, manteniéndose las mismas proporciones que les correspondieran de acuerdo con los porcentajes antes señalados.

- Seguro colectivo de invalidez y fallecimiento

Art. 99- Con el fin de garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96, cada administradora deberá contratar a través de las compañías de seguros definidas en el artículo 175 una única póliza de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, mediante una licitación cuyas bases deberán

publicarse en uno de los diarios de mayor circulación en el país y del domicilio de la administradora, pudiendo ésta optar por cualquiera de las propuestas que se ajusten a las mencionadas bases.

El seguro colectivo contratado no exime en forma alguna a la administradora de las responsabilidades y obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Seguros de la Nación, dictaran en conjunto las pautas mínimas a las que deberá ajustarse la mencionada póliza de seguro. En caso de quiebra o disolución de la administradora y mientras dure el proceso de liquidación, los débitos que se practiquen a las respectivas cuentas de capitalización individual, por el concepto de comisiones según lo establecido en el artículo 67, se destinarán en primer término al pago de la prima de la póliza de seguro que establece el primer párrafo de este artículo y serán inembargables en la parte que corresponda a estos pagos. Además, subsistirá la obligación de la compañía de seguros de financiar los retiros transitorios por invalidez y los respectivos capitales complementarios o de recomposición, a la administradora en quiebra disolución o proceso de liquidación o a la administradora a la que los afiliados o beneficiarios involucrados se incorporen.

Los fondos que la administradora en quiebra, en disolución o en liquidación reciba por estos conceptos serán inembargables y no se incorporarán a la masa de acreedores.

Capítulo VIII

Modalidad de las prestaciones

Jubilación ordinaria y retiro definitivo por invalidez

Art. 100- Los afiliados que cumplan los requisitos para la jubilación ordinaria y los beneficiarios declarados inválidos mediante dictamen definitivo de invalidez, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual a fin de acceder a su respectiva jubilación o retiro por invalidez, según corresponda, de acuerdo con las modalidades que se detallan en los incisos siguientes:

- a) Renta vitalicia previsional;
- b) Retiro programado;
- c) Retiro fraccionario.

La administradora verificará el cumplimiento de

los requisitos, reconocerá la prestación y emitirá el correspondiente certificado.

Renta vitalicia previsional

Art. 101.- La renta vitalicia previsional es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que contrata un afiliado con una compañía de seguros de retiro, de acuerdo con las siguientes pautas:

- a) El contrato será suscrito en forma directa por el afiliado con la compañía de seguros de retiro de su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. Una vez notificada la administradora por el afiliado y la correspondiente compañía, quedará obligada a traspasar a ésta los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado que correspondan, siendo obligación de la administradora el control de los requisitos establecidos en el inciso c);
- b) A partir de la celebración del contrato de renta vitalicia previsional la compañía de seguros de retiro será única responsable y estará obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario desde el momento en que suscriba el contrato y hasta su fallecimiento, y a partir de éste al pago de las eventuales pensiones por fallecimiento de los derechohabientes del causante al momento en que se suscribió el contrato. El haber de las pensiones se fijará en función de los porcentajes establecidos en el artículo 98, los que se aplicarán sobre el haber de la prestación del causante;
- c) Para el cálculo del importe de la prestación a ser percibida bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, deberá considerarse el total del saldo de la cuenta de capitalización del afiliado, salvo que éste opte por contratar una prestación no inferior al setenta por ciento (70 %) de la respectiva base jubilatoria ni al importe equivalente a tres (3) veces la máxima prestación básica universal. En tal circunstancia el afiliado, una vez pagada la prima correspondiente, podrá disponer libremente del saldo excedente que quedare en la cuenta de capitalización, el que no podrá exceder en quinientas (500) veces el importe de la máxima prestación básica universal, en el mes de cálculo;
- d) Se entenderá por base jubilatoria el valor representativo del promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas en los cinco (5) años anteriores al mes en que un afiliado opte por la prestación

correspondiente. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento de cálculo del mencionado importe.

Retiro programado

Art. 102. -. El retiro programado es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que acuerda el afiliado con una administradora, de conformidad con las siguientes pautas:

- a) La cantidad de fondos a ser retirada mensualmente de la cuenta de capitalización individual, se fijará en un importe de poder adquisitivo constante durante el año y resultará de relacionar el saldo efectivo de la cuenta del afiliado a cada año, con el valor actuarial necesario para financiar las correspondientes prestaciones. El afiliado podrá optar por retirar una suma inferior a la que surja del cálculo mencionado anteriormente;
- b) La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará la forma de cálculo y bases técnicas para la determinación del valor actuarial necesario, el que deberá contemplar en virtud de los derechohabientes del afiliado definido en el artículo 53, el pago de las eventuales pensiones por fallecimiento que se pudieran generar. A tal efecto el haber de las pensiones se fijará en función de los porcentajes establecidos en el artículo 98, los que se aplicarán sobre el haber de la prestación del causante;
- c) El afiliado que, en el momento de ejercer la modalidad de retiro programado, registre un saldo tal en su cuenta de capitalización individual que le permita financiar una prestación no inferior al setenta (70%) de la respectiva base jubilatoria definida en el inciso d) del artículo 101 y a tres (3) veces el importe de la máxima prestación básica universal, podrá disponer libremente del saldo excedente, el que no podrá superar a quinientas (500) veces el importe de la máxima prestación básica universal, en el mes de cálculo.

Retiro fraccionado

Art. 103. - El retiro fraccionado es aquella modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que acuerda el afiliado con una

administradora de conformidad con las siguientes pautas:

- a) Sólo podrán optar por esta modalidad los afiliados cuyo haber inicial de la prestación, calculado según la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100, resulte inferior al cincuenta (50%) por ciento del equivalente a la máxima prestación básica universal;
- b) La cantidad de fondos a retirar mensualmente de la cuenta de capitalización individual, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber correspondiente a la máxima prestación básica universal vigente al momento de cada retiro;
- c) La modalidad de retiro fraccionario se extinguirá cuando ocurra uno de los siguientes eventos:
 1. Cuando se agote el saldo de la cuenta de capitalización individual.
 2. Cuando se produzca el fallecimiento del beneficiario, oportunidad en la cual el saldo remanente de la cuenta será entregado a los derechohabientes del causante;
- d) Los retiros fraccionarios no estarán sujetos a comisiones por parte de la administradora.

Retiro transitorio por invalidez

Art. 104. - Los afiliados declarado inválidos comprendidos en el inciso a) del artículo 95 percibirán el retiro transitorio por invalidez, el que será financiado por la administradora y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 97.

Los afiliados que, habiendo sido declarados inválidos, no se encuentran comprendidos en los apartados 1 y 2 del inciso a) del artículo 95 tendrán derecho a recibir el retiro transitorio por invalidez, según la modalidad de retiros programados, no estando ésta alcanzada por las comisiones establecidas en el inciso d) del artículo 68, o bien podrán optar en caso de cumplir los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 103 por la modalidad establecida en dicho artículo.

Pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado

Art. 105- Los derechohabientes de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de retiro programado, podrán disponer del saldo de la respectiva cuenta de capitalización individual del causante con el objeto de constituir sus haberes de pensión. La

administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá las prestaciones y emitirá los correspondientes certificados.

Las modalidades para hacer efectivas las pensiones serán una renta vitalicia previsional o un retiro programado. Mientras no se haya ejercido opción, los beneficiarios quedarán sujetos a la modalidad de retiro programado.

1. La renta vitalicia previsional es aquella modalidad de pensión que los beneficiarios de común acuerdo contratan con una compañía de seguros de retiro, en la que ésta se obliga al pago de las correspondientes prestaciones, desde el momento en que se suscribe el contrato y hasta sus respectivos fallecimientos o cesación del derecho a pensión para los hijos.

Al optar por esta modalidad, el haber de las prestaciones que resulten deberán guardar entre ellas las mismas proporciones que las establecidas en el artículo 98.

El contrato de renta vitalicia será suscrito en forma directa por los beneficiarios con la compañía de seguros de retiro de su elección, conforme a las normas y procedimientos que a tal efecto se establezcan. Una vez notificada la administradora por la correspondiente compañía, quedará obligada a traspasar a ésta los fondos de la cuenta de capitalización individual del causante.

2. El retiro programado es aquella modalidad de pensión que obtienen los beneficiarios con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual del causante.

La cantidad de fondos a ser retirada mensualmente de la cuenta de capitalización individual se fijará en un importe de poder adquisitivo constante durante el año, y resultará de relacionar el saldo efectivo de la cuenta del causante a cada año con el valor actuarial necesario para financiar las correspondientes prestaciones.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones determinará la forma de cálculo y bases técnicas para la determinación del valor actuarial necesario, el que deberá contemplar, en virtud de los derechohabientes definidos en el artículo 53, el pago de los correspondientes haberes de las prestaciones, los que deberán guardar entre sí las mismas proporciones que las establecidas en el artículo 98.

En caso de no existir beneficiarios de pensión por fallecimiento, el saldo remanente de la cuenta de capitalización individual se abonará a los herederos del causante declarados judicialmente.

- Pensión por fallecimiento de un beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia previsional

Art. 106- Producido el fallecimiento de un beneficiario de jubilación o retiro por invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, los derechohabientes deberán comunicar el fallecimiento del causante a la compañía de seguros de retiro que estuviera abonando la respectiva prestación, con el fin de que éste comience el pago de las pensiones por fallecimiento que correspondan.

Pensión por fallecimiento de un beneficiario de retiro transitorio por invalidez.

Art. 107- Producido el fallecimiento de un beneficiario de retiro transitorio por invalidez, la administradora pondrá a disposición de los derechohabientes el saldo de la cuenta de capitalización individual del causante y, en caso de corresponder en virtud de lo establecido el inciso b) del artículo 96, el correspondiente capital complementario.

Las modalidades para el otorgamiento de las prestaciones de pensión son las mismas que las establecidas en el artículo 105

Otras características

Art. 108- Los contratos de renta vitalicia previsional establecidos en los artículos 101 y 105 deberán ajustarse a las pautas mínimas que dicten en forma conjunta la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Dichas reglas deberán contemplar, entre otros aspectos los inherentes al tipo de rentas, expectativa de vida de los beneficiarios y el interés técnico. Las rentas vitalicias previsionales tendrán el carácter de irrevocables.

Todo beneficiario de jubilación o retiro definitivo por invalidez que se encuentre percibiendo su respectiva prestación bajo la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100 podrá optar por cambiar a la modalidad establecida en el inciso a) del mismo artículo.

Las normas reglamentarias establecerán los correspondientes procedimientos a seguir en tal circunstancia.

Las disposiciones del párrafo anterior serán de aplicación para los beneficiarios de pensión por fallecimiento en la medida que manifiesten entre sí común acuerdo por el cambio de modalidad.

Ajuste por incorporación de derechohabientes

Art. 109- Si una vez integrado por parte de la administradora el correspondiente capital complementario y constituido de esta forma el saldo de la cuenta de capitalización individual de un afiliado fallecido, se presentare una persona que tenga derecho a percibir pensión por fallecimiento y cuya calidad de causahabiente no se hubiere acreditado oportunamente, la administradora procederá a verificar su calidad de tal y, comprobada ésta deberá incluirla como beneficiaria de pensión.

Asimismo, si una vez iniciado el pago de las pensiones se presentare un derechohabiente cuya calidad de tal no se hubiere acreditado oportunamente, las pensiones por fallecimiento que se hubieren determinado inicialmente deberán recalcularse, con el objeto de que se incluyan todos los beneficiarios. En estos casos, las nuevas pensiones que resulten serán determinadas en función del saldo remanente de la cuenta individual del causante, o de las reservas matemáticas que mantengan las compañías de seguro de retiro en las formas que determinen las normas reglamentarias. Para ello deberán liquidarse nuevamente según la modalidad que corresponda, a la fecha en que el nuevo derechohabiente reclame la prestación. Los derechos de los nuevos beneficiarios no son retroactivos.

Capítulo IX

Jubilación anticipada y postergada

Jubilación anticipada

Art. 110- Los afiliados pertenecientes al régimen de capitalización podrán jubilarse antes de cumplir la edad establecida en el artículo 47, si reúnen los siguientes requisitos:

- a) Tener derecho a una jubilación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) de la respectiva base jubilatoria, a la que se refiere el inciso d) del artículo 101;
- b) Tener derecho a una jubilación igual o mayor a dos (2) veces el importe equivalente a la máxima prestación básica universal.

El afiliado que opte por jubilarse en forma anticipada no tendrá derecho a las prestaciones previstas en el régimen de reparto hasta que cumpla con los respectivos requisitos.

Jubilación postergada

Art. 111.- Todo afiliado que, de común acuerdo con su empleador si desarrolla actividad en relación de dependencia, decida permanecer en actividad con posterioridad al cumplimiento de la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria podrá:

- a) Postergar el inicio de la percepción de su jubilación ordinaria. En tal caso se diferirá hasta que cese en su actividad el pago de las prestaciones correspondientes al régimen de reparto; asimismo se suspenderán las obligaciones de las administradoras en lo referente a retiro por invalidez y pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, y se mantendrá la obligación de declaración e ingreso de los aportes y contribuciones previsionales, establecidos en el artículo 11;
- b) Acceder a la prestación de jubilación ordinaria. En tal caso se postergará hasta que cese en su actividad el pago de las prestaciones del régimen de reparto que pudieran corresponder y se mantendrá la obligación de declaración e ingreso de los aportes y contribuciones previsionales destinados al financiamiento del régimen de reparto, según lo establecido en el artículo 18.

Capítulo X

Tratamiento impositivo

Tratamiento impositivo de los aportes y contribuciones obligatorias

Art. 112. – La porción de la remuneración y renta destinada al pago de los aportes previsionales establecidos en el artículo 11, correspondientes a los trabajadores comprendidos en el SIJP, será deducible de la base imponible a considerar por los respectivos sujetos en el impuesto a las ganancias.

Las contribuciones previsionales establecidas en el artículo 11, a cargo de los empleadores constituirán, para ellos, un gasto deducible en el impuesto a las ganancias.

Tratamiento de las imposiciones voluntarias y depósitos convenidos

Art 113- Las imposiciones voluntarias que realice cada afiliado con destino al régimen de capitalización serán deducibles la respectiva base del impuesto a las ganancias.

Los depósitos convenidos con destino al régimen de capitalización no constituyen remuneración para ningún efecto legal y no se considerarán renta del afiliado a los efectos tributarios. Los

depósitos convenidos a que se refiere el artículo 57 de la presente ley constituyen para quien los efectúen un gasto deducible para el impuesto a las ganancias

Tratamiento de la renta del fondo.

Art. 114- Los incrementos que experimenten las cuotas de los fondos de jubilaciones y pensiones no constituirán renta a los efectos del impuesto a las ganancias.

Tratamiento de las prestaciones.

Art. 115- Las jubilaciones, retiros por invalidez, pensiones por fallecimiento y demás prestaciones otorgadas conforme a esta ley estarán sujetas en cuanto corresponda al impuesto a las ganancias.

Tratamiento de las comisiones de la administradora

Art. 116- Las comisiones a las que tiene derecho la administradora están exentas del impuesto al valor agregado.

La parte de las comisiones destinadas al pago de las obligaciones establecidas en el artículo 99 de esta ley, no constituirá retribución para la administradora a los efectos impositivos.

Capítulo XI

Organismo de supervisión y control:
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

Creación. Misión. Tipo jurídico

Art. 117- Créase la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

El control de todas las administradoras de fondos de Jubilaciones y pensiones será ejercido por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, con las funciones y atribuciones establecidas en la presente ley y su decreto reglamentario. La misión de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es supervisar el estricto cumplimiento, por parte de las entidades vinculadas a la operación del régimen de capitalización, de esta ley y de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten; procurar prevenir sus eventuales incumplimientos y actuar con rapidez y eficiencia cuando estos incumplimientos se verifiquen, en salvaguarda exclusiva y excluyente de los intereses de las personas incorporadas al SIJP como aportantes o

beneficiarios al régimen de capitalización procurando que la efectivización de la garantía estatal sea lo menos onerosa posible al erario público.

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Deberes de la Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 118. - Son deberes de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control;
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación;
- c) Fiscalizar juntamente con la ANSES el procedimiento de incorporación previsto en el artículo 130 de esta ley, y las posteriores incorporaciones y traspasos que decidan las personas incorporadas al SIJP, en cuanto a los principios establecidos en los artículos 41, 42 y 43 segunda parte;
- d) Autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones conforme lo prescripto en el artículo 62 de la presente ley, y llevar un registro de estas entidades;
- e) Considerar los planes de publicidad y promoción que presenten las administradoras, conforme lo normado por el artículo 64;
- f) Fiscalizar la correcta y oportuna imputación de los aportes en las cuentas de capitalización individual de los afiliados;
- g) Recibir las denuncias de los afiliados para las que regirá en lo pertinente lo establecido en artículo 13, inciso a) apartado 3. Cuando de la denuncia efectuada se pudiera sospechar que se están evadiendo aportes y/o contribuciones previsionales deberá remitirse copia de la denuncia a la ANSES dentro de los cinco días siguientes;
- h) Fiscalizar el cumplimiento de los deberes de información al público y a los afiliados o beneficiarios, conforme lo prescripto por los artículos 65, 66 y restantes disposiciones de esta ley;
- i) Verificar mediante inspecciones cuya frecuencia mínima determinará el decreto

- reglamentario, la exactitud y veracidad de la información que las administradoras deben brindar conforme lo normado por los artículos 65, 66 y restantes disposiciones de esta ley;
- j) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijado por cada administradora y considerar las modificaciones que al mismo soliciten introducirles las administradoras de acuerdo al procedimiento fijado en el artículo 70;
- k) Proceder a la liquidación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en los supuestos del artículo 72 de esta ley;
- l) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones y la composición de la cartera de inversiones;
- ll) Dictar las resoluciones referidas al tipo, medio y periodicidad de la información que las administradoras deberán suministrar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones;
- m) Fiscalizar las habilitaciones de los directores, síndicos, representantes y gerentes que en tal carácter se incorporen a las administradoras, conforme lo normado por el artículo 60 de esta ley, llevando un registro de antecedentes personales actualizado de los directores, síndicos, representantes y gerentes de las administradoras;
- n) Fiscalizar la constitución y mantenimiento del capital de la entidad;
- ñ) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del sistema y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada administradora;
- o) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento, la operación y la aplicación del fondo de fluctuaciones y del encaje, así como también la inversión de los recursos correspondientes al fondo de fluctuaciones y al encaje;
- p) Fiscalizar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las administradoras en la forma prescripta por el artículo 99 y establecer, en forma conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación, las normas que regulen el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, así como también las que amparen la modalidad de renta vitalicia previsional y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que emanen de los mencionados contratos;
- q) Fiscalizar el funcionamiento de las administradoras y el otorgamiento de las prestaciones a sus afiliados, velando por el fiel cumplimiento de esta ley, su reglamentación y las normas que en su consecuencia se dicten;
- r) Recaudar los fondos a que se refiere el artículo 122 y disponer de ellos;
- rr) Imponer a las administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, conforme el siguiente procedimiento:
1. Se labrará acta circunstanciada del incumplimiento verificado por la autoridad de control.
 2. Se dará traslado de la misma por 30 días a la administradora para que efectúe su descargo y produzca las pruebas que estime necesarias para avalar el mismo.
 3. Vencido dicho plazo el superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones dictará resolución fundada, absolviendo a la administradora o aplicando la sanción si correspondiera.
 4. La resolución que aplique una sanción a una administradora será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, o ante al juez Federal con competencia en lo Comercial, según sea el domicilio de la administradora en la Capital Federal o en el interior del país, dentro de los 15 días de notificada.
 5. En caso de que la sanción fuera de multa, el recurso sólo será admisible si, junto con la primera presentación ante el órgano judicial se acreditara el depósito del importe de la multa a la orden del Tribunal o Juzgado. La autoridad de control llevará un registro de las sanciones aplicadas;
- s) Labrar acta de toda inspección que realice en una administradora o ante un tercero con quien ésta opere, cuya copia será entregada a la persona física o jurídica respecto de la cual se realizó la inspección;
- t) Imponer sanciones a las administradoras mediante resolución fundada cuando no cumplan con las disposiciones legales o reglamentarias;
- u) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que establezca el decreto reglamentario, referida a la evolución del régimen de capitalización, las autorizaciones otorgadas para funcionar como administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las autorizaciones a

administradoras revocadas, las sanciones aplicadas, y la indicación, referida a cada administradora, de: capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del fondo de jubilaciones y pensiones, encaje, composición de las inversiones de cada fondo y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

Facultades de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 119- Para el Cumplimiento de sus deberes, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asigna a la autoridad de control;
- b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación;
- c) Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización respecto de cada administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, tomar las medidas y aplicar las sanciones previstas en esta ley y sus normas reglamentarias;
- d) Examinar todos los elementos atinentes a las operaciones de las administradoras y en especial requerir la exhibición general de los libros de comercio y documentación complementaria, así como de su correspondencia, hacer compulsas, arqueos y verificaciones, tanto referidos a la administradora como al fondo de jubilaciones y pensiones que administra. Las administradoras están obligadas a mantener en el domicilio de su sede central o sucursales a disposición de la Superintendencia, todos los elementos relacionados con sus operaciones y los del fondo que administran;
- e) Requerir otras informaciones que juzgue necesarias para ejercer sus funciones. La Superintendencia puede requerirles declaraciones juradas sobre hechos o datos determinados. Las obligaciones que surgen de este inciso y del anterior comprenden a los directores, síndicos, representantes y gerentes de las administradoras y de las entidades con las que esté vinculada con motivo de la administración del fondo;
- f) Requerir a toda persona física o jurídica las informaciones que resulten necesarias para el

cumplimiento de su misión aun cuando estén sujetas al control de otros organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, conforme las leyes específicas, y a exhibir sus libros de comercio y documentación complementaria a inspectores de la Superintendencia cuando ello sea necesario para determinar su situación frente al régimen de esta ley o bien establecer las condiciones en que operan con una administradora autorizada, no pudiéndosele oponer a la autoridad de control el deber de secreto o confidencialidad de la información;

- g) Asistir a las asambleas de las administradoras;
- h) Requerir órdenes de allanamientos y el debido e inmediato auxilio de la fuerza pública, para el ejercicio de sus funciones; secuestrar los documentos e información contenida por cualquier medio para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización; iniciar acciones judiciales y actuar en cualquier clase de juicios como actor o demandado, en juicio criminal como querellante y designar apoderados a estos efectos;
- i) Dictar su propio reglamento interno, determinar su estructura organizativa y el régimen de atribución de funciones a sus funcionarios;
- j) Nombrar, contratar, promover, separar y sancionar a su personal y adoptar las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento;
- k) Tendrá total facultad para el manejo de su patrimonio y para dictar su reglamento de compras y contrataciones.

Secreto de las actuaciones

Art. 120- Las actuaciones cumplidas en el ejercicio de control previsto en esta ley, son confidenciales. También son confidenciales los datos que no estén destinados a la publicidad y las declaraciones juradas presentadas. Los funcionarios y empleados están obligados a conservar fuera del desempeño de sus funciones el secreto de las actuaciones. Su incumplimiento será considerado como falta grave

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Estructura.

Art. 121- La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones estará a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional con el

título de superintendente de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

La Superintendencia estará dotada con la cantidad de funcionarios y empleados técnico-administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

No podrán integrar la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones los inhabilitados conforme el artículo 60 de esta ley, sin perjuicio de las normas de incompatibilidad vigentes. Tampoco podrán tener interés alguno en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, salvo el propio como afiliado al SIJP, ni en las calificadoras de riesgo.

Las remuneraciones y beneficios que perciba el superintendente, los funcionarios y los empleados técnico-administrativos de la Superintendencia no serán inferiores al promedio de las remuneraciones y beneficios que perciban los directores, gerentes, personal superior y empleados del 50 % de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que mejor remuneren a su personal, conforme las equivalencias por categorías que determine por resolución la Superintendencia.

Financiamiento de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 122. - Los gastos que demande el funcionamiento de la Superintendencia serán financiados con:

- a) Aportes de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Estos aportes se determinarán como un porcentaje a ser aplicado sobre el importe mensual que en concepto de aportes obligatorios perciban las respectivas administradoras;
- b) La restitución de gastos con destino a las comisiones médicas que prevé el artículo 51 de la presente, conforme el procedimiento que determinen las normas reglamentarias;
- c) Las multas aplicadas conforme a esta ley y sus normas reglamentarias;
- d) Los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico adecuado que deberá proveerle para su funcionamiento el Estado nacional. El presupuesto de la Superintendencia no integrará el presupuesto nacional.

Responsabilidad del superintendente

Art. 123- El superintendente será penalmente responsable por las acciones y omisiones indebidas en que incurriere en el ejercicio de sus obligaciones y deberes.

Todo funcionario de la Superintendencia que en violación de los deberes a su cargo causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones o a una administradora de las mismas, será penalmente responsable por dicho perjuicio.

Capítulo XII

Garantías del Estado

Garantías.

Art. 124- El Estado garantizará a los afiliados al SIJP pertenecientes al régimen de capitalización:

- a) El cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima, sobre los fondos que los afiliados o beneficiarios mantuvieran invertidos, cuando una administradora, agotados los mecanismos previstos en la ley, no pudiera cumplir con la mencionada obligación. Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados o beneficiarios se traspasen a una nueva administradora de acuerdo con lo establecido en el artículo 72;
- b) La integración en las cuentas de capitalización individual de los correspondientes capitales complementarios y de recomposición, así como también el pago de todo retiro transitorio por invalidez, en el caso de quiebra de una administradora e incumplimiento de la compañía de seguros vida;
- c) El pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento de los beneficiarios que hubieren optado por la modalidad de renta vitalicia previsional, en caso que por declaración de quiebra o liquidación por insolvencia, las compañías de seguros de retiro no dieran cumplimiento a las obligaciones emanadas de los contratos celebrados con los afiliados en las condiciones establecidas por esta ley. Esta circunstancia deberá ser certificada en forma conjunta por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La garantía a que se refiere este inciso será aplicable únicamente a las prestaciones que se hubieren financiado con fondos provenientes del régimen de capitalización y el monto máximo a garantizar mensualmente correspondiente al haber de la prestación de cada beneficiario será igual al importe dado por cinco (5) veces el equivalente a la máxima prestación básica universal.

Haber mínimo garantizado

Art. 125. - El Estado nacional garantiza el otorgamiento de haberes mínimos a los afiliados del SIJP que:

- a) Acrediten los requisitos establecidos en los incisos a) y b) y c) del artículo 19;
- b) Computen un haber total previsional al momento de acogerse a las prestaciones inferior a tres veces y dos tercios ($3 \frac{2}{3}$) el aporte medio previsional obligatorio al que se refiere el artículo 21. Se define como haber total previsional a la suma de las siguientes prestaciones:
 1. Prestación básica universal, conforme lo establece el artículo 20.
 2. Prestación compensatoria, conforme lo establece el artículo 24.
 3. Jubilación ordinaria, conforme lo establece el artículo 47, determinándose su haber según la modalidad establecida en el inciso b) del artículo 100 o la prestación adicional por permanencia prevista en el artículo 30.
- c) Manifiesten en forma expresa su voluntad de acogerse a esta garantía.

A los efectos de la mencionada garantía, el importe de la prestación básica universal correspondiente al afiliado se incrementará en la cantidad necesaria para que, adicionada al importe de la prestación compensatoria, resulte un haber igual a tres veces y dos tercios ($3 \frac{2}{3}$) el aporte medio previsional obligatorio.

El haber que otorgue el régimen previsional público como suma de la prestación básica universal más la prestación compensatoria, si la hubiere, no será inferior en ningún caso al cuarenta por ciento (40 %) del salario medio de la economía establecido por la ANSES, este indicador deberá ser de carácter oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los afiliados que optaren por la aplicación de la garantía establecida en el presente artículo, percibirán su prestación en forma directa por el SUSS.

Garantía de la prestación adicional por permanencia

Art 126- El Estado garantiza a los afiliados que hubieran ejercido la opción del artículo 30 la percepción de la prestación adicional por permanencia

Naturaleza de los créditos

Art. 127 - En los casos en que la garantía estatal hubiere operado, el Estado concurrirá en la quiebra de la compañía de seguros de retiro por el monto pagado y con privilegio general del mismo grado que los afiliados asegurados de acuerdo con el inciso a) del artículo 54 de la ley 20.091.

El crédito de los afiliados asegurados por la porción no garantizada por el Estado gozará del mismo privilegio enunciado en el párrafo anterior.

Los créditos de las administradoras contra una compañía de seguros vida, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán de privilegio general de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 de la Ley de Concursos.

Capítulo XIII

Disposiciones transitorias del régimen de capitalización

Gradualismo de edad jubilación ordinaria

Art. 128- A los efectos de cumplimentar el requisito de edad establecido en el artículo 47 para acceder a la jubilación ordinaria, se aplicará la siguiente escala:

Desde el año	Hombres		Mujeres	
	Relación de dependencia	Autónomos	Relación de dependencia	Autónomos
1994	62	65	57	60
1996	63	65	58	60
1998	64	65	59	60
2001	65	65	60	60
2003	65	65	60	60
2005	65	65	60	60
2007	65	65	60	60
2009	65	65	60	60
2011	65	65	60	60

Título IV

Vigencia

Vigencia

Art. 129- Las disposiciones del presente libro entrarán en vigor en la fecha que fije el Poder Ejecutivo, la que no podrá ser establecida en el plazo menor a nueve (9) meses, ni mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de la promulgación de esta ley.

Hasta la fecha aludida en el párrafo anterior, continuarán aplicándose las disposiciones legales vigentes hasta ese momento, con las modificaciones introducidas por la presente ley.

Proceso de incorporación

Art. 130- Las normas reglamentarias deberán prever los procedimientos, plazos y modalidades que hagan factible la incorporación a este régimen de las personas que a la fecha de su entrada en vigor quedaren comprendidas en el mismo, así como los de quienes ejerzan la opción a que se refiere el artículo 30.

Financiamiento de la Superintendencia

Art. 131- Los gastos que demanda el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones durante el período que transcurra entre la promulgación de la presenta y la fecha de entrada en vigor de este libro, se incluirán en un presupuesto transitorio y serán financiados con recursos provenientes de la ANSES.

TITULO V

Penalidades

Capítulo I

Delitos contra la integración de los fondos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Infracciones al deber de información

Art.132- Será reprimido con prisión de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b) e), o i) del artículo 12 y del artículo 43, segunda parte de la presente. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.

Infracción al deber de actuación como agente de retención o percepción, al deber de depósito y evasión de aportes y contribuciones

Art. 133- Las infracciones del empleador establecidas en el acápite, serán reprimidas conforme lo prescrito por la ley 23.771, sus modificaciones y sustituciones y el Código Penal.

Capítulo II

Delitos contra la adecuada imputación de los depósitos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

Omisión de transferencia de depósitos

Art. 134 - Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el depositario de los aportes y contribuciones que estuviera obligado por esta ley a transferirlos a los administradores de los regímenes del SIJP y no transfiera total o parcialmente los mismos, en los plazos establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias.

Capítulo III

Delitos contra la libertad de elección de AFJP

Art. 135- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que por imposición de requisitos no contemplados en la presente ley y sus normas reglamentarias para la incorporación o traspaso a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones o valiéndose de cualquier otro medio, no admitiera la incorporación a una administradora o el traspaso a otra de un trabajador obligatoria o voluntariamente incorporado al SIJP. La misma pena sufrirá quien incorporare a un trabajador a una AFJP sin contar con la pertinente solicitud suscrita por el mismo o lo diera de baja de su registro de afiliados sin observar los requisitos de la presente ley y sus normas reglamentarias. Igual pena sufrirá quien, empleado medios publicitarios o denominaciones engañosas, o falseando o induciendo error sobre las prestaciones del SIJP o de una determinada administradora, o efectuando promesas de prestaciones complementarias inexistentes o prohibidas por esta ley o sus normas reglamentarias, o mediante promesas de pagos en efectivo o de cualquier otro bien que no sean las prestaciones contempladas en esta ley, o mediante abuso de confianza, o de firma en blanco, o valiéndose de cualquier otro abuso, ardid o engaño, limitara de cualquier modo el derecho de elección del trabajador a elegir libremente la administradora de fondos jubilaciones y pensiones a que desee incorporarse.

Será reprimido con prisión de 1 a 4 años, el que engañare a un trabajador que en forma obligatoria deba incorporarse al SIJP, adhiriendo a un servicio que no sea establecido en la presente ley o vendiéndole cualquier otro servicio o producto.

Capítulo IV

Delitos contra el deber de información

Art. 136- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma, de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que omitiera hacerlo oportunamente. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días de notificada la intimación respectiva en su domicilio legal.

Información falsa

Art. 137.- Será reprimido con prisión de 3 a 8 años de prisión el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al afiliado, a la Administración Nacional de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma, de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que brindara información falsa o engañosa con el propósito de aparentar una situación patrimonial económica o financiera superior a la real, tanto de la administradora como del fondo que administra.

Capítulo V

Delitos contra un fondo de jubilaciones y pensiones Calificaciones. Perjuicio

Art. 138 -. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de la calificación de entidades financieras bancarias o de títulos valores y

depósitos a plazo fijo, que por inobservancia los deberes a su cargo, función o empleo, efectuar una calificación incorrecta causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluido su fondo transitorio y de fluctuaciones.

Autorizaciones, determinaciones, aprobaciones. Perjuicio.

Art. 139- Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de:

- Autorizar a la oferta pública o admitir su cotización en mercados de títulos valores que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones;
- Autorizar fondos comunes de inversiones que puedan ser objeto de inversión por parte de los fondos de jubilaciones y pensiones;
- Determinar los mercados que reúnan los requisitos enunciados en el artículo 78 de esta ley;
- Aprobar las calificaciones efectuadas por las sociedades calificadoras de riesgo a que se refiere el artículo 79 de esta ley;
- Autorizar cajas de valores y bancos para el depósito y custodia de inversiones de fondos de jubilaciones y pensiones que, por inobservancia los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar su actividad, efectuar una autorización, admisión, determinación o aprobación indebida, causando perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, incluidos los fondos transitorios y de fluctuaciones.

Inversiones. Depósito, custodia y control. Perjuicio

Art. 140 - Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el responsable de efectuar las inversiones de un fondo de jubilaciones y pensiones, incluido los fondos transitorios y de fluctuaciones, o de depositarlos y custodiarlos, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias, a las que deba ajustar su actividad, llevar a cabo las inversiones, depósitos o custodia de un modo indebido, causando perjuicio a un fondo.

La misma pena se aplicará al responsable del control de las inversiones, depósitos o custodia, que por inobservancia de los deberes a su cargo, función o empleo, emanados de las leyes, decretos o normas reglamentarias a las que deba ajustar a su actividad, efectuar el control indebidamente, causando perjuicio al fondo.

Figuras agravadas. Perjuicio a un fondo en beneficio propio o de un tercero.

Art. 141 – Será reprimido con prisión de 5 a 15 años quien, incurriendo en los ilícitos tipificados en este capítulo, causare un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones procurando un beneficio indebido para sí o para un tercero

Capítulo VI

Delitos por incumplimiento de las prestaciones.
Incumplimiento de las prestaciones previsionales

Art. 142 - Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los cinco días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real en el asiento de sus negocios.

Capítulo VII

Disposiciones comunes a los capítulos I a VI de este título

Aplicación del Código Penal y leyes penales específicas

Art. 143- Las disposiciones del presente Título serán aplicables siempre que la conducta no estuviese prevista con una pena mayor en el Código Penal u otras leyes penales.

Personas de existencia ideal

Art. 144- Cuando el delito se hubiera cometido a través de una persona de existencia ideal, pública o privada, la pena de prisión se aplicará a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes, que hubiesen intervenido en el hecho, o que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera.

Funcionarios públicos

Art. 145-. Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que participe de los delitos previstos en la presente ley cuando lo haga en el

ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación a funcionarios públicos, escribanos y contadores

Art. 146- Los funcionarios públicos, escribanos, contadores públicos que violación las normas de actuación de su cargo o profesión, a sabiendas informen, den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o documentación, para la comisión de los delitos previstos en este título, serán sancionados con la pena que corresponda al delito en que han participado y con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

Sanciones. Modalidad del deber de denuncia

Art. 147- El procedimiento para la aplicación de una sanción a imponer por los organismos de control pertinentes, no estará supeditado a la previa denuncia penal, ni será suspendido por la tramitación de la correspondiente causa penal.

Cuando la autoridad de control pertinente, de oficio o a instancia de un particular, tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por este Título, lo comunicará de inmediato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso que lo estimare necesario para garantizar el éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un informe adjuntando los elementos probatorios que obraren en su poder y las conclusiones técnicas a las que hubiera arribado.

En los supuestos de denuncias formuladas directamente ante el juez, sin perjuicio de las medidas de urgencia, correrá vista por treinta días a la autoridad de control a los fines dispuestos en el párrafo anterior.

Caución real

Art. 148- En todos los casos de los delitos previstos en esta ley en que procediera la excarcelación o la eximición de prisión, éstas se concederán bajo caución real, la que, cuando exista perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones, o a un afiliado, deberá guardar correlación y tener presente el monto en que, en principio, apareciere damnificado un fondo de jubilaciones o el afiliado con derecho a una prestación previsional.

Juez competente

Art. 149- Será competente la justicia federal para entender en los procesos por delitos tipificados

en el presente Título.

En la Capital Federal será competente la justicia nacional en lo penal económico.

Sanciones..

Art 150 –La pena de prisión establecida por esta ley y las accesorias en su caso, serán impuestas sin perjuicio de las sanciones que están autorizadas a aplicar los organismos de control.

Capítulo VIII

Otras sanciones

Administración Nacional de la Seguridad Social

Art. 151-. Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará a los empleados infractores las multas establecidas en la ley 17.250, según su resolución 748/92 y con los procedimientos en ella establecidos.

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 152- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones aplicará a las administradoras en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, las siguientes sanciones:

- a) Apercibimiento, por una sola vez a cada administradora y si la falta o incumplimiento fuera leve y no causara perjuicio;
- b) Multa, que se calculará en base a múltiplos de AMPO, siendo la mínima el múltiplo de 100 AMPO y la máxima de 100.000 AMPO. El importe máximo de la multa podrá elevarse hasta cinco veces el monto del perjuicio causado por el accionar ilícito al fondo de jubilaciones y pensiones, si fuera mayor. El monto de la multa se graduará conforme la gravedad de la falta. Los directores, administradores, síndicos y gerentes serán solidariamente responsables de las multas impuestas a las administradoras cuando con sus actos u omisiones hubieran dado lugar a que el hecho se produjera;
- c) Inhabilitación para el ejercicio de la dirección, administración, gerencia o sindicatura de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en forma permanente o transitoria;
- d) Revocación de la autorización para funcionar de la administradora.

La sanción será recurrible ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal o ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia penal del interior del país, según fuese el domicilio de la administradora.

En caso de multa, la sanción será recurrible previo depósito de la multa a la orden del tribunal o juzgado.

Banco Central de la República Argentina

Art. 153- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título el Banco Central de la República Argentina aplicará a las entidades financieras por él autorizadas, en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias las sanciones previstas en la ley 21.526 con los procedimientos que ella establece.

Comisión Nacional de Valores

Art. 154- Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este Título la Comisión Nacional de Valores aplicará a las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter intervengan en la oferta pública de títulos valores en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias, y de las específicas a las que deben adecuar su desenvolvimiento, las sanciones previstas en la ley 17.811 con los procedimientos que ella establece. Sustitúyese el inciso b) del artículo 10 de la ley 17.811, por el siguiente:

- b) Multa de mil (1.000) a cinco millones (5.000.000) de pesos, la que podrá elevarse hasta cinco veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio evitado como consecuencia del accionar ilícito, si fuera mayor.

Superintendencia de Seguros de la Nación

Art.155– Sin perjuicio de las penas de prisión establecidas en este título la Superintendencia de Seguros de la Nación aplicará a las compañías de seguro, en caso de incumplimiento de sus obligaciones emanadas de esta ley y sus normas reglamentarias las sanciones previstas en la ley 20.091 con los procedimientos que ella establece. Sustitúyese el primer párrafo de la segunda parte del artículo 31 (indisponibilidad de las inversiones) de la ley 20.091, por el siguiente:

hasta tanto sean cumplidas las medidas de regularización y saneamiento, la

autoridad de control establecerá sobre las inversiones, las medidas previstas en el artículo 86 de esta ley.

Sustitúyese el inciso c) del artículo 58 de la ley 20.091 por el siguiente:

c) Multa desde el 0,01 por ciento hasta el 0,1 por ciento del total de primas y recargos devengados -neto de anulaciones- en el ejercicio económico anterior que no podrá ser inferior al 0,5 por ciento del capital mínimo requerido.

Sustitúyese el segundo y tercer párrafo del artículo 86 de la ley 20.091 por el siguiente:

Cuando la resolución disponga la suspensión o la revocación de la autorización para operar en seguros, el tribunal de alzada dispondrá, a pedido de la Superintendencia de Seguros de la Nación la administración e intervención judicial del asegurador, que no recaerá en la autoridad de control.

La Superintendencia de Seguros de la Nación podrá disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de administración que específicamente indique y de celebrar nuevos contratos de seguros en los siguientes casos:

- a) Situación prevista en el artículo 31 de la ley 20.091, según el texto modificado por la presente ley;
- b) Disminución de la capacidad económica o financiera, o manifiesta desproporción entre ésta y los riesgos retenidos o déficit en cobertura de los compromisos asumidos con los asegurados;
- c) Infracción a las normas sobre egresos e ingresos de fondos y sobre depósito en custodia de títulos públicos de renta y títulos valores en general;
- d) Falta de presentación por el asegurador de los estados contables de publicidad, de situación patrimonial, o de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar en los plazos reglamentarios;
- e) Irregularidades en la constitución o actuación de los órganos de administración y fiscalización o de las asambleas;
- f) Irregularidades en la administración o contabilidad que impidan conocer la situación patrimonial de la entidad;
- g) Dificultad de liquidez que haya determinado

demora o incumplimiento de sus pagos.

Para hacer efectivas estas medidas, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará su toma de razón a las entidades públicas -nacionales, provinciales o municipales- o privadas que estime pertinentes.

Las medidas podrán levantarse para cumplir obligaciones con asegurados, para reinversión del bien de que se trate -en cuyo caso, subsistirán sobre el que entre en su reemplazo- o, cuando se compruebe que el asegurador se halla en condiciones normales de funcionamiento.

Los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra la resolución que disponga alguna de estas medidas serán al solo efecto devolutivo.

Agrégase a continuación del primer párrafo del artículo 87 de la ley 20.091 lo siguiente:

Aun cuando no estén firmes.

LIBRO II

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

TITULO I

Disposiciones complementarias

Aplicación supletoria

Art. 156- Las disposiciones de las leyes 18.037 (t.o. 1976) y 18.038 (t.o.1980), y sus complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente, de acuerdo con las normas que sobre el particular dictará la autoridad de aplicación.

Regímenes especiales

Art. 157- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que, en el término de un año a partir de la publicación de esta ley, proponga un listado de actividades que, por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares. Hasta que el poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado la ley respectiva, continúan vigentes las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los plazos allí establecidos. Asimismo continúan

vigente las normas contenidas en el decreto 1.021/74.

Los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir el beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan optado, acreditando una edad y un número de años de aporte inferiores en ambos regímenes en no más de diez años a los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el régimen general.

Los empleadores estarán obligados a efectuar un depósito adicional en la cuenta de capitalización individual del afiliado de hasta un cinco por ciento (5 %) del salario, a fin de permitir una mayor acumulación de fondos en menor tiempo. Este depósito será asimilable a un depósito convenido.

La determinación de las actividades comprendidas en regímenes especiales deberá encontrarse debidamente justificada, basándose en estudios técnicos cuando ello se considere necesario.

TITULO II

Disposiciones transitorias. Vigencia

Modificación de la ley 18.037 (t.o 1976).

Art. 158- Modifícase la ley 18.037 (t.o. 1976), en la forma que a continuación se indica:

1. Agrégase al artículo 13 el siguiente párrafo:

Establécese el monto máximo de la remuneración sujeto a aportes y contribuciones, en sesenta (60) veces el valor del aporte medio previsional obligatorio (AMPO) definido en el artículo 21 de la ley N° ... (la presente), el que se estimará en la forma indicada en el artículo 160 de la citada ley.

2. Fijánse las edades previstas en el inciso a) del artículo 28 en sesenta y dos (62) años para los varones y cincuenta y siete (57) para las mujeres.

3. Fijáse en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecido en el artículo 28 inciso b)

4. Fijáse en sesenta y siete (67) años la edad prevista en el inciso a) del artículo 31.

5. Sustitúyense los incisos 1, 2 y 3 del artículo 49 por los siguientes:

1. Si todos los servicios computados fueren en relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio. A fin de practicar la

actualización prevista en el párrafo anterior, la ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice deberá ser de carácter oficial, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En caso de jubilación por invalidez, si el afiliado no acredita un mínimo de diez (10) años de servicios, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante todo el tiempo computado.

2. Al promedio obtenido de acuerdo con el inciso anterior se aplicará uno de los siguientes porcentajes:

- a) Setenta por ciento (70 %), si al momento de cesar en la actividad el afiliado no excediera 1a edad mínima requerida por la presente ley para obtener jubilación ordinaria;
- b) Setenta y ocho por ciento (78 %), si a ese momento el afiliado excediera en un (1) año dicha edad;
- c) Ochenta por ciento (80 %), si a ese momento el afiliado excediera en dos (2) años dicha edad;
- d) Ochenta y dos por ciento (82 %), si a ese momento el afiliado excediera en tres (3) años dicha edad. Los incrementos de porcentajes previstos precedentemente no serán aplicables en el caso de reajuste del haber o transformación de la prestación del jubilado que continuare en la actividad o volviere a la misma.

3. Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte para los servicios en relación de dependencia y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria.

6. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 55 por el siguiente:

El haber máximo de las jubilaciones otorgadas conforme a esta ley será el vigente a la fecha de la promulgación de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. A partir de esta fecha dicho máximo se registrará de acuerdo con el artículo 160 de dicha ley.

Modifícase la ley 18.038 (t.o. 1980)

Art. 159- Modifícase la ley 18.038 (t.o.1980), en la

forma que a continuación se indica:

- a) Fíjase en veintidós (22) años el mínimo de servicios con aportes establecido en el artículo 16, inciso b);
- b) En el artículo 37 sustitúyese la expresión "setenta por ciento (70 %)", por "sesenta por ciento (60 %)"

Movilidad de las prestaciones

Art. 160- A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente, la movilidad de los prestaciones, se efectuará en la forma indicada en el artículo 32. Hasta la fecha de vigencia del Libro I de esta ley, se estimará el valor del AMPO en función de la información que brinde la Contribución Unica de la Seguridad Social (CUSS).

El Estado nacional garantiza el cumplimiento de los derechos previsionales adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

La movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores a la presente, que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley.

Ley aplicable a situaciones especiales

Art. 161- El derecho de los trabajadores autónomos regidos por la ley 18.038 (t.o. 1980) y sus modificatorias, que a la fecha de entrada en vigor de la presente fueran acreedores a esa prestación de conformidad con las disposiciones de la citada ley, se registrará por las normas de la misma, aunque a dicha fecha no hubieran solicitado la prestación.

El derecho a pensión de los causahabientes de los afiliados que a la fecha de entrada en vigor de esta ley fueren titulares de jubilación o tuvieran derecho a ella de conformidad con las leyes vigentes a esa fecha, se registrará por dichas leyes.

Vigencia de las leyes 21.074 y 24.013

Art. 162- Esta ley no importa modificación de las disposiciones de las leyes números 21.074 y 24.013.

Recomposición real de haberes

Art. 163- A partir del mes siguiente al de la promulgación de esta ley y de la ley de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

S.A., los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgarse por aplicación de leyes previsionales anteriores a la presente, serán recompuestos por la Secretaria de Seguridad Social hasta alcanzar en todos los casos los porcentajes de movilidad legalmente establecidos por las mismas.

Quedan excluidas de tal recomposición las prestaciones cuya movilidad está sujeta a un procedimiento distinto al del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

Forma de recomposición de los haberes

Art. 164- La recomposición se efectuará aplicando las normas con sujeción a las cuales se otorgó u otorgue la prestación.

Derogación de la ley 23.604

Art. 165- Derógase la ley 23.604. Lo dispuesto precedentemente no es aplicable en los casos en que en la fecha de entrada en vigor de la presente, el interesado hubiera ejercido en forma expresa ante el organismo previsional competente, el derecho acordado por la ley citada.

Aplicación de los bonos de consolidación de deudas previsionales

Art. 166- Los tenedores de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, incluyendo los a emitirse en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán cancelar a la par las obligaciones vencidas al 30 de junio de 1992 en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que se calculen sobre la nómina salarial que se hallaren a cargo del tenedor y que se adeuden al Sistema Unico de Seguridad Social o a las obras sociales del sector público.

Ratificación del decreto 2.741/91.

Art. 167- Ratifícase el decreto 2.741, del 26 de diciembre de 1991

Derogación de las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias.

Art. 168- Deróganse las leyes 18.037 y 18.038, sus complementarias y modificatorias, con excepción del artículo 82 y los artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto:

(Artículos 80 y 81, ley 18.037): Las cajas reconocedoras de servicios deberán transferir a la caja del organismos otorgante de la prestación, los aportes

previsionales, contribuciones patronales y las sustitutivas de estas últimas si las hubiera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente, los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los servicios reconocidos, a afectos de su amortización ante la caja otorgante. La transferencia deberá efectuarse en moneda de curso legal en forma mensual y de acuerdo al procedimiento que se determine en la reglamentación. Será organismo otorgante de la prestación cualquiera de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicio con aporte. En el caso de que existiese igual cantidad de años de servicio con aportes el afiliado podrá optar por el organismo otorgado. Queda derogada la ley 18.038, sus complementarias y modificatorias, todo con la salvedad de lo que disponen los artículos 129, 156 y 160 de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Libro III

Consejo Nacional, de Previsión Social

Creación y misión

Art. 169- Créase el Consejo Nacional de Previsión Social, el que tendrá por misión asegurar la participación de los trabajadores, empresarios y beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en el desarrollo, supervisión y perfeccionamiento de dicho sistema.

Deberes.

Art. 170- Son deberes del Consejo Nacional de Previsión Social:

- a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización y regulación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones;
- b) Evaluar el desarrollo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Considerar las iniciativas y proyectos que le sometan los sectores que representa;
- d) Proponer a las autoridades competentes normas tendientes a corregir desvíos del

- sistema y mejorar su funcionamiento;
- e) Todo otro cometido vinculado al cumplimiento de su misión.

Atribuciones y facultades

Art. 171- Para el cumplimiento de sus deberes, el Consejo Nacional de Previsión Social tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Requerir de los organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones toda información que considere conveniente para el cumplimiento de su misión;
- b) Denunciar ante las autoridades competentes todo incumplimiento de los deberes a su cargo por parte de los funcionarios y organismos de control del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- c) Efectuar por sí o por intermedio de terceros, con sujeción a las normas de contratación vigentes para el sector público, los estudios técnicos tendientes a determinar la evolución del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- d) Toda otra vinculada o que resulte necesaria para al cumplimiento de su misión y deberes.

Integración

Art. 172- El Consejo Nacional de Previsión Social estará integrado por tres (3) representantes de los trabajadores, tres (3) representantes de los empleadores y tres (3) representantes de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con los procedimientos que la reglamentación determine.

El Consejo será presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, actuando como vicepresidente el secretario de Seguridad Social.

Gastos de funcionamiento

Art. 173- La Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá a disposición del Consejo el personal que éste requiera para el cumplimiento de los cometidos asignados en el presente libro.

Los demás gastos que irroque la constitución y funcionamiento del consejo serán imputados a "Rentas generales".

Libro IV

Compañías de seguros

Capítulo I

Compañías de seguros vida

Seguro colectivo de invalidez y fallecimiento

Art. 174- Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96, las administradoras deberán en virtud de lo establecido en el artículo 99 contratar un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento para sus afiliados.

La suma asegurada en esta contratación se determinará conforme a lo establecido en los artículos 91, 92, 93, 94, 97 y 98 y en las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten.

Entidades autorizadas

Art. 175- El seguro referido en el artículo anterior estará destinado a cubrir en su totalidad el pago de las obligaciones de la administradora y sólo podrá ser suscrito por compañías aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a los seguros de personas incluidos en el capítulo III de la ley 17.418. Estas entidades aseguradoras no podrán contratar los seguros previstos en el capítulo II del presente libro.

Estas compañías deberán ser autorizadas en forma expresa por la Superintendencia de Seguros de la Nación, su razón social deberá contener necesariamente la expresión seguros vida, y estarán sujetas a las disposiciones de la ley 20.091.

Capítulo II

Seguro de retiro

Seguro de retiro

Art. 176- Se denomina seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia, y para el caso de muerte del asegurado anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los beneficiarios indicados en la póliza o a sus derechohabientes. La modalidad de renta vitalicia a que se refieren el artículo 101 y el apartado 1 del artículo 105 y denominada renta vitalicia previsional queda comprendida dentro de

la cobertura prevista en el presente artículo.

Entidades autorizadas

Art. 177- El seguro referido en el artículo anterior sólo podrá ser celebrado por entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura.

Podrán operar en otros seguros de personas pero sólo como complementarios de las coberturas de seguros de retiro.

Deberán estar autorizadas en forma expresa por la Superintendencia de Seguros de la Nación y su razón social deberá contener necesariamente la expresión seguros de retiro. Tales entidades y los contratos que constituyen su objeto están sujetos a las disposiciones de las leyes 20.091 y 17.418 en tanto no resulten modificadas en la presente.

Empresas en funcionamiento

Art. 178- Las entidades ya autorizadas para operar en el seguro de retiro a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme la resolución general 19.106 de la Superintendencia de Seguros de la Nación conservarán la autorización conferida con los alcances con que les fue otorgada, que se considerará extendida a las modalidades contempladas en el presente capítulo y normas reglamentarias.

Capítulo III

Disposiciones comunes

Incumplimientos y sanciones

Art. 179- Ante el incumplimiento de cualquiera de las exigencias a las que se encuentran sometidas las empresas de seguros a las que se refiere el presente libro, la Superintendencia de Seguros de la Nación podrá ordenar a la entidad de que se trate que se abstenga de celebrar nuevos contratos y emplazarla para que en el término de treinta (30) días regularice su situación.

De subsistir la observación al cabo de ese tiempo, la Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará a la entidad que licite públicamente, dentro del plazo improrrogable de quince (15) días la cesión total de la cartera.

La Superintendencia de Seguros de la Nación fiscalizará el proceso de cesión y la adjudicación no podrá exceder de treinta (30) días a partir del llamado a licitación.

Si la entidad no acatara la orden de cesión o si ésta fuera infructuosa, la Superintendencia de

Seguros de la Nación ordenará que se abone a los asegurados con derecho a percepción de rentas al ciento por ciento (100 %) de la reserva matemática y a los que no se encuentren en tal situación, como mínimo, el ciento por ciento (100 %) del valor de rescate, todo ello dentro del plazo y en las condiciones que fije. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la liquidación forzosa de la entidad aseguradora. En tal caso, dichos asegurados serán acreedores con privilegio especial sobre el producido de los bienes que integren las reservas y con la prelación resultante del orden anteriormente enunciado.

Inembargabilidad.

Art. 180- Los bienes de las entidades de seguros vida y de retiro serán inembargables en la medida de los compromisos de cualquier índole que tengan con sus asegurados. Esta norma no será de aplicación en caso de tratarse de embargos dispuestos en favor de asegurados en ejercicio de sus derechos derivados del contrato de seguro, y los dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 20.091.

Aprobación de planes

Art. 181- La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá un sistema de aprobación automática de los planes de los seguros previstos en el presente libro a cuyos efectos definirá previamente las pautas mínimas que deberán satisfacer las bases técnicas y demás elementos técnicos-contractuales de los planes presentados así como también las restantes condiciones que debe satisfacer el asegurador para acogerse al sistema de referencia. Para el caso de los seguros contemplados en los artículos 99, 101 y apartado 1 del artículo 105, las pautas mínimas a las que deberán sujetarse estos contratos serán dictadas en conjunto con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Tratamiento impositivo

Art. 182- Las entidades de seguros de retiro y de seguros de vida estarán sujetas al mismo tratamiento impositivo de las administradoras en las operaciones que tengan relación con la administración de inversiones correspondientes a obligaciones con sus asegurados, a sus cobranzas de primas y al pago de beneficios. En el cálculo de la base imponible del impuesto previsto en la ley 23.760 en su título I, no serán

computados aquellos activos que respondan a la inversión de los compromisos técnicos con los asegurados.

Los valores de rescate que perciba el asegurado no estarán sujetos al impuesto a las ganancias en la medida que se apliquen a la Contratación de otro seguro de retiro.

LIBRO V

Prestaciones no contributivas

Edades para la obtención de prestaciones no contributivas

Art. 183- Fíjense las siguientes edades para la obtención de las prestaciones no contributivas previstas en las normas legales que a continuación se indican, con la salvedad de lo que dispone el artículo siguiente:

Ley	Edad
13.337, artículo 2º inciso a)	70 años
13.478, artículo 9º. modificado por ley 20.267	70 años
22.430, artículo 1º	70 años
23.891, artículo 4º	60 años
24.018, artículo 3º	65 años

Escala de edades

Art. 184- Las edades establecidas en el artículo anterior se aplicarán de acuerdo con la siguiente escala:

Edades que se incrementan de			
Desde el año			
	60 a 70 años	60 a 65 años	50 a 60 años
1993	67	62	52
1994	68	63	54
1997	69	64	57
2001	70	65	60

Leyes 16.516 y 20.733: Requisito de edad

Art. 185- Para tener derecho a la prestación no contributiva establecida por las leyes números 16.516 y 20.733, es condición haber cumplido la edad de sesenta (60) años.

Sólo se podrá obtener una prestación fundada en las leyes citadas, aunque el titular hubiera sido acreedor a más de un premio de los previstos por dichas leyes.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable a las personas que obtuvieren uno de los premios aludidos en las leyes mencionadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente.

Extensión a derechohabientes

Art. 186- En los supuestos en que las leyes de prestaciones no contributivas prevean que en caso de fallecimiento del titular, el derecho acordado se extenderá a los derechohabientes que enumeren, el haber de la prestación de éstos se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98

Financiamiento de prestaciones no contributivas

Art. 187 - A partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se atenderá con fondos de "Rentas generales".

LIBRO VI

Normas sobre el financiamiento

Art. 188- En la medida en que aumente la recaudación de los recursos de la seguridad social el Poder Ejecutivo queda facultado para disminuir proporcionalmente la incidencia tributaria sobre el costo laboral, preservando un adecuado financiamiento del sistema previsional.

Art. 189- Cuando el aumento de los fondos que le corresponden a la Nación, conforme al artículo

3º, inciso a), de la ley 23.548 lo permitiera, Poder Ejecutivo podrá disponer, en la proporción que represente dicho aumento, que el importe abonado en concepto de contribución a cargo del empleador establecida por el artículo 9º de la ley 18.037, t.o 1976 y su modificación, se deduzca total o parcialmente de los mismos.

Art. 190- Anualmente, de manera conjunta con la remisión al Honorable Congreso de la Nación del presupuesto general de la administración nacional el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho informe deberá incluir el estado financiero del régimen previsional público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por lo menos cinco ejercicios presupuestarios

Art. 191- A los efectos de la interpretación de la presente ley, debe estarse a lo siguiente:

- Las normas que no fueran expresamente derogadas mantiene su plena vigencia;
- Cumplida la condición establecida en el artículo 129 de la presente ley, las referencias que la legislación vigente haga a las leyes 18.037 y 18.038, en cuanto al concepto de remuneración a aportes o contribuciones vinculadas a dicho conceptos, debe entenderse como hechas, en lo pertinente, a lo prescripto en los artículos 6º y 11 de la presente;
- Las referencias que la legislación vigente haga al concepto haberes de las prestaciones previsionales, deben entenderse como hechas a la sumatoria total de los haberes que el beneficiario perciba tanto del régimen de reparto cuanto del régimen de capitalización;
- Con la salvedad de lo prescripto en el artículo 129, esta ley entrará en vigencia al momento de su promulgación, con excepción, de los artículos 158, 159 y 165, que entrarán a regir a los sesenta días de la promulgación.

Art. 192 - Modifícase la Ley de Concurso (ley 19.551), t.o.1984, en la siguiente forma:

1.Sustituyese el primer párrafo del inciso 8, del artículo 11, por el siguiente:

8.Acompañar la documentación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones

sobre recursos de la seguridad social del personal en la relación de dependencia, actualizado al momento de la presentación.

2. Incorporáse como segundo párrafo del inciso 8 del artículo 11 el siguiente:

El cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social deberá ajustarse a las modalidades y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo en la pertinente reglamentación.

Art.193- Los trabajadores que hubiesen prestado servicio bajo dependencia un empleador acogido a las disposiciones del artículo 12 y concordantes de la ley 24.013, podrán acreditar los años trabajados con los mismos en los términos del inciso c) del artículo 19 de la presente ley.

Art.194.- Comuníquese al Poder Ejecutivo